

LA NOVENA
OLA MAGISTERIAL

Luis Hernández Navarro

© **Luis Hernández Navarro**
Junio 2016

Cuidado de la edición: Alicia Rodríguez.
Diagramación y diseño de portada: Daniela Campero.

Para Alice

“Sólo viven aquellos que luchan.”

Víctor Hugo

INTRODUCCIÓN

El despertar

Nos tardamos 16 años en despertar, pero al fin lo hicimos, dice un maestro de Campeche. Y vaya que lo hicieron. La protesta magisterial contra la reforma educativa en la entidad prendió como cerillazo en campo seco. En unos cuantos días más de 6 mil maestros incendiaron el estado.

Pero que los mentores campechanos dejaran de estar adormilados le supo a pesadilla al gobernador Fernando Ortega Bernés. El 11 de septiembre de 2013 mandó a la policía preventiva y a la policía general judicial a dispersar con golpes y gases una concentración de profesores que clamaban: ¡Diálogo/diálogo! y ¡Somos docentes/no delincuentes!

Lo sucedido en Campeche no fue la excepción. Desde que la reforma educativa fue aprobada en 2013, prácticamente en todo el país se han sucedido protestas. Apenas el pasado 15 de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), convocó a una jornada de lucha para abrogar la reforma punitiva. Es su llamado a la novena ola.

Según la teoría de la novena ola, ésta suele ser la que culmina la tormenta, la más fuerte, la más alta, la más intensa de todas. La novena ola es el nombre del más celebre cuadro del pintor ruso Iván Aivazovsky, en el que representa el mar

La novena ola magisterial

al culminar la tormenta de noche y a unos naufragos tratando de salvarse. Es, también, una novela de Ilyá Ehrenburg que trata sobre la lucha por la paz en plena guerra fría.

Para tratar de impedir la llegada de la novena ola magisterial, el gobierno federal lo ha intentado todo. Campañas de estigmatización contra el magisterio, despidos, encarcelamientos y uso de la fuerza pública. Como resultado de la represión gubernamental han sido asesinados siete profesores.

El movimiento magisterial emergente contra la reforma educativa es de largo aliento. Su estrategia de resistencia y desobediencia civil se extenderá por un periodo extenso. La novena ola ya está aquí.

El poder de la imagen, la imagen del poder

El maestro pregunta por el altavoz: ¿capital de Veracruz? Sus compañeros le responden voz en cuello: ¡Boca del Río! Vuelve a interrogarlos: ¿capital de Guerrero? Jocosos, le contestan: ¡Acapulco! Nuevamente los inquiere: ¿capital de Oaxaca? Los mentores exclaman: ¡Huatulco! Enérgicos, corean: ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Evaluar al presidente!

La consigna magisterial echa limón en la herida de los continuos yerros de Enrique Peña Nieto. El 3 de abril de 2013, durante el Foro Nacional de Educación, el jefe del Ejecutivo afirmó que Boca del Río es la capital del estado de Veracruz. Un par de meses más tarde, volvió a equivocarse, y afirmó que Tijuana es un estado.

El eslogan, repetido una y mil veces en calles y plazas, resume, por mucho, el sentir de los maestros: son víctimas de una doble moral. Mientras los recurrentes gazapos del presidente de República son tratados con indulgencia, a ellos se

les humilla públicamente, se les responsabiliza de la situación educativa del país, se les despoja de conquistas laborales básicas y se les quiere sujetar a una evaluación punitiva.

Ese sentir ante una reforma educativa lesiva a ellos, pero también a la enseñanza pública, se extiende por todo México como epidemia. En todos los estados han brotado protestas magisteriales. Aunque en unos casos son masivas y en otros no son aún mayoría, no hay una sola entidad federativa en la que no hayan realizado marchas y plantones, suspendido labores, y ocupado edificios públicos, puentes fronterizos y vialidades. La cartografía de este malestar desborda, por mucho, lo que los medios de comunicación quieren o alcanzan a registrar.

Los maestros saben por qué luchan. Afirmar que desconocen los alcances de la reforma que rechazan o que están en las calles porque fueron engañados es una canallada y una bajeza. Como dice un profesor de Los Mochis, Sinaloa: ¿Cómo no vamos a darnos cuenta de lo que quieren con esas leyes, si estamos viendo el cazo con el aceite hirviendo en el que nos van a cocinar?

Muchos mentores están convencidos de que se encuentran frente una situación límite que los obliga a protestar. Una maestra de la Ciudad de México lo explica a sus compañeros, que aún temen suspender labores ante el temor de que no les paguen completas sus quincenas, diciéndoles: Es cierto, nos van a descontar porque tenemos un empleo, pero más nos vale hacerlo porque mañana no vamos a tener un empleo del que nos descuenten.

Según otro profesor de Veracruz, la reforma es inadmisibile por la situación de incertidumbre en que los pone.

“No podemos estar con una amenaza permanente de perder el empleo, de ser vigilados, de ser puestos a prueba, de ser castigados —asegura—; es una ofensa que pongan en duda lo que hemos hecho. No podemos permitir perder nuestro sentido profesional. El gobierno tiene que entenderlo: no estamos dispuestos a dejarnos sojuzgar.”

Sujetos a una infamante campaña de desprestigio desde hace años, a los maestros les ofende lo que se dice de ellos en la prensa, la televisión y la radio, pero no consideran que deban cancelar sus protestas. Si algún caso les hace el gobierno, es debido a ellas. Además, están convencidos de que, si antes de que se movilizaran ya eran denigrados, la mayoría de los medios no va a dejar de calumniarlos porque dejen de hacerlo. Como afirma un docente de Sinaloa: Ni modo. No hay de otra. Al sordo siempre hay que gritarle.

Las protestas han hecho evidente la enorme incapacidad de políticos y comunicadores para comprender la naturaleza, la composición y el comportamiento del magisterial nacional. Cada día se anuncia el inminente fin del problema. A pesar de ello, se alternan e incrementan sus protestas en otros lugares del país.

Como estrategia de solución del conflicto, el gobierno federal optó por administrarlo y desgastarlo. Fracasó. En lugar de apagar el descontento, lo extendió y radicalizó. Finalmente, optó por la represión. Aunque de inmediato cosechó los aplausos de quienes piden mano dura, hizo evidente el fracaso de su política previa, y revivió el fantasma de Atenco. Pero tampoco le resultó. Con el uso de la fuerza, en lugar de acabar con el movimiento, precipitó su crecimiento. Los maestros han sido cobijados por una espontánea, masiva y

conmovera oleada de solidaridad popular. El malestar no parece extinguirse.

Si la imagen del poder es el poder de su imagen, dos estampas resumen el costo que el conflicto magisterial ha tenido para el gobierno federal. El 15 de septiembre de 2013, en una verdadera fiesta popular, con la explanada del Monumento a la Revolución llena a tope, miles de maestros democráticos y sus aliados dieron el grito de la resistencia y desobediencia. Una y otra vez corearon la consigna de ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Evaluar al presidente!. Entonaron, también, el Himno Nacional y rindieron honores a la bandera, como lo hacen cada lunes del calendario escolar en todas las escuelas del país. A poca distancia de allí, con el Zócalo vigilado, en un acto poco concurrido y con acarreados del Estado de México, entre abucheos y silbidos, Enrique Peña Nieto vitoreó a los héroes, canceló su participación en la cena en Palacio Nacional y se retiró para atender la emergencia de las lluvias.

El huracán

Algo nuevo acontece estos días entre los trabajadores de la educación. La explosión de su descontento en contra de la reforma educativa no es una repetición mecánica de sus viejas gestas. Su incontenible presencia en las plazas públicas de casi todo el país retoma la experiencia de sus luchas pasadas, pero no lo hace como una mera continuidad de sus movilizaciones tradicionales. En su actual ciclo de protestas hay una ruptura con su dinámica usual. Vivimos algo inédito y excepcional.

El agravio central que desencadena esta oleada salvaje de protestas es la modificación de su estatuto laboral

La novena ola magisterial

que, de la noche a la mañana, cancela conquistas centrales como la estabilidad y la permanencia en el empleo. Súbitamente, sin consultarlos, burlándose de su disposición al diálogo y la negociación, el Ejecutivo, el Pacto por México y la mayoría de los legisladores decidieron sobre las vidas de profesores y los lanzaron a la incertidumbre y a la precariedad profesional.

La aprobación de la reforma educativa estuvo precedida de una humillante campaña, intensificada a raíz del inicio de las acciones de resistencia de los docentes, que lastimó su dignidad y abrió una profunda herida. Se les ofendió y difamó. Con un odio de clase apenas disimulado, organismos empresariales y televisoras los exhibieron ante la opinión pública como trabajadores privilegiados, ignorantes, flojos y abusivos con los niños, que tienen secuestrada la enseñanza. El resentimiento que nace de esa injuria y que demanda la reparación del daño se ha convertido en un poderoso combustible que alimenta la movilización de los mentores.

La actual oleada de lucha magisterial ha tenido tres etapas distintas. La primera, de movilización escalonada de los maestros más politizados, protagonizada por la disidencia sindical histórica, que se identifican como trabajadores de la educación y diferencian claramente lo nacional-popular de lo estatal. La segunda, de desbordamiento, detonada por una exitosa convocatoria a la insurgencia magisterial, caracterizada por la incorporación a las protestas de profesores que se ven a sí mismos como servidores públicos protegidos por el Estado, identifican lo nacional-popular con lo estatal, y laboran en entidades controladas hasta hace poco por líderes sindicales institucionales. Y la tercera, la “madre de todas las

batallas”, la novena ola, iniciada el 15 de mayo de 2016, para tratar de descarrilar la puesta en marcha de la reforma y demostrar su inviabilidad en amplias regiones del país.

Antes aún de que se aprobara la nueva normatividad, la disidencia histórica la caracterizó como una contra-reforma no educativa, sino laboral y administrativa, lesiva a los intereses del magisterio. Por turnos, en sucesivas oleadas, sus bastiones principales, en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, interrumpieron labores y tomaron la calles masivamente desde abril de este año. Simultáneamente, sus activistas en el resto del país se dedicaron a esclarecer la naturaleza de las modificaciones constitucionales y a preparar las condiciones para la acción de masas.

En cambio, el magisterio institucional aguardó primero a ver el resultado de las leyes secundarias, y, cuando constató su carácter punitivo, explotó, por lo pronto, de manera localizada en algunos estados. Su reacción es producto, entre otros factores, de la indignación y el despecho. La reforma educativa rompió, de manera unilateral y arbitraria, el pacto existente entre Estado y profesores. De la noche a la mañana, el Estado los dejó en la orfandad, sujetos a las fuerzas del mercado y al autoritarismo de los funcionarios educativos. Peor aún, les declaró la guerra. Para muchos de ellos, provenientes del normalismo, que es una profesión de Estado, esto fue traición desconcertante.

El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y la designación de Juan Díaz de la Torre como su relevo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fracturaron los mecanismos de control gremial y abrieron grietas, a través de las cuales emergió en muchos estados el descontento magisterial.

La novena ola magisterial

Absolutamente subordinado al gobierno federal, sin rumbo, rebasado por los acontecimientos, Juan Díaz perdió capacidad de operación política ante la crisis en curso. Su labor se ha limitado a expresar el apoyo sindical a la reforma y a viajar por el país para advertirles a los dirigentes seccionales que deben sumarse a ella, pues, de no hacerlo, el gobierno, que cuenta con sendos expedientes en su contra, puede encarcelarlos en cualquier momento.

El huracán magisterial azota todo el país. Dos hechos son claves para elaborar una cartografía que dé cuenta de su paso y sus orígenes. Uno es la lucha nacional contra las reformas al ISSSTE en 2007, que tuvo en Chihuahua episodios ejemplares. Otro es la movilización nacional para rechazar la Alianza para a Calidad de la Educación en 2008, relevante en estados como Quintana Roo, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. Muchas de las entidades que hoy se incorporan a la protesta contra la reforma educativa fueron protagonistas claves de la resistencia en contra de ambas iniciativas.

A cada rato, distintos funcionarios y analistas anuncian el inminente fin del conflicto. No ha sucedido así. Por el contrario, cada día que pasa el movimiento crece. El tsunami magisterial es un genuino acontecimiento político.

Una cruzada moral contra el magisterio

¡Pinches güevones, pinches indios! —gritó a los maestros democráticos un grupo de tepiteños, mientras les lanzaban piedras, tubos y palos. Los docentes marchaban por el Eje 1 Norte rumbo a la Cámara de Diputados, el 17 de octubre de 2013, exigiendo la abrogación de la reforma educativa.

Esa misma tarde, los comerciantes del barrio bravo de Tepito negaron su participación en la agresión. Más aún,

acusaron a personas ajenas a su colonia de ser las responsables de esos actos.

¡Pinches indios! es un epíteto racista y clasista que con frecuencia se lanza contra los maestros que protestan en el valle de México. No es el único. Cada día, en las redes sociales, programas de radio y televisión y columnas de diversos diarios, se les insulta diciéndoles burros, nacos, prietos, borregos, acarreados, halcones, fascistas, apestosos, costeños, secuestradores, delincuentes, gatos, terroristas, ladinos y lindezas por el estilo.

Las agresiones en su contra vienen de todos lados. Haciéndose la graciosa, la actriz y cantante Mariana Seoane advirtió en el programa Sabadazo: Es una ofensa decirle maestro a alguien en este país. Y Sofía López, hija de Isidro López, alcalde panista electo de Saltillo, escribió en su Facebook: Una hora y 10 minutos de tráfico #GraciasMaestrosBuenosParaNADA. Desde entonces es conocida como #LadySaltillo.

En algunos sectores de la población existe un malestar genuino hacia los trabajadores de la educación, porque sus protestas afectan su vida cotidiana. Sin embargo, ese descontento ha sido amplificado y manipulado, difundiendo información falsa sobre su lucha y sus propósitos.

Es así como muchos de estos improperios no son hechos aislados, sino episodios de una deliberada campaña de injurias contra los trabajadores de la educación, que recuerda los peores momentos de la guerra fría. Por ejemplo, el 3 de octubre de 2013, un periódico de circulación nacional informó a ocho columnas que un informe de la PGR asociaba a la CNTE con la guerrilla del EPR. No le importó que desde

La novena ola magisterial

mayo de ese año otro diario hubiera publicado sin pruebas lo mismo, ni que desde esa fecha la Coordinadora negara las imputaciones, al igual que lo hizo el EPR. El 4 de octubre, la PGR descartó que existan vínculos entre el movimiento magisterial y la guerrilla. No se está investigando a la CNTE, afirmó el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Pese a ello, día tras día, la calumnia se difunde una y otra vez.

La cruzada moral contra el magisterio no tiene límite. Apenas el 30 de octubre de 2013, un diario nacional presentó al maestro Germán Mendoza Nube como líder del magisterio altamente radical, con formación militar subversiva y beneficiario del gobierno de Oaxaca. Curiosamente, Germán, egresado de la generación 1985 de la Normal Rural Luis Villarreal, de El Mexe, Hidalgo, fue salvajemente golpeado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca el 3 de mayo de ese año.

El peligroso subversivo debe utilizar una silla de ruedas. Quedó parapléjico en 1987, cuando fue brutalmente agredido por la policía por su trabajo de organización en comunidades chatinas. Estuvo 45 días incomunicado, bajo tortura y sin atención médica. Pasó dos años en la cárcel. En 2006, en plena lucha de la APPO, el gobernador Ulises Ruiz lo volvió a detener y lo envió al penal de Miahuatlán, sin los cuidados necesarios para que se atendiera de una severa diabetes.

El profesor Germán no oculta sus convicciones políticas. Las ventila públicamente. No se esconde. Él se asume como comunista y eso no es un delito. Pero ni él ni su fuerza política conducen a los docentes oaxaqueños o a la CNTE, por más que sean parte de su lucha. La Coordinadora no

está controlada por organización alguna; acuerda sus acciones consultándolas con sus bases. Nadie, en lo personal o como corriente, marca la línea del movimiento magisterial; el movimiento se dirige a sí mismo.

Estas calumnias no son acciones fortuitas. Son parte del clima de crispación mediática fabricado contra el magisterio disidente para crear entre la opinión pública una idea desfavorable hacia quienes se han opuesto a una reforma educativa mal hecha y peor ejecutada, y propiciar un ambiente favorable a una posible solución represiva del conflicto.

Son uno de los últimos eslabones de una cadena que Mexicanos Primero y el duopolio televisivo comenzaron a forjar mucho antes de la aprobación de la reforma educativa. Con la pretensión de asaltar la educación pública del país, los organismos empresariales han inventado, durante los últimos años, una caricatura de los maestros mexicanos sin relación alguna con la realidad.

Molesto porque los docentes democráticos no permiten que la reforma educativa aterrice, el gobierno federal ha hecho suya esta imagen deformada del magisterio. Convencido de que las protestas de los profesores provienen de una deficiente estrategia de comunicación, ha saturado televisión, radio y prensa escrita con mensajes publicitarios en favor de la reforma, que generan más animadversión que convencimiento.

El asunto es mucho más sencillo: antes de la reforma, la inmensa mayoría de los docentes aseguraba tener una gran estabilidad laboral y no le interesaba buscar empleo en otro lado. Pero la reforma educativa modificó drásticamente esa percepción. Hoy, su permanencia en el empleo y su ina-

La novena ola magisterial
movilidad se encuentran en entredicho y ellos están en las calles para conservarlos.

La nueva legislación educativa tiene como telón de fondo una caricatura de los docentes. Y cientos de miles de docentes, que la juzgan inadmisibles, han reaccionado contra ella con energía y dignidad. Lejos de doblegarlos, la cruzada moral en su contra, la falsificación de las raíces y razones de su lucha y los agravios racistas y clasistas de los que son víctimas los convencen de la necesidad de seguir adelante en defensa de su profesión y de la educación pública.

La Coordinadora

Al frente de la novena ola magisterial se encuentra la CNTE. El 17 y 18 de diciembre de 2015 cumplió 36 años de vida. Fue fundada no en la Ciudad de México, sino en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No nació como organización de activistas o de corrientes sindicales, sino como verdadera coordinación emergente de maestros de base en lucha de varios estados.

Los contingentes que le dieron vida provenían de Chiapas, Tabasco, La Laguna y Guerrero. Más adelante se agregaron masivamente trabajadores de la educación de Oaxaca, Morelos, Hidalgo y Michoacán.

A lo largo de estos 36 años, la CNTE ha tratado o visto pasar a siete presidentes de la República, 16 secretarios de Gobernación y 11 secretarios de Educación Pública, además de innumerables gobernadores. Algunos intentaron acabar con la Coordinadora, otros quisieron ningunearla pero, al final de cuentas, casi todos tuvieron que sentarse a negociar con ella.

Desde su fundación, la Coordinadora buscó democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-

ción (SNTE). Sin dar cuartel, se ha enfrentado con tres caciques: el profesor y licenciado Carlos Jonguitud Barrios, que estuvo al frente del organismo 15 años, la maestra Elba Esther Gordillo, quien lo controló durante casi 24, y a Juan Díaz de la Torre. Los tres han pretendido aniquilar a la disidencia magisterial por todos los medios posibles, incluyendo la violencia física. Les llamaban enanos celosos de la estatura de Jonguitud y lindezas por el estilo. Fracasaron.

Una parte muy importante de los líderes que dieron nacimiento a la CNTE tenían en 1979 menos de 30 años. La mayoría eran normalistas (muchos rurales), habían estudiado en los cursos de verano de la Normal Superior, y no pocos tenían licenciaturas universitarias. Varios habían desarrollado previamente militancia política de izquierda.

La CNTE nació y echó raíces en estados con importante población rural, y, en muchos casos, indígena. Los maestros que le dieron vida desarrollaron su práctica docente en regiones asoladas por la pobreza, la marginación y la discriminación étnica. Buen número de ellos provenía de esa realidad. Con mucha frecuencia se convirtieron en los intelectuales orgánicos de las comunidades.

Se entabló así una abigarrada y estrecha relación entre trabajadores de la educación, padres de familia humildes y regiones enteras del país, que, con altas y bajas, se ha mantenido hasta nuestros días. En varias entidades esos maestros han encabezado la lucha por proporcionar a los estudiantes provenientes de familias de menores ingresos desayunos calientes, uniformes y útiles escolares, al tiempo que gestionan la mejoría y el equipamiento de sus escuelas.

La novena ola magisterial

La coordinadora acordó tres grandes ejes de acción que guían su lucha: democratizar el sindicato, democratizar la educación y democratizar el país.

Desde su nacimiento, los integrantes de la CNTE han tomado las decisiones fundamentales de su movimiento y nombrado a sus representantes en asambleas representativas y de base. Su funcionamiento se caracteriza por una amplia participación de los maestros de banquillo. Esa práctica, junto con la descentralización del movimiento, ha hecho muy difícil que sus dirigentes sean cooptados por la autoridad o por el SNTE.

Por supuesto, ha habido casos en los que sus líderes se han corrompido o pasado a las filas del charrismo. Así sucedió en 1989, cuando Elba Esther Gordillo fue impuesta por Carlos Salinas como dirigente nacional del SNTE, o cuando en 2006, el gobierno de Vicente Fox sobornó a Enrique Rueda, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, en plena sublevación popular. Lo relevante de estos ejemplos es que a pesar de las traiciones, el movimiento nombró nuevos dirigentes y siguió adelante.

Todos los dirigentes nacionales de la CNTE son simultáneamente representantes de sus estados. Cuando su mandato local termina, dejan de ser líderes nacionales. Existe una rotación muy intensa de sus mandos. Incluso sus voceros duran muy poco tiempo en el cargo. En la Coordinadora no hay líderes morales, por más que se aprecie y reconozca el compromiso y la trayectoria de muchos de sus cuadros históricos.

Los militantes de la Coordinadora no disfrutan de privilegio alguno. No reciben compensación económica por su trabajo sindical. Con frecuencia deben aportar sus pro-

pios recursos para actividades gremiales y políticas. Aunque hay excepciones, desempeñan el cargo por convicción. A pesar de la presencia social que muchos de ellos tienen, es poco frecuente (aunque no inexistente) que se conviertan en diputados o que ocupen cargos de representación popular. Quienes lo han hecho, llegan a esas posiciones sólo después de terminar su encomienda sindical.

Desde hace más de 30 años, la CNTE ha elaborado propuestas de educación alternativa desde la realidad socio-económica y cultural en que sus integrantes labora. Muchos de sus integrantes son profesores altamente calificados, con estudios de posgrado.

Esta breve historia, muestra lo profundamente equivocada de la estrategia para imponer la reforma educativa del secretario de Educación, Aurelio Nuño. Pareciera que el funcionario no tiene idea de la naturaleza del movimiento al que se está enfrentando, y que da por buena la caricatura que se ha hecho de ella en medios de comunicación. La Coordinadora tiene historia, temple, tradición, arraigo en el magisterio, aliados entre los padres de familia, propuesta, cuadros y liderazgo. Por eso, sus denuncias en contra de los “privilegios que los dirigentes” buscan conservar son ridículas.

Pese al encarcelamiento de algunos de sus integrantes, del uso de la fuerza pública en su contra y del asesinato de Claudio Castillo, David Gemayel Ruiz o Antonio Vivar Díaz, la fuerza de la Coordinadora es hoy mucho mayor que hace tres años. La forma en que se trató de realizar la evaluación al desempeño docente provocó que sus simpatizantes aumentaran.

A más de 36 años de su nacimiento, con la amenaza de desprofesionalizar a los docentes y privatizar la educación pública, la insurgencia magisterial está más vigente que nunca.

CAPÍTULO I

LA BANDA DE LOS TRES ALEGRES COMPADRES

Reforma con aroma empresarial

Desde el momento en que se anunció, la reforma educativa tuvo un inocultable aroma empresarial. Por más que se trató de disimular, fue evidente que, más que devolver la rectoría de la enseñanza pública al Estado, la nueva ley le entregó a los hombres de negocios un control cada vez mayor del sector. Más que responder a consideraciones pedagógicas, los cambios al artículo tercero constitucional introdujeron a la Carta Magna la agenda y los intereses del sector patronal.

Ensoberbecidos, sin rubor alguno, el 8 de octubre de 2015, los representantes de los amos de las finanzas ventilaron públicamente su beneplácito con lo que consideran su triunfo. Ese día, durante una reunión sostenida entre el secretario de educación, Aurelio Nuño Mayer, y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y fundador y vicepresidente de Mexicanos Primero, presumió que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha retomado muchas recomendaciones de su organización.

De paso, avisaron que van por más. Gerardo Gutiérrez Candiani, en ese momento presidente del CCE a pesar de no tener empresas importantes conocidas, anunció que el sector

La novena ola magisterial

privado firmaría un convenio con la SEP para satisfacer exigencias adicionales: nuevos planes de estudio que incluyan materias como civismo, ética, inglés e incluso emprendedurismo; adopción de la educación dual, referida a la vinculada con el aprendizaje dentro de empresas privadas, y el rescate de los oficios y formación de técnicos especializados para relacionar la educación con los sectores productivos.

Es decir, no contentos con denostar al magisterio nacional y a la enseñanza pública a través de una ofensiva campaña en los medios de comunicación, de imponer atributos acordes con su visión del mundo a la educación que imparte el Estado, y de crear un régimen de excepción laboral para los maestros, los hombres de negocios anunciaron su pretensión de implantar las materias y los contenidos educativos de la enseñanza pública.

Por si fuera poco, engolosinados por quedarse con una tajada aún más grande del pastel de la enseñanza pública, comprometieron a los organismos empresariales del CCE, por voz de Gutiérrez Candiani, a participar en la escuela pública y en el programa educativo, mediante apoyos o adoptando escuelas primarias. Esto significa dar un paso más en la privatización de la enseñanza a través de las escuelas chárter.

Como para no dejar duda de la injerencia que los hombres de negocios tienen en la definición de la agenda educativa, el secretario Nuño reconoció que el sector empresarial ha sido fundamental para continuar con la aplicación de la reforma. Y, para que quedara claro quién manda, cuando en ese mismo foro los mismos patronales le demandaron aplicar la ley contra los maestros disidentes, Nuño Mayer

respondió amenazando con descontar el día a los maestros que suspendan actividades como protesta contra la norma.

Aunque no es comparable a la profundidad de la relación que mantiene con el mundo patronal, no deja de llamar la atención la cercanía que el secretario Nuño ha establecido con los dirigentes del sindicato magisterial. Tanto así que, no contento con dispensarle a Juan Díaz de la Torre los más generosos halagos, ahora le ha tomado también prestada parte de su discurso contra la disidencia del gremio.

Juan Díaz de la Torre, como se sabe, es el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por obra y gracia de Enrique Peña Nieto. Formado en las cloacas del gremio a la sombra de Elba Esther Gordillo, no dudó en traicionar a la maestra cuando ella cayó en desgracia. No hay en él ninguna credencial democrática. Y, a pesar de que carece de cédula profesional, se presenta como un profesional de la educación en toda la regla.

Pese a ello, de los negros antecedentes que carga como representante sindical, y de que cientos de miles de profesores lo repudian, Nuño Mayer no duda en presentar a Díaz de la Torre cada vez que puede como un gran líder, fuerte, moderno, cercano a los maestros, que entiende los nuevos tiempos, con visión de futuro moderno. Hasta Emilio Chauyffet fue más cuidadoso que el nuevo secretario, que trató a Díaz de la Torre como su empleado.

El secretario Nuño, no se cansa de repetir que los maestros disidentes están sometidos y engañados por sus dirigentes. Y, cada vez que puede, exhorta a los profesores a que se liberen y entiendan que la reforma educativa es en su beneficio y a no dejarse engañar para acudir a movilizaciones.

La novena ola magisterial

El exhorto del secretario, ofensivo de por sí, recuerda el esclarecido análisis sobre la táctica del magisterio democrático elaborado por Olegario Valencia, antiguo dirigente de la sección 23 de Puebla. Según él, en la disidencia se han preparado cuadros para adueñarse de la voluntad de los compañeros; mediante el contagio mental, bajo las cantinelas, marchas y canciones, quieren quitarles la ideología de Vanguardia Revolucionaria para después darles consignas que deberán seguir con toda rutina.

Sometido a los intereses empresariales, aliado a los líderes espurios del SNTE, decidido a falsificar la verdadera naturaleza del descontento del magisterio democrático que rechaza una reforma educativa que no lo es, el sargento Nuño —como fue bautizado por los maestros por su proclividad al uso de la fuerza— mostró, en muy poco tiempo, qser un dinosaurio joven. Junto al empresario Caludio X. González y a Juan Díaz de la Torre forman la banda de los tres alegres compares.

Menú a la carta

El 14 de agosto de 2013, en su cuenta de Twitter, el empresario Claudio X. González escribió, jubiloso y categórico: Ya era hora que el Ejecutivo enviara iniciativa de leyes secundarias educativas. Ahora toca al Legislativo ir a fondo para transformar el sistema. Ese mismo día, remató su regocijo con un nuevo mensaje: El arte supremo de la guerra es vencer al enemigo sin necesidad de pelear: Sun Tzu.

El beneplácito del presidente de Mexicanos Primero fue desencadenado por el anuncio del entonces secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, la tarde del 13 de

agosto, de que la Presidencia de la República enviaría esa misma noche al Congreso las iniciativas de leyes secundarias punitivas de la reforma educativa.

La cita de Sun Tzu no fue un desplante de erudición, sino algo mucho más banal: una notificación, no muy sofisticada, de que el proyecto educativo de la coalición que él representa, se había impuesto sin tener que luchar abiertamente. Sus chantajes, presiones y amenazas dieron resultado. El Ejecutivo presentó como propia la propuesta empresarial de reforma a la enseñanza, diseñada por la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económicos (OCDE) y cabildeada por las cámaras patronales.

Por supuesto, quien salió a defender y explicar las iniciativas de leyes en público no fue el gobierno federal, sino el mismo Claudio X. González. Para que no quedara duda de que la propuesta educativa es suya, el hasta hace no mucho tiempo presidente de la Fundación Televisa, dijo a Denise Merker que ya era hora de que se aprobaran leyes secundarias para evaluar la función de los profesores frente al grupo. Y detalló: Si entraste como profesor antes de la modificación al artículo tercero de la Constitución, tienes derecho a tres pruebas, si repruebas las tres se te retira del grupo y se te reubica, ya sea en el servicio público o bien dentro de la Secretaría de Educación Pública, y "si eres profesor 'nuevo' y repruebas las tres pruebas dejas el servicio público y no se te reubica en ninguna parte".

Unos cuantos días antes, el 9 de agosto, el entonces secretario Emilio Chuayffet justificó su propuesta arguyendo que busca permitir al Estado recuperar la rectoría del sistema educativo, prisionero de los poderes fácticos. Sin

embargo, la apresurada proclamación de triunfo de Claudio X. González, evidenció que la afirmación del funcionario era fallida. El Estado no recuperará la rectoría del sistema pedagógico nacional, sino que se la entregará a la iniciativa privada y a la OCDE. A partir de ahora, la agenda y el marco normativo de la educación pública estarán en manos de esos dos poderes fácticos.

Sin embargo, en lugar de reconocer que las leyes secundarias presentadas por el Ejecutivo al Congreso son un menú a la carta dictado por los intereses empresariales, Chuayffet disfrazó su sometimiento afirmando que éstas incorporan las sugerencias del magisterio democrático. Algunas —aseguró— fueron entregadas a las autoridades del Pacto por México, y evidentemente tuvimos en cuenta algunas de esas propuestas. Por supuesto, sus palabras son falsas. El secretario copió el mismo guión utilizado por Enrique Peña Nieto, para legitimar la privatización de la industria petrolera usando la figura de Lázaro Cárdenas. Lo que se incorporó a las leyes secundarias fueron palabras e ideas de la CNTE de manera aislada y descontextualizada, dejando fuera lo central de su argumentación.

Las iniciativas de leyes secundarias presentadas por el Ejecutivo son un asalto a las conquistas laborales del magisterio y al principio de bilateralidad en la negociación de sus condiciones de trabajo. Confirman que la reforma educativa es, en realidad, una reforma laboral y administrativa que busca desprofesionalizar al magisterio, vigilarlo, controlarlo y castigarlo. Una reforma basada en la evaluación que hace de la amenaza y el miedo al despido o a la degradación laboral el centro de una supuesta mejoría profesional del magisterio y la ruta para alcanzar la calidad educativa.

Los empresarios, que tienen menos pruritos que los legisladores, lo han reconocido con absoluta claridad. “La importancia real de la evaluación docente recae —sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado— en las consecuencias que deben enfrentar los maestros de no cumplir con los requisitos que marque la ley. No puede haber marcha atrás en lo que ya se legisló en esta materia.” Y, para que no hubiera duda en sus propósitos, la Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la evaluación de los docentes debe tener consecuencias, positivas y punitivas también.

La aberración de este proyecto salta a la vista si se considera que ni los médicos que trabajan como personal de base en las instituciones públicas, ni los abogados que litigan, ni los ingenieros que realizan obras son evaluados permanentemente para ejercitar su profesión. Una vez que se han recibido, cuentan con su título y cédula profesional y han sido contratados, pueden laborar sin tener una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. Sin embargo, la nueva legislación establece que los maestros son trabajadores de excepción con un régimen laboral especial, y que deben estar sujetos a vigilancia permanente.

El energúmeno

A Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, le gusta presentarse como un empresario y activista social que lucha por elevar el nivel educativo de los mexicanos. Su lema es ¡más educación, menos política!; sin embargo, su actividad central es la política.

No es esa su única contradicción. Se asume como representante de la sociedad civil, pero aboga en favor del

mundo empresarial. Pontifica desde el púlpito de una supuesta superioridad moral ciudadana sobre políticos, maestros y sindicalistas, pero impulsa una agenda claramente patronal. Presume ser garante de lo público, pero invariablemente defiende intereses privados.

El empresario asegura que ninguna reforma es más importante que la reforma estructural educativa que requiere imperiosamente México. Pero, en nombre de ella, se dedica a hacer grilla en favor de intereses ajenos a la enseñanza.

Su caso es emblemático de cómo hacer de la filantropía un buen negocio y de la educación una plataforma política. Un solo ejemplo: en julio de 2004, el diputado Omar Ortega Álvarez denunció en tribuna la donación irregular de 44.7 millones de pesos que la Lotería Nacional hizo a la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete), una de las organizaciones que González Guajardo preside.

El 10 de septiembre de 2012, el presidente de Mexicanos Primero demandó a Enrique Peña Nieto realizar cuatro cambios en el terreno de la enseñanza.

El primero consiste en recuperar la rectoría de la educación por parte del Estado. “Con el arreglo político-corporativo actual –expresó–, no es posible abordar las transformaciones necesarias.” Para lograrlo sugirió establecer la condición de empleados de confianza a directores y supervisores. Si no se recuperan las plazas, no se recupera la plaza, dijo.

La segunda condición que exigió fue la profesionalización docente, con base en que todas las plazas, y no únicamente las de nueva creación, se concursen; asimismo, pidió instaurar la obligatoriedad legal de la evaluación universal de maestros y desprender de ella consecuencias en la permanencia en el empleo.

El tercer requisito fue dotar de mayor autonomía a las escuelas y mucha mayor participación de los padres. Finalmente, pidió que en el siguiente Presupuesto de Egresos no se contemplen recursos para cubrir las plazas sindicales.

Escasos tres meses después, el presidente propuso al Congreso una contrarreforma educativa en la que incorporó muchos de los requerimientos hechos por el empresario.

González es un crítico feroz de la educación pública en México. Curiosamente recibe todo tipo de honores de las instituciones escolares privadas auspiciadas por los Legionarios de Cristo, la orden fundada por el sacerdote mexicano Marcial Maciel, acusado de cometer abusos sexuales contra menores, plagiar obras y engendrar varios hijos, a pesar de sus votos de castidad. En 2006 le dieron la Medalla Anáhuac en Educación, y seis años después el premio Impulsa al Emprendedor Social de 2012.

Es consejero de diversas asociaciones educativas de claro corte conservador, como la Fundación Carolina, formada por el Partido Popular español, dedicada a formar a las élites de la derecha de América Latina.

González Guajardo, ex presidente de la Fundación Televisa, sumó Mexicanos Primero a las voces que critican la nueva ley de amparo, reclamo promovido por Televisa y el Consejo Coordinador Empresarial. Qué tiene que ver la ley de amparo con la educación es un enigma. Lo que sí es claro es que la reforma legal afecta intereses de Televisa, empresa de la que fue vicepresidente corporativo.

Hijo de Claudio X. González Laporte, uno de los más prominentes magnates del salinismo, Claudio X. González junior se ha desenvuelto profesionalmente en el mundo de

la política y los negocios de la caridad. Coordinador de asesores de Luis Téllez durante la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, en 1994, fue el jefe de unidad de prospectiva y proyectos especiales de la Presidencia. Junto a Fernando Landeros fundó organizaciones filantrópicas como Teletón, Lazos, México Unido y Únete.

Una entrevista que le hizo la revista *Expansión* en octubre de 2007 introdujo la vocación por las cuestiones educativas del ex presidente de la Fundación Televisa diciendo: “Los niños y jóvenes de escuelas públicas cada vez salen peor preparados que los de la generación anterior... No saben leer, no saben multiplicar, no recuerdan a los héroes patrios. Van mal en matemáticas, español, ciencias y computación. Saben mucho de Chespirito pero nada de inglés... ¿Quién va a contratar a estos mexicanos pasivos que nunca aprendieron el valor de pensar, discutir o investigar?”

El empresario es un cruzado que mezcla en su guerra santa contra los maestros los llamados de la fe y los negocios. En sus discursos clama, insistentemente, para que se prendan hogueras purificadoras en contra del magisterio nacional. En junio de 2011 llamó a cerrar las escuelas normales, porque hay muchas muy mediocres y unas que son un hervidero de política y de grilla... ¿Cuándo nos vamos a atrever a cerrar y a meter la lana a las que van a preparar a los maestros del futuro de nuestro país? Y advirtió: Se va a requerir de mucha voluntad y de mucho valor y de que nos aguantemos la turbulencia, porque sin turbulencia no hay cambio.

Esos llamados al valor rindieron frutos. El 12 de diciembre de 2011 fueron asesinados por la policía, en Chilpancingo, Guerrero, los jóvenes normalistas rurales Gabriel

Echeverría y Jorge Alexis Herrera, cuando defendían su escuela. El 15 de octubre de 2012, en Michoacán, policías estatales y federales golpearon salvajemente y detuvieron a 176 normalistas rurales, y prendieron fuego al estado.

No contento con los frutos trágicos de sus proclamas, González Guajardo estuvo a comienzos de febrero de 2013 en Michoacán para exigir mano dura contra el magisterio de la entidad. Fausto Vallejo, entonces gobernador del estado, tuvo que frenarlo. Michoacán no puede aceptar calificativos, sólo razones y cifras, señaló el mandatario.

Pero a Claudio X. González le tiene sin cuidado que el país arda. Lo suyo es hacer política en nombre de la enseñanza. Él sigue adelante con su prédica denigratoria contra el magisterio y la educación pública. Sólo que, ahora, los maestros se están hartando.

La actividad favorita de Claudio X. González en los últimos años es estigmatizar a los maestros, desacreditar la enseñanza pública e intimidar a quienes no se supediten a su agenda y sus deseos.

Apenas en mayo de 2015, en Morelia, en el marco de la Agenda por Michoacán, firmada por seis aspirantes a gobernar esa entidad, en la que se comprometieron a impulsar seis ejes de políticas públicas, Claudio X. González amenazó a quienes no suscribieran los compromisos del sector empresarial en materia educativa con exhibirlos ante la sociedad.

No fue un caso único. Así se las gasta. En plena campaña electoral federal, Mexicanos Primero y otras 100 organizaciones patronales, varias de ellas dedicadas a la presión política y cabildeo en materia de instrucción pública, emplazaron a los partidos políticos a suscribir los 10 Compromisos por la Educación Nacional con Equidad y Calidad.

Entre las organizaciones promotoras del compromiso se encontraban sindicatos patronales, como el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y el Consejo Mexicano de Negocios. También, instituciones educativas privadas auspiciadas por órdenes religiosas del tipo de la Universidad Anáhuac, la Universidad La Salle de Chihuahua, el Colegio Israelita de México y la Universidad Hebreaica. Asimismo la ultraderechista Unión Nacional de Padres de Familia, organizaciones fantasmagóricas, como la Alianza de Maestros, o asociaciones como Jacaranda Education.

El que sindicatos patronales, universidades privadas de corte religioso y grupos de cabildeo y presión empresariales presionen a los partidos políticos en plena contienda electoral para que asuman compromisos en materia de educación pública es, por lo menos, sospechoso. Sin embargo, fue presentado ante la opinión pública como natural y legítimo.

A pesar de ello, la presión de Mexicanos Primero y sus aliados para la firma de los 10 Compromisos fracasó estrepitosamente. Cinco partidos — el de la Revolución Democrática, del Trabajo, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Morena — se negaron a suscribirlo.

Encolerizado ante el descalabro, asumiéndose como la autoridad educativa de facto, Claudio X. González sentenció que quienes rechazaron la firma del decálogo reprobaron esta prueba ciudadana. Para mí — señaló — son rajones, y les exigió cumplirlos.

Como parte de su extorsión político-electoral, Mexicanos Primero publicó costosos desplegados a plana ente-

ra en cinco periódicos de circulación nacional, advirtiendo: Los mexicanos tenemos derecho a saber qué partidos y qué candidatos están con la reforma educativa y el estado de derecho y quiénes en contra. En el lado izquierdo de la inserción pagada puso los logotipos de los institutos políticos que aceptaron su chantaje con una palomita verde a su lado, y del lado derecho los emblemas de quienes lo objetaron con un tache rojo y un letrero que dice: No firmó. Y, ya encarreado, de cara a las elecciones, amenazó: La tarea no termina el 7 de junio, sólo comienza.

El espíritu pendenciero de González no tiene límite. Acostumbrado a mandar, exige obediencia de políticos, funcionarios y maestros. Los trata como subordinados.

En sus giras por el interior de la República pontificca, pregona y juzga los asuntos de la enseñanza pública sin medida alguna. Apenas el pasado 11 de mayo, el secretario de Educación y Cultura de Chihuahua, Marcelo González, denunció que el presidente de Mexicanos Primero había ido a esa entidad a hacerse el gracioso y a emitir declaraciones irresponsables sobre el sistema educativo. Las hizo, además, desde una universidad privada.

En una visita a Morelia en 2013, el vocero empresarial dijo cualquier cantidad de barbaridades sobre la educación en lugar. Fausto Vallejo, entonces gobernador del PRI en la entidad, le reviró: Michoacán no puede aceptar calificaciones, sólo razones y cifras. Apenas un año antes, el mandatario lo había felicitado por producir el panfleto fílmico *De panzazo*. Es un esfuerzo que se debe reconocer, dijo.

Su odio a los profesores democráticos y a la educación pública es visceral. Su incontinencia verbal es ofensiva.

La novena ola magisterial

Resulta curioso en un hombre que navega por el mundo con la carátula de piadoso, líder ciudadano y buen católico. En su cuenta de Twitter acusa a los dirigentes magisteriales de criminales, mafia, delincuentes con permiso y “cártel”. A su organización le imputa ser una mafia y un monstruo.

Su rencor hacia los mentores oaxaqueños, proverbial desde hace años, creció aún más desde que, en febrero de 2013, le impidieron presentar un informe y lo obligaron a salir huyendo por la puerta de atrás del hotel en el que se encontraba. En conmemoración de esos hechos, la botarga de una enorme rata con su rostro y el símbolo del PRI en el pecho circuló profusamente por las redes sociales.

La ofensiva de Claudio X. González contra los trabajadores de la educación ha adquirido el tono de guerra santa. Convertido en Ministerio Público, el vocero empresarial ha exigido que se les despida y se meta a sus dirigentes a la cárcel. Apenas este sábado pasado, los acusó de ser una cúpula que es delincuencia organizada.

El tono de energúmeno y la virulencia del discurso del presidente de Mexicanos Primero ha crispado aún más el mundo de la enseñanza. Sus ofensas han sido imitadas en multitud de medios de comunicación, en una vergonzosa campaña de estigmatización contra los educadores. Sus desplantes y chantajes políticos han convertido al gobierno federal en rehén de los caprichos empresariales.

El sargento Nuño

Ataviado con una impecable guayabera blanca, el 7 octubre de 2015 Aurelio Nuño bajó del helicóptero que lo trasladó hasta el municipio de Pluma Hidalgo, Oaxaca, protegido por

un enorme operativo policiaco. En lugar de ser recibido por los pobladores y maestros de la región, le dieron la bienvenida centenares de uniformados fuertemente armados, una decena de policías municipales, el alcalde y todo su cabildo.

En su primera visita a Oaxaca como secretario de Educación, Nuño Mayer llegó a la comunidad cafetalera de la costa oaxaqueña de unos 600 habitantes, conocida por cultivar un aromático de magnífica calidad, acompañado por el gobernador de la entidad, Gabino Cué; por Moisés Cruz, un antiguo policía que hoy dirige el nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y por Javier Treviño, subsecretario de Educación Básica.

La ceremonia resultó desairada. No asistieron los profesores de Pluma Hidalgo. Estuvieron presentes apenas unos pocos niños para la foto y dos o tres padres de familia. Ante ellos, el secretario entregó las instalaciones de la escuela primaria de doble turno Héroes de Chapultepec/ Evolución Social: seis aulas, dos baños, dos oficinas para los directores, un comedor y una barda.

Pero Nuño aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje. En él, defendió la reforma educativa asociándola con la entrega de recursos a las comunidades. Y, como si la responsabilidad educativa no fuera competencia estatal, instruyó al subsecretario Treviño a empezar todo lo que se tenga que hacer para que esta escuela pueda estar incorporada al programa de la reforma educativa, y puedan aquí recibir estos recursos para que entre maestros y padres de familia puedan tomar decisiones conjuntas que puedan ayudar a mejorar su escuela.

Ya encarrerado, como si fuera candidato en campaña electoral, se ofreció a gestionar ante el presidente la designa-

La novena ola magisterial
ción de Pueblo Mágico a Pluma Hidalgo y apoyar la industria cafetalera local.

La visita mandó un mensaje a la clase política priísta oaxaqueña, enfrascada en ese momento en una guerra salvaje por la candidatura a la gubernatura. Pluma Hidalgo no es terreno neutral. Mediante los caciques cafetaleros del PRI, es territorio de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. Director de Liconsa, ex diputado por el décimo distrito electoral (del que forma parte el municipio) y personero de Ulises Ruiz.

El impacto real del viaje de Nuño en la población del municipio y el magisterio estatal pudo verse días más tarde. El 19 de octubre, sin funcionarios estatales ni federales presentes, se efectuó una nueva inauguración de la escuela primaria Héroes de Chapultepec/Evolución Social. En lugar de ceremonias adocenadas, se celebró una concurrida y animada fiesta con tamales y café, cohetes y una banda de música. Asistieron más de 200 alumnos junto a sus padres, más de 20 profesores, el alcalde y su cabildo, el delegado sindical local y varios representantes de la sección 22. El mensaje de la comunidad no pudo ser más claro.

La presencia de Nuño en Pluma Hidalgo fue presentada como evidencia de la derrota de los profesores oaxaqueños y de la reconquista por el gobierno federal de un territorio hasta ese momento perdido. También como señal de que el secretario tiene madera para conducir no sólo la enseñanza pública sino el país entero.

¡Fantasías! Más que la capacidad del secretario para desactivar la inconformidad magisterial, el hecho mostró la eficacia de una maniobra de comunicación operada desde Los Pinos. Y, de paso, un gran desconocimiento de la naturaleza de la resistencia docente.

El comportamiento de Nuño no fue gratuito. Con los dos principales aspirantes a la candidatura del PRI a la presidencia de la República para 2018 desinflados, Enrique Peña Nieto se ha dado a la tarea de fabricar un relevo a marchas forzadas. Con Miguel Ángel Osorio Chong noqueado temporalmente por la fuga del Chapo y Luis Videgaray tocado por la reforma fiscal y la crisis económica, el secretario de Educación aparece como la pieza de relevo para heredar el trono.

El nuevo príncipe obra como tal. Pese a que formalmente es encargado del despacho presidencial, ha pasado por encima de la soberanía de los estados y les ha impuesto decisiones sobre política educativa que les competen a ellos. En los hechos, los gobernadores —formalmente electos por el voto ciudadano— reciben órdenes de un secretario de Estado. Por supuesto, ha contado para ello con el apoyo del mandatario.

Egresado de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, Aurelio Nuño estudió una maestría en Inglaterra. De la mano del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari se convirtió en asesor de Enrique Jackson, y, tiempo después, coordinador de asesores del entonces diputado Luis Videgaray. El gobernador Peña Nieto lo hizo su asesor, coordinador de mensaje de su campaña presidencial, jefe de Oficina en Los Pinos y aspirante a inquilino permanente de la residencia oficial.

Desde la SEP, Nuño hace precampaña presidencial inaugurando y mejorando escuelas a cuenta del financiamiento futuro de los estados. Con los Bonos de Infraestructura Educativa, el secretario gastará, en tres años, 25 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples correspondientes a las entidades por los próximos 20 años.

Por supuesto, el sargento Nuño niega tener aspiraciones presidenciales. Estoy en campaña, pero por la reforma educativa... no tengo más futuro ni más mañana..., responde cuando lo inquieren sobre el asunto. Sin embargo, más allá de sus palabras, su comportamiento tiene un objetivo central: heredar el trono.

Charro y de Jalisco

Juan Díaz de la Torre hizo carrera sindical y política a la sombra de Elba Esther Gordillo. Gracias a ella ascendió en el escalafón hasta convertirse en secretario general del SNTE, la segunda posición en importancia del gremio. Cuando la maestra cayó en desgracia, ella y su equipo de colaboradores más cercanos fueron claves en designarlo a él como su relevo en la Presidencia del organismo.

Un día después de la aprehensión de la profesora, Juan Díaz declaró: “Le ratificamos nuestra lealtad, nuestro cariño y nuestra solidaridad... confiamos en la maestra Elba Esther Gordillo, y esperamos justicia”. Sin embargo, muy pronto olvidó sus palabras. Públicamente se ha negado a dar la cara por ella. Cuando el 4 de abril la prensa le preguntó por qué no había visitado a su mentora en la cárcel de Tepepan, respondió que no lo hacía porque estaba muy ocupado, pues no me alcanzan las 24 horas del día.

Juan Díaz de la Torre asumió la dirección del gremio el 28 de febrero de 2013, dos días después de que Elba Esther Gordillo fue detenida en el aeropuerto de Toluca, acusada por delincuencia organizada. Tuvo 286 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, de los 300 consejeros presentes en la 36 sesión extraordinaria del Consejo General del SNTE. La influencia de la maestra se hacía sentir aún en el gremio.

En los últimos años, a raíz de la desconfianza de Elba Esther hacia Rafael Ochoa, Díaz de la Torre era su soldado, su brazo derecho, su principal asesor en asuntos jurídicos, laborales y gremiales. Uno de sus encargados en las negociaciones con los actores externos al Sindicato. Hasta que ella cayó en desgracia, él sólo tuvo palabras de agradecimiento y elogio hacia ella. Elegido secretario general del sindicato en junio de 2011, en sustitución de Rafael Ochoa, dijo que la maestra era una extraordinaria dirigente.

Su relación era muy estrecha. Como parte del Colegiado Nacional de Administración y Finanzas del Sindicato él firmaba los cheques para pagar los gastos de la maestra. Su hija, Mónica Arriola, fue la madrina de la nieta de Juan Díaz. Ataviada con un elegante vestido color naranja, Elba Esther asistió, apenas en agosto de 2012, a la ceremonia de bautizo en la iglesia de San Martín de Porres en Guadalajara.

El padre de la niña, Juan Óscar Díaz Medina, es hijo de Juan Díaz de la Torre. Gracias a su progenitor, Juan Óscar fue el primer presidente de Nueva Alianza en Jalisco en 2005 y miembro de su comisión política. Se desempeñó como diputado en la 58 Legislatura de Jalisco y fue subdelegado de prestaciones del ISSSTE.

Juan Díaz se formó en las cloacas de la vida sindical. Durante 18 años, el control del magisterio jalisciense estuvo en manos de Juan Alcalá Espitia, el hombre de Vanguardia Revolucionaria que estuvo muy cerca de alcanzar la dirección nacional del SNTE, hasta que se le atravesó Elba Esther. Ligado a la Federación de Estudiantes de Guadalajara y a Javier García Paniagua, cayó en desgracia y estuvo preso siete años por corrupción de menores, privación ilegal de la libertad y otras lindezas por el estilo.

Juan Díaz de la Torre comenzó su vida gremial a la sombra de Alcalá Espitia. Fue comisionado sindical en el comité de la sección 16 en el periodo de Rafael Bayardo y Javier Romero, apodado La Changa. El grupo se caracterizó por el tráfico de plazas, los favores sexuales, la corrupción, y la cooptación política y la represión hacia sus oponentes.

Aliado con Tomás Vázquez Vigil, se apuntó como elbista de primera hora, cuando la maestra fue designada líder del gremio. Díaz de la Torre informó puntualmente a Elba sobre los movimientos y las debilidades de Juan Alcalá, de quien Elba recelaba y a quien temía.

Entre 2000 y 2003 Juan Díaz fue ungido por Elba Esther, secretario general de la sección 16 de Jalisco. Otros dirigentes con más presencia en la entidad, como J. Jesús Ávila y Manuel Lares del Toro, quisieron evitarlo. Todo fue inútil. El poder de la maestra se impuso.

En sus orígenes modesto maestro de primaria, se convirtió en la sección 16 en un eficaz operador financiero. Aunque fue un líder seccional sin brillo, dedicado a organizar giras por el estado, mostró una gran destreza económica para manejar el Fideicomiso Global del magisterio. El instrumento financiero, operado por el sindicato y un banco, que maneja una caja de ahorros, presta dinero a los maestros y les permite mejorar las condiciones de su jubilación, fue clave en el aprecio de la maestra hacia su pupilo.

Entre 1995 y 1996, cuando Vázquez Vigil encabezó la delegación Coyoacán en la Ciudad de México, Juan Díaz fue subdelegado de Participación Ciudadana y luego, de Servicios Urbanos en Coyoacán. En 1996 fue secretario particular de Elba Esther Gordillo cuando ella encabezaba la Confede-

ración Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), cargo que también desempeñó en el SNTE.

Juan Díaz ha visto mundo. Para premiar a los líderes incondicionales, Elba Esther organizó un ambicioso programa de turismo sindical disfrazado de cursos de capacitación o estudio sindical en lugares tan diversos como Washington, Los Ángeles, Madrid y Fráncfort. Juan Díaz disfrutó de ellos generosamente.

Para permanecer en el puesto, Juan Díaz se ha puesto a las órdenes del gobierno federal. Sin ambigüedad alguna ha dado su apoyo a la reforma educativa lesiva a los intereses magisteriales. Según él, la nueva norma traerá grandes beneficios a estudiantes y trabajadores de la educación. Cada 15 de mayo ha negociado pésimos acuerdos. La obsecuencia, ayer a Elba y hoy al gobierno federal, es el sello de su casa.

El delfín del presidente

Marreados por su éxitos, Mexicanos Primero lanzó a comienzos de 2016 una nueva ofensiva para ganar aún más poder. Terminó así su luna de miel con el gobierno federal. El pretexto de la bronca con el gobierno federal fue la cancelación de la prueba Planea 2016. El 3 de febrero de 2016, mediante un desplegado publicado en un diario nacional, el grupo de presión empresarial sobre políticas educativas denunció la medida como un grave retroceso.

La pelea estaba cantada. Antes de la aparición del desplegado, cuando aún no era pública la cancelación del examen, Claudio X. González Guajardo, había anticipado el pleito. En una conferencia que impartió el 26 de enero de 2016 al consejo directivo de la Confederación de Cámaras

Nacionales de Comercio (Concanaco), anunció el cambio de rumbo en su relación con el gobierno: Nos vamos a acabar distanciando y peleando con ellos... Ahorita nos llevamos bien y van a ver que en dos o tres meses nos vamos a llevar mal (tv.concanaco.com.mx).

En la explicación que el doctor González dio a los líderes gremiales de los comerciantes sobre el porqué de la inminente ruptura con el gobierno, casi no se refirió a Planea. En cambio, dedicó mucho tiempo a explicar cómo la cancelación de la evaluación al desempeño docente en el primer semestre de 2016, y su posposición hasta finales de este año, es un error garrafal, que provoca que la reforma educativa pierda presión y se diluya. Esa pausa —lamentó— hace casi imposible culminar el ciclo de aplicación de exámenes a los profesores este sexenio.

Según el dirigente de Mexicanos Primero, la decisión de suspender la evaluación al magisterio responde a cuestiones políticas y electorales. No sólo por los comicios que se realizarán este año, sino por la sucesión presidencial. “Estamos entrando a una etapa de populismo educativo —explicó González Guajardo—; la política se está inmiscuyendo en lo educativo por las ambiciones políticas de Aurelio Nuño.”

El secretario de la SEP, de acuerdo con Claudio X. González, es no sólo un aspirante más a la Presidencia de la República, sino el delfín de Enrique Peña Nieto. Aurelio Nuño —dijo— es mucho más poderoso, dinámico, inteligente, abusado, del siglo XXI, cercano al jefe del Ejecutivo y al secretario de Hacienda de lo que era Emilio Chuayffet. Es, además, el artífice de la reforma.

Pero estas cualidades no lo vuelven intocable para el dirigente de Mexicanos Primero. “La política —aseguró— le

va a pesar a Aurelio y no va a hacer todo lo que tendría que hacer un secretario de Educación.”

De hecho, las aspiraciones presidenciales de Nuño lo han llevado ya a hacer muchos anuncios —como el de la Escuela al Centro— para ocultar el hecho central: la reforma educativa está perdiendo presión. La maniobra —sentenció el ex funcionario de Televisa— responde a una necesidad: en 2018 el PRI podrá obtener en solitario entre 30 y 32 por ciento. Para ganar necesita hacer un acuerdo con Nueva Alianza. El costo de ese pacto electoral es desinflar la reforma educativa y no tocar los intereses del corporativismo sindical.

Claudio X. González narró a los directivos de Canaco su versión de los avatares de la reforma educativa, el papel de Mexicanos Primero en su aprobación y la luna de miel que, hasta ese 26 de enero, vivía con Nuño. Por supuesto, en su análisis no consideró nunca que la evaluación del desempeño docente fue un fracaso pedagógico y político. Que estuvo mal hecha. Que decenas de miles de maestros se opusieron a ella. Que muchos de los principales analistas educativos del país la descalificaron.

Curiosamente, la ofensiva de Mexicanos Primero no se concentró en contra de la posposición de la evaluación del desempeño docente, sino en la decisión de reprogramar Planea. En un *tuit*, Claudio X. González escribió: “¿Quién entiende a SEP? Que siempre no es por motivos ‘presupuestales’, sino ‘técnicos’ que canceló Planea. Trastabillan. Motivo real: político”.

Y, aunque Nuño politiza a diario el tema educativo, respondió a la embestida de Mexicanos Primero sobre Planea diciendo que el problema no debe politizarse. “Ya he-

mos vivido esta etapa —recordó a los empresarios. Desde distintos flancos, de la derecha, de la derecha muy radical y de la izquierda, cuando se ha querido politizar la educación, quienes han pagado las consecuencias son los niños.”

La ironía del asunto es que tanto Claudio X. González como Aurelio Nuño tienen razón en las acusaciones que se hacen mutuamente. Ambos utilizan la educación para hacer política. Y ambos reclaman para sí el monopolio de hacerlo.

El enojo de X. González con el gobierno federal responde también a otros factores más mundanos. Él (y un importante grupo de los señores del dinero en México) esperaba que Gerardo Gutiérrez Candiani, el empresario sin empresas que dirigió el Consejo Coordinador Empresarial, fuera designado por el PRI, su candidato a la gubernatura de Oaxaca. Pero no fue así. Y cuando el tricolor destapó para ese cargo a Alejandro Murat, González Guajardo explotó. Apenas al día siguiente de la nominación, mandó un *tuit* de denuncia. “Alejandro Murat, candidato del PRI/Oaxaca. Nueva señal de que administración no entiende que los mexicanos queremos cambio y estado derecho”, escribió.

Por supuesto, el presidente de Mexicanos Primero juega en éste y en todos los demás casos con cartas marcadas. Sus simpatías de cara a 2018 están sobre la mesa. En la conferencia que impartió a los comerciantes, alabó a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, en cuatro ocasiones. Gracias a él, confesó, pudo volverse a reencontrar con Aurelio Nuño. El hombre de las finanzas —dijo— le ha metido ganas a la reforma educativa, pero no suficientes...

Fiel a su vocación guerrera, Claudio X. González demandó en esa charla cerrar todas las normales que no sirven para nada; según él, la mayoría.

Anunció también el siguiente paso que piensa dar el sector empresarial. No hay que temerle a llevarse mal con el gobierno, recomendó a los concanacos. Y añadió: Es más, con el tipo de gobierno que tenemos nos deberíamos de llevar de la fregada. No hay que temerle a la confrontación. El patrón, uno de los tres alegres compadres, le clavó el puñal por la espalda a su secretario. Su apuesta sigue siendo quedarse con el negocio de la educación.

CAPÍTULO II

UNA LEGISLACIÓN DE EXCEPCIÓN

La ruptura

No hay precedente histórico de una movilización gremial de la magnitud de la que se ha vivido a lo largo de tres años y medio. Los maestros parecen no fatigarse. Suspensión de labores, ocupación de edificios públicos, bloqueo de vialidades, campamentos en plazas públicas, marchas, eventos culturales, conferencias, mesas de negociación con autoridades se suceden unas a otras a lo largo de la geografía nacional.

En el horizonte cercano no se vislumbra el fin de estas acciones de desobediencia civil. El movimiento conserva su aliento inicial y su potencia. Una insumisión colectiva de esta magnitud y perseverancia sólo puede responder a motivaciones muy profundas. Suponer que es resultado de pequeños grupos radicalizados o de excesivas concesiones gubernamentales al negociar con la CNTE es un absurdo. De ser correcto, hace ya tiempo que el descontento docente se habría esfumado o reducido a núcleos localizados de activistas.

¿De dónde viene este hondo malestar ante la reforma educativa? De entrada, la legislación de la discordia se basó en supuestos sobre los maestros y su trabajo que no corresponden a la realidad. La SEP encargó una larga y detallada encuesta para conocer a los maestros mexicanos. El documento se llamó

“Disposición de los docentes al desarrollo profesional y actitudes hacia la reforma educativa”, y ofrece un retrato de los profesores que hoy se oponen a la reforma peñista.

Las conclusiones de ese sondeo desmienten la idea de que el corazón del problema educativo en el país es que la mayor parte de los maestros obtuvieron sus plazas por herencia o por intervención del sindicato. El estudio, efectuado por Ipsos Public Affairs, indica que fueron más los trabajadores de la educación que obtuvieron sus plazas por intermediación de la propia SEP o de la autoridad educativa.

Equivocado el diagnóstico, se erró en el tratamiento. La reforma peñista provocó una afectación profunda del mundo docente, en, cuando menos, cuatro hechos centrales y dos coyunturales. Entre los primeros se encuentra la transformación del magisterio de una profesión de Estado a otra libre; la desprofesionalización de la enseñanza básica; el fin de la bilateralidad en la negociación de condiciones laborales y profesionales, y la transferencia de una parte de los costos de la educación pública a los padres de familia. Entre los segundos, la denigrante campaña de odio contra los docentes y la práctica de decapitación de su sindicato.

El Estado rompió, unilateralmente, el pacto que desde hace décadas tenía con los maestros. La reforma cambió sustancialmente la naturaleza del trabajo docente. Trasladó a los maestros, de la noche a la mañana, al reino de la inseguridad laboral permanente. Prácticamente anula la permanencia en el empleo. El magisterio dejará de ser una profesión de Estado para convertirse en una profesión formalmente libre, cuyo desempeño estará sujeto al arbitrio de la autoridad, amenazada constantemente con el despido. De paso, declaró la práctica extinción del normalismo.

La reforma desprofesionaliza al magisterio. Manda un peligroso mensaje: la educación es demasiado importante para dejarla en manos de los maestros; los profesores no son de fiar, para que hagan bien su trabajo hay que vigilarlos en forma permanente. Desvirtúa la imagen del ser maestro y menoscaba su autoridad.

La reforma cancela las posibilidades de defensa colectiva de los intereses gremiales y profesionales. Termina con la bilateralidad en la negociación de las condiciones laborales. Condena al SNTE a ser un mero gestor de servicios para los maestros, tales como seguros de vida. El mismo Juan Díaz de la Torre, presidente del sindicato absolutamente subordinado al gobierno, reconoció que el desafío con el arranque de la reforma educativa es que el gremio no se destruya, que no muera.

La reforma oficializa el traslado de una parte de los costos del mantenimiento de las escuelas a los padres de familia. Pone en entredicho el principio de gratuidad de la educación pública.

Como lo muestra el estudio citado, en 2010 los maestros mexicanos valoraban bien las reformas y medidas encaminadas a proporcionarles mayores oportunidades de formación y actualización. Si ahora se oponen frontalmente a la reforma peñista es porque se les impuso sin consultarlos y contra ellos. Tres años y medio de protestas son, por lo pronto, el costo inicial de esta decisión. Y es apenas el principio, no el final.

Las plazas y la plaza

“Si no se recuperan las plazas, no se recupera la plaza”, advirtió el 10 de septiembre de 2012 Claudio X. González,

La novena ola magisterial
secretario de Educación sin cartera, al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto. Su recomendación sintetiza el objetivo central de la Ley General del Sservicio Profesional Docente (LSPD) aprobada para aterrizar la reforma educativa: quitarle a los maestros sus plazas.

La nueva norma cambia el modelo de control del magisterio nacional, de uno basado en dirigentes sindicales corruptos estilo Elba Esther Gordillo a otro sustentado en la inseguridad y la precariedad laboral y el fin de la bilateralidad. Donde antes había corporativismo gremial, ahora hay una combinación de fuerzas del mercado, desregulación laboral y autoritarismo de funcionarios educativos.

Esta modificación no busca prescindir de los liderazgos sindicales corruptos. Menos aún, permitir la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pretende que los líderes gremiales tengan menos poder, sean más serviles a la autoridad y que los maestros le teman a ésta.

El nuevo modelo de control tiene como objetivo facilitar y permitir la discrecionalidad en la contratación y el despido de los maestros; reducir al mínimo la estabilidad laboral y sus conquistas gremiales; limitar su autonomía en el proceso de enseñanza; imponerle responsabilidades desmedidas; desalentar su organización y resistencia; acabar con el normalismo, y abrirle paso a las escuelas chárter o de concertación (instituciones escolares administradas por la iniciativa privada con dinero público).

La nueva legislación hace retroceder más de 50 años la rueda de los derechos laborales en el país. A partir de ahora, según el transitorio segundo de la LSPD, los maestros

deben olvidarse de sus conquistas gremiales. Sin el menor respeto al artículo 14 constitucional, que señala que ninguna ley es retroactiva en perjuicio de persona alguna, barre de un plumazo con los derechos adquiridos en más de cinco décadas de luchas.

A esta operación de despojo de sus derechos se le ha disfrazado de acción en su defensa. Las relaciones de trabajo del magisterio —se dice en el texto— se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo en lo dispuesto en esta ley. ¿Y qué dispone la ley?: derogar los derechos adquiridos que se le oponen.

Los problemas que la ley tiene son muchos. Por principio de cuentas, las autoridades educativas encargadas de evaluar la calidad de los maestros carecen de la calidad para hacerlo. Esas autoridades no son especialistas educativos ni pedagogos ni maestros. Son, en la mayoría de los casos, funcionarios ligados a la burocracia federal que administra la Secretaría de Educación Pública y a los gobernadores en los estados. Ellos no son evaluados; rinden cuentas a sus jefes. ¿Podrán garantizar que la educación mejore? Evidentemente no.

La nueva ley pone sobre los hombros de los maestros de banquillo obligaciones desmedidas en la enseñanza que no son, en realidad, competencia suya. Los define como el profesional responsable del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. Con ello, los hace responsables de las deficiencias educativas y los sujeta a ser evaluados en áreas en las que no se desempeñan, con la amenaza de ser sancionados.

La nueva normatividad manipula tres conceptos centrales del derecho para precarizar las condiciones de estabilidad en el empleo, una conquista legal que implica asegurar y proteger la permanencia y continuidad del vínculo laboral. Estos conceptos son: permanencia en el servicio, inamovilidad y causales de despido.

Si en su acepción original permanencia quiere decir continuidad no interrumpida de las relaciones laborales, la LSPD amplía el significado del término hasta desvirtuarlo, estableciendo que se trata, tan sólo, del tiempo que el docente dura en su empleo.

Este engaño lingüístico implica la práctica desaparición de la inamovilidad laboral, es decir, que un maestro va a poder ser despedido por razones distintas a las que la ley burocrática establece como causa justificada. De manera tramposa, la nueva norma garantiza la permanencia definitiva en el servicio público siempre y cuando el maestro se sujete a los procesos de evaluación y a programas de capacitación. Reconoce un nombramiento definitivo pero permanentemente condicionado.

Adicionalmente, amplía los motivos para despedir a los maestros, y crea causas genéricas para justificarlo, contrarias a las establecidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Establece un procedimiento autoritario que permite la separación del docente sin derecho a audiencia previa.

El principio de bilateralidad, esto es, de la negociación conjunta de las condiciones de trabajo entre la autoridad, los maestros y su organización gremial, se desvanece. Ahora es la autoridad la que, de manera unilateral, fija las

reglas del juego, sin que los maestros y su sindicato puedan defenderse.

A contracorriente de la tendencia mundial a la descentralización administrativa y de la federalización educativa en nuestro país, la LSPD nos regresa al centralismo más retrógrado. La nueva legislación autoriza al Ejecutivo a pasar por encima de la soberanía de los estados para imponer lineamientos en el terreno de la enseñanza.

A pesar de que fue votada en nombre de la calidad de la educación, la nueva norma tendrá graves repercusiones en ella. Inevitablemente la deteriorará. Para mejorar el sistema educativo se requiere, entre otras medidas, de profesionalizar al magisterio. Y esto se logra dándole certidumbre, seguridad en el empleo, no reduciendo su estabilidad laboral, facilitando el despido y evaluándolo punitivamente.

El gobierno de Enrique Peña Nieto y los empresarios tienen su ley. A cambio van a perder la tranquilidad. Al aprobarla burlándose de los profesores abrieron una caja de Pandora. Es cierto, despojaron a los maestros de sus plazas, pero no podrán ganar la plaza.

El galimatías de la educación de calidad

La reforma educativa fue justificada por sus promotores con un argumento central: el de la calidad. En la exposición de motivos de la nueva norma se asienta: El imperativo de la calidad debe alcanzar a todos los niños y jóvenes en el marco de una educación inclusiva.

Originalmente no estaba contemplado en la reforma elevar a rango constitucional el derecho de los mexicanos a recibir una educación de calidad. Su adición a la Carta Mag-

La novena ola magisterial
na la realizó el Senado de manera precipitada, como resultado de las presiones empresariales.

A pesar de ello, el presidente Enrique Peña Nieto reivindicó esta modificación como suya. La reforma educativa, dijo, estableció los cimientos para que todos los niños y jóvenes del país tengan acceso a una enseñanza de calidad que los prepare para el futuro.

Fue así como entre los atributos que debe tener la enseñanza impartida por el Estado, contenidos en el artículo tercero constitucional, se añadió a los de laica, gratuita y obligatoria, el de calidad.

En esta lógica, la evaluación del magisterio pasó a ser considerada elemento decisivo para garantizar y mejorar la calidad del sistema de enseñanza.

Un concepto tan relevante como el de calidad educativa debería estar muy claramente definido en la Constitución y en las leyes secundarias. ¿Cómo, si no, establecer las metas y contenidos que necesitan tener los programas del sistema de enseñanza pública? ¿Cómo saber qué tipo de profesor se requiere para llevarlos a la práctica en las aulas? ¿Cómo evaluarlos?

Pero eso no es así. En contra de lo que podría esperarse, los funcionarios del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), encargados por ley de evaluar la calidad de la enseñanza, no saben con claridad qué es este término. Lo reconocen públicamente. No resulta extraño: las cuatro normas que se refieren a ese concepto lo hacen de manera vaga, confusa y contradictoria. No hay en ellas consistencia ni claridad conceptual.

El 23 de junio de 2015, integrantes de la junta de gobierno del INEE comparecieron en la Comisión Permanente

del Congreso de la Unión. Allí, el senador Manuel Bartlett les preguntó: ¿Qué es la calidad de educación? Podrían responderlo, porque en la reforma constitucional no existe.

Sylvia Schmelkes, consejera presidenta del organismo y coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública durante la Presidencia de Vicente Fox, confesó que no podía hacerlo. “Yo coincido con usted, señor senador —le dijo—: es sumamente difícil definirla, es un concepto que no se deja definir, porque es un concepto relativo. Siempre se habla de calidad en comparación con alguien más o en comparación con uno mismo en su pasado; y también porque el concepto de calidad es un concepto dinámico, en el momento en el que se obtiene un nivel de calidad, en ese momento se puede uno proponer metas superiores de calidad, por eso es muy difícil definirla.”

La maestra Schmelkes añadió: Lo que nosotros hemos asumido como una definición del concepto de calidad de la educación es el derecho a una educación. Curiosa respuesta, porque la Constitución en su artículo tercero asienta la calidad como atributo de la enseñanza que imparte el Estado. Es, decir, según la consejera presidente, la calidad de la educación es el derecho a una educación (de calidad).

Más adelante, en respuesta a una pregunta de otro legislador, la doctora Margarita Zorrilla, también integrante de la junta de gobierno del INEE, reconoció que no hay consenso en lo que la calidad de la educación es, porque hay distintas corrientes, aunque la ley trae algunas aproximaciones, tanto la Ley General de Educación como la Ley del INEE.

Es falso que la legislación aprobada contenga aproximaciones a lo que es la calidad en la educación. Tanto el artículo tercero constitucional como la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), la Ley General de Educación (LGE) y la Ley del INEE definen este concepto de manera incomprensible, confusa, farragosa y con muchas contradicciones.

El nuevo texto del tercero constitucional dice: La educación será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. La redacción desafía las más elementales reglas de sintaxis. ¿Qué quiere decir eso?

Manuel Pérez Rocha diseccionó el texto: Mejoramiento constante ¿de qué? — se preguntó. Este mejoramiento sin objeto ¿es la base de la calidad o, más bien, resultado de la calidad? ¿O es la calidad misma? El máximo logro académico de los educandos ¿es otra base de la calidad? ¿O es resultado de la calidad? ¿O es ésta la esencia de la calidad? Esta definición de la educación ¿servirá para orientar los esfuerzos de educandos y maestros? ¿Es un criterio claro y práctico para que el nuevo INEE realice sus evaluaciones?

En la LGE (artículo 8) se define calidad como la congruencia entre objetivos, resultados y procesos del sistema educativo. En la Ley del INEE (artículo 5) calidad se describe como la cualidad de un sistema educativo, que integra las dimensiones de relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia, impacto y suficiencia. La LGSPD menciona el concepto de manera directa o asociada en 10 ocasiones, pero nunca precisa su significado. ¿Cuál de todas estas definiciones es la correcta?

El concepto de calidad educativa presente en nuestra legislación es un galimatías. Los legisladores que lo redactaron y aprobaron utilizaron un lenguaje oscuro, frases desordenadas e ideas confusas. No podía ser de otra manera. El término, como han señalado numerosos especialistas, no proviene del mundo de la pedagogía, sino de los negocios.

Pese a ello, empresarios, políticos, funcionarios educativos y magistrados lo utilizan para tratar de justificar una reforma administrativa y laboral carente de contenidos educativos. Los resultados de este abuso están a la vista. Son un fracaso.

La evaluación educativa y sus especialistas

La reforma educativa pone la carreta delante de los bueyes. En lugar de ubicar con claridad los grandes problemas educativos nacionales (la desigualdad y el rezago), establece como el reto principal de esta etapa atender la calidad de la enseñanza. En vez de respetar la naturaleza pluriétnica y multicultural del país y de la educación, la violenta fijando mecanismos de evaluación homogéneos.

Según los promotores de la reforma, la herramienta central para lograr la calidad de la enseñanza es la evaluación de los docentes. Una evaluación entendida como medición de conocimientos de alumnos y maestros mediante exámenes universales de opción múltiple.

La nueva norma olvida que para evaluar a los profesores antes debe definirse qué tipo de maestros requiere el sistema educativo, y que, para hacerlo, se necesita establecer previamente un proyecto pedagógico nacional. Nada de esto hace la reforma.

La visión de que la evaluación es el remedio milagroso contra todos los males del sistema educativo no se sostiene. Ni siquiera es avalada por la mayoría de los especialistas educativos que fueron convocados por la Cámara de Senadores como candidatos a la junta de gobierno del INEE.

Revisar las opiniones que los 15 académicos y ex funcionarios pedagógicos expresaron el 17 de abril de 2013, en sus intervenciones de 10 minutos en el Senado, es esclarecedor. Muchas de ellas hacen una crítica implícita demoledora a partes sustantivas de la reforma educativa. Por supuesto, la mayoría de legisladores no parecieron darse cuenta de ello.

Un buen número de especialistas señalaron la falta de equidad en los servicios educativos como problema central de la enseñanza, los graves retos que esto implica para cualquier evaluación educativa y el inconveniente de efectuar ésta de manera estandarizada.

Por ejemplo, Benilde García explicó cómo la inequitativa distribución de la riqueza y de los recursos culturales ha segmentado los tipos de servicios educativos, dando lugar a un importante número de escuelas con equipamientos y condiciones precarias. Puso de ejemplo de la diversidad de condiciones en que trabajan los maestros que, en un poco más de dos quintas partes del total de escuelas primarias del país, un docente atiende todos los grados, y en una quinta parte de las mismas los profesores no son profesionales, sino jóvenes habilitados con secundaria o bachillerato, que permanente son remplazados y que duran en su cargo uno o dos años.

Por ello, indicó, el reconocimiento de la diversidad de las situaciones de enseñanza, así como de las dimensio-

nes comunes de las mismas, deberán verse reflejadas en el sistema de evaluación que desarrolla el INEE.

Recomendó adoptar “una estrategia de evaluación mediante la utilización de tareas significativas y propias del quehacer docente en sus diferentes niveles y modalidades educativas, así como en los que se haga evidente la concepción de que el alto logro de niveles de desempeño docente no se considera un evento, sino un proceso que requiere del monitoreo constante y del apoyo al quehacer docente”.

Muchos de los aspirantes desmitificaron la pretensión de considerar la evaluación como la llave mágica que solucionará la falta de calidad en la enseñanza. Sylvia Schmelkes, señaló que la calidad de la educación no mejora con la evaluación (...) la calidad de la educación más bien mejora, como consecuencia, de la transformación de la práctica docente. Lorenza Villa advirtió que la evaluación no debía ser sobredimensionada, ni convertida en un fin en sí misma.

En una dirección parecida, Eduardo Backhoff afirmó que la evaluación por sí misma no resuelve ningún problema. Angel Díaz Barriga insistió en que ésta no es suficiente para lograr un cambio profundo en la educación. Y Teresa Bracho puntualizó que por sí misma la evaluación no genera cambios en el sistema.

Los investigadores tomaron distancia de la pretensión de evaluar a los maestros con exámenes de opción múltiple. María Luisa Chavoya planteó que la evaluación debe partir de considerar que ellos también forman un universo diverso, y que realmente no se puede utilizar la misma vara para medir lo diverso. No es posible evaluar a los maestros y alumnos con una simple prueba.

La evaluación —dijo Gilberto Guevara Niebla— debe desmitificarse y humanizarse. Desmitificarse significa que debe contemplarse como un elemento más de la educación y no como su único y principal determinante. Humanizarse significa que la evaluación debe hacer visibles a los sujetos de la misma, que hasta ahora aparecen invisibles.

El carácter diverso y desigual del país —y de la educación— demanda una visión flexible de la evaluación. Silvia Schmelkes advirtió que la evaluación también corre el riesgo de pretender homogeneizar propósitos educativos y de basar sus juicios en criterios que no toman en cuenta la diversidad.

Tiburcio Moreno llamó a remplazar una cultura de la evaluación caracterizada por el control, punitiva y clasificadora por una cultura de la evaluación democrática, justa, participativa y formativa. Se trata de una recomendación —como muchas contenidas en las más de 89 cuartillas del acta de la comparecencia de los especialistas en el Senado— que la Secretaría de Educación Pública y los legisladores harían bien en atender, aunque no se ve en ellos voluntad alguna para hacerlo. Prefieren seguir adelante con sus dogmas y poner la carreta delante de los bueyes.

Contra-reforma constitucional y privatización de la enseñanza

La reforma educativa privatiza la enseñanza, aseguran los maestros democráticos que la rechazan. No es cierto, aseguran los políticos, empresarios y periodistas que la impulsaron, aprobaron y defienden. ¿Quién tiene la razón?

Privatizar significa transferir una empresa, un bien o una actividad del sector público al sector privado. Privatizar

implica ceder a particulares, por la vía de la venta, la transferencia, la subrogación o la asociación, áreas, responsabilidades y activos públicos.

Eso es lo que hace en el sector educativo la reforma constitucional recientemente aprobada. Y no porque venda a empresarios escuelas o mobiliarios. Como sucede en casi todo el mundo, la privatización de la enseñanza en México es un proceso que tiene muchas caras. Y la venta de bienes es sólo uno de esos rostros.

La reforma educativa privatiza la enseñanza porque abre las puertas para que se delegue en los padres de familia la responsabilidad del sostenimiento de las escuelas. Lo hace facilitando la penetración de la mano invisible del mercado a través de la promoción, dentro del espacio público, de la lógica, normas y concepción del mundo empresarial. Y lo favorece, también, al allanar el camino para la subrogación de servicios y el subsidio al sector privado.

Punto clave en la privatización es el otorgamiento de la autonomía de gestión de las escuelas. Según los promotores de la nueva norma, ésta propiciará que los recursos públicos lleguen a los centros escolares y sean eficazmente utilizados, garantizando la gratuidad de la educación pública. No es así: la legislación deja paso franco para que, en nombre de esa autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas como si fueran colegiaturas, se permita la entrada a los centros escolares de empresas que proveen recursos y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Lo que se facilita, en realidad, es que se

cuelen a las aulas gestores privados que puedan comerciar con las necesidades escolares.

La autonomía de gestión escolar profundiza las desigualdades socioeconómicas y rezagos ya existentes en los centros escolares. Pone a cada escuela a rascarse con sus propias uñas. Oficializa y legitima la existencia de planteles educativos de primera, segunda y tercera categoría. Crea las condiciones para que programas compensatorios tales como becas y desayunos, desaparezcan, delegando su responsabilidad en entes privados, sean filantrópicos o asistenciales.

Según sus promotores, la reforma busca que, en el marco de esta autonomía, sea la escuela la que administre los rubros de infraestructura y compra de materiales educativos, resuelva problemas de operación básicas y propicie condiciones de participación. Sin embargo, como señala el profesor Luis Hernández Montalvo, el Reglamento Interior de Trabajo de las Escuelas Primarias de la República Mexicana, establecido el 4 de octubre de 1966, ya permite esto.

Con la reforma se crean las condiciones para avanzar en la introducción del modelo de escuelas chárter, financiadas con dinero público, pero administradas como instituciones privadas, que en Estados Unidos han resultado un fracaso.

Una cara más de la privatización es la creciente influencia de la lógica del libre mercado asociada con la rendición de cuentas basada en la realización de exámenes estandarizados, como principio fundamental de la gestión educativa. En su libro *La muerte y la vida del gran sistema escolar estadounidense: cómo los exámenes y la elección están destruyendo la educación*, Diane Ravitch lo explica: “Yo lo llamo

el movimiento por la reforma empresarial — dice —, no porque todos quienes lo apoyan están interesados en obtener ganancias, sino porque sus ideas provienen de conceptos empresariales como competencia y objetivos, recompensas y castigos, y réditos sobre las inversiones. En contraste, los educadores hablan de currículum e instrucción, desarrollo infantil, pedagogía, condiciones de aprendizaje (como la cantidad de alumnos en cada salón), recursos, condiciones de vida de los estudiantes que afectan su salud y motivación, y relaciones con las familias y las comunidades”.

Uno de los rostros de la privatización es la subrogación y contratación de los servicios educativos. Mediante este mecanismo de asociación público-privada, se transfiere a agentes privados la realización de obras, estudios, evaluaciones, que son responsabilidad de los gobiernos federal o estatales. Los negocios hechos (y por hacerse) a su amparo son, como demuestran Enciclomedia y el Programa de Habilidades Digitales, multimillonarios.

Con frecuencia, esta subrogación de servicios se justifica con el pretexto de la vigilancia ciudadana en las tareas educativas. Los investigadores de la UPN, Marcelino Guerra y Lucía Fierro, documentaron el involucramiento y participación en asuntos de la enseñanza pública a escala nacional de entidades civiles como Transparencia Mexicana, Fundación IDEA, Fundación Empresarios por la Educación Básica, Fundación Televisa y Servicios Integrales de Evaluación y Medición Educativa SC.

Finalmente, otro de los semblantes de la privatización es la tendencia creciente del gobierno federal a subsidiar al sector privado. Por ejemplo, el decreto presidencial

La novena ola magisterial de Felipe Calderón para deducir impuestos hasta ciertos montos en las cuotas para educación privada es una forma de transferir recursos a las escuelas privadas. La reforma recién aprobada no dice una sola palabra de este asunto.

Los maestros democráticos tienen razón cuando señalan que la contrarreforma educativa es un paso más en la privatización de la enseñanza. Al oponerse a ella están defendiendo la educación pública.

El arte de la simulación

Decir una cosa y hacer otra es un arte en el que Aurelio Nuño ha demostrado ser un verdadero maestro. Con eficacia mediática, el secretario de Educación Pública anuncia cada semana transformaciones en la política educativa que, en los hechos, son lo contrario de lo que dicen ser.

Buen ejemplo de este ejercicio del arte de simular es el plan Escuela al Centro. Anunciado como la primera de siete prioridades para reformar la instrucción pública, sostiene que su objetivo es que la escuela sea menos burocrática, que disponga de recursos económicos suficientes y que haya mayor participación social dentro.

En sentido estricto, las seis líneas de acción de las que consta el plan no son ni novedosas ni originales. Son copia —en muchos casos textual— de las sugerencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentes en el documento “Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México”.

Las recomendaciones de la OCDE fueron inicialmente incorporadas, sin crítica alguna, al Pacto por México. El noveno compromiso de este acuerdo cupular esta-

blece: Se robustecerá la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

Poco después, en septiembre de 2013, las directrices fueron incorporadas a la Ley General de Educación, que en su artículo 22 establece: "...se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y los padres de familia".

Finalmente, el 7 de marzo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 717, donde se emiten lineamientos y normas que deben seguir las autoridades educativas locales y municipales para formular los programas y acciones de gestión escolar destinados a fortalecer la autonomía de las escuelas de educación básica.

Según el secretario Aurelio Nuño, el plan Escuela al Centro busca que cada plantel cuente con un subdirector de gestión escolar y un subdirector académico. Esas figuras ya existen pero no ha funcionado por carencia de maestros de grupo.

Parte de estas nuevas plazas serán ocupadas por los aviadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que cobran sin trabajar. De esta manera serán premiados con posiciones de mando en el sistema escolar, como subdirectores o supervisores. Por ello Manuel Gil Antón propone cambiar el nombre de la SEP a Secretaría de Aviación Pública, al tiempo que señala la paradoja de que, con el pretexto de reducir la burocracia, se le incremente en cada plantel.

En los hechos, buena parte de las líneas de acción del plan Escuela al Centro se han aplicado ya en la Ciudad de México desde hace tres ciclos escolares. Sin embargo, ni siquiera aquí han funcionado a cabalidad, porque no todos los centros escolares tienen su plantilla laboral completa. ¿Cuál es el balance de esa experiencia de tres años? Se desconoce. No se ha realizado una evaluación de su funcionamiento. A pesar de ello, hoy se plantea reproducir el modelo en todo el país.

Aunque no lo diga, Escuela al Centro es una iniciativa dirigida a las escuelas públicas de las grandes ciudades. No obstante que las escuelas ubicadas en zonas rurales y en las orillas de las metrópolis son las que disponen de menos recursos, y las que más apoyos requieren, la llamada reorganización de la gestión escolar contenida en el plan sólo podrá hacerse realidad en los planteles urbanos.

No es asunto menor. Dos de cada cinco escuelas de educación básica en el país son multigrado. En ellas, un maestro (o maestra) imparte clases de manera simultánea a más de un grado. En ocasiones lo hace en un mismo salón. Esos maestros son, simultáneamente, directores, están obligados a cumplir con fatigosas y absurdas cargas administrativas, y efectúan servicio social en sus comunidades. Ahora deberán ser también subdirectores de gestión escolar y académicos.

Como señala Lucía Rivera, en nombre de la autonomía (la capacidad para darse normas y gobierno propios), el término de autonomía escolar despoja a este concepto de su significado emancipador y su vínculo con la democratización de la vida escolar. En su lugar se propone una autonomía regulada y acotada, al servicio de fines pragmáticos.

En síntesis, Escuela al Centro es un claro ejemplo de cómo la SEP dice una cosa para hacer otra. Presenta como novedosa una propuesta que no es más que un refrito de recomendaciones de organismos multilaterales y experiencias en marcha. Dice que busca lograr que la escuela sea menos burocrática, pero la hace más en cada plantel. En vez de disminuir la desigualdad educativa, la agiganta. Lejos de promover la democratización de la vida escolar, abre las puertas a una mayor vigilancia y control sobre el magisterio.

En este juego de máscaras que oculta los verdaderos propósitos, Escuela al Centro tiene un objetivo central: la proliferación de escuelas chárter, financiadas con dinero público pero administradas como instituciones privadas, en muchas ocasiones por empresarios o sus asociaciones de fachada.

La obsesión centralizadora

Como los cangrejos, el gobierno federal y el Congreso de la Unión caminan hacia atrás en materia de instrucción pública. A contracorriente de lo que sucede en los países democráticos, donde la descentralización de la administración pública es la tendencia dominante, primero acordaron centralizar la evaluación, luego la política educativa, para rematar, ahora, con la nómina de los trabajadores de la educación.

No es un hecho aislado. La obsesión centralizadora del gobierno de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México parece no tener límite. Los gobernadores desfilan por las oficinas de Luis Videgaray para negociar sus presupuestos, en lugar de hacerlo con el Poder Legislativo. Unilateralmente, ha establecido una política de contratación masiva y centralizada de bienes y servicios, medicamentos incluidos, mediante compras consolidadas, contratos marco y subastas en reversa.

La decisión de que el gobierno federal quite a los estados el control sobre el pago de nómina a los maestros de educación básica fue justificada en nombre de la transparencia, del afán por evitar la duplicidad de plazas y de la decisión de cancelar la doble negociación gremial.

La medida fue anunciada por el jefe del Ejecutivo el 19 de agosto de 2013, durante el inicio del ciclo escolar 2013-2014, en Xochitepec, Morelos. Peña Nieto advirtió allí que se revisaría a fondo el financiamiento de la educación pública, derivado de la descentralización educativa de 1992. A 20 años de distancia, la federalización del pago de los maestros y las insuficientes transferencias de recursos federales han debilitado las finanzas estatales y acentuado importantes inequidades entre las entidades federativas, señaló.

En los hechos, la recentralización es la expedición del certificado de defunción del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica. Es, por tanto, la confesión pública del fracaso de una política que hizo de la descentralización la panacea a todos los males de la enseñanza en el país.

Efectivamente, desde comienzos de los años 80 del siglo pasado, la descentralización se convirtió en una obsesión gubernamental. El diagnóstico oficial asoció el bajo nivel educativo con la centralización, hasta equiparar automáticamente descentralización con mejoramiento pedagógico.

Sin embargo, al aterrizar el acuerdo las cosas resultaron diferentes. Como señaló el Observatorio Ciudadano de la Educación, más que una verdadera descentralización educativa, lo que se puso en práctica fue una descentralización centralizadora, conducida con una lógica centralista e inequitativa, en la que la Federación nunca pretendió perder

el control del proceso educativo. Fue más una medida administrativa que pedagógica. Se exigió a los gobiernos estatales que hicieran con menos dinero lo que la SEP hacía con más.

No obstante este fracaso, la descentralización de la enseñanza acordada en 1992 tuvo como telón de fondo un elemento real: el enorme e incontrolable aparato burocrático de la SEP impedía que los recursos educativos fueran bien administrados. Por ejemplo, en lo que es una prefiguración de lo que viene, en 1980 estallaron decenas de conflictos magisteriales en todo el país, por graves problemas de pago, propiciados por el manejo centralizado de la nómina.

Lo que hoy se propone con la recentralización de las plazas es hacer crecer aún más la burocracia de la SEP. Con ello, se están creando las condiciones para fabricar un problema de magnitud insospechada. Sin flexibilidad alguna, las autoridades educativas van a administrar ahora mucho más de un millón de plazas que tienen, de por sí, una gran movilidad.

Los maestros de nuevo ingreso cambian constantemente de centro escolar, combinan su trabajo en una escuela primaria con horas de clase en secundaria, cotizan al ISSSTE y/o a los institutos de seguridad social de los estados, adquieren préstamos que se descuentan de su salario. Otros toman días económicos o se incapacitan. Miles de profesores de primaria laboran como directores de escuela sin el contrato apropiado, con tan sólo una comisión de por medio, porque no existen las plazas presupuestales para que lo hagan. Pretender manejar centralizadamente un sistema laboral tan fluido y complejo, es absurdo.

Efectivamente, hay muchas cosas que no funcionan en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

La novena ola magisterial (FAEB). Hay problemas serios para establecer la matrícula y uso indebido de los recursos educativos por las autoridades en los estados. Pero, lejos de resolver estos problemas, la recentralización creará nuevos problemas sin solución.

El uso indebido de los recursos y la doble negociación no se resuelven así. La corrupción en el manejo de las plazas no es algo que suceda sólo en el nivel estatal. Toda la administración federal está llena de prácticas de este tipo. Es falso que la centralización permita combatir la corrupción, lo único que hace es concentrarla.

El SNTE negocia con las autoridades federales un aumento anual y sus secciones estatales acuerdan con los gobernadores prestaciones adicionales como días de aguinaldo y primas vacacionales. La medida corresponde al ámbito laboral; es allí donde debe solucionarse.

La autoridad educativa debe estar cerca de las escuelas y de las regiones en las que se educa a niños y jóvenes, no a cientos o miles de kilómetros de distancia. Requiere estar en contacto con la labor docente, con los maestros y padres de familia, no pertrechada en una torre de marfil informática.

La recentralización educativa no es más que una fuga hacia adelante. Es un intento de la actual administración por huir de los problemas provocados por su insensibilidad y autoritarismo. Lejos de resolver los graves problemas de instrucción pública que hay en el país, los profundizará aún más.

La guerra contra el normalismo

Imaginemos que, a partir de ahora, en México no será necesario ser médico para ejercer la medicina. Para diagnosticar enfermedades, hacer cirugías y recetar fármacos, será sufi-

ciente tener una licenciatura y presentar un examen. Aunque no haya estudiado los seis arduos años de la carrera de médico, cualquier licenciado tendrá derecho a ocupar una plaza en las clínicas y hospitales del sector público.

Supongamos que dentro de muy poco tiempo en México los egresados de veterinaria, historia o letras inglesas podrán ser responsables de realizar y supervisar proyectos arquitectónicos y obras. Les bastará con haber terminado su carrera y hacer una prueba para trabajar de arquitectos o ingenieros civiles, aunque no hayan estudiado para ello.

Fantaseemos con que, desde ya, será posible, en tiempos de paz, tener el grado de teniente coronel dentro del Ejército, sin haber cursado la carrera de las armas y sin cumplir con un mínimo de tiempo en el servicio. Se requerirá, tan sólo, ser licenciado y pasar un examen de admisión.

Obviamente, muy pocos enfermos estarían dispuestos a dejarse operar por un cirujano que no cursó la carrera de medicina. Por supuesto, nadie cometería la locura de darle la obra de construcción de un puente a quien no sea ingeniero civil o arquitecto. Y es impensable que, en condiciones normales, el Ejército reclute a sus filas como oficial de alta graduación a quien no se haya formado y hecho carrera en sus filas.

Sin embargo, el 22 de marzo de 2016, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunció que para ejercer la profesión magisterial será posible hacer lo que nos parece inadmisibles para la medicina, la ingeniería o las armas. Según el funcionario, desde este año, cualquier licenciado que presente un examen podrá dar clases de educación básica en el sistema público. La formación de maestros — dijo — ha

dejado de ser un monopolio de las facultades y escuelas universitarias. En los hechos, se ha condenado a muerte a las normales: dejarán de ser semilleros de profesores de educación básica.

Esto significa que ejercerán de profesores de primaria profesionistas que no se prepararon para ello, y que no tienen conocimiento alguno de didáctica. Bastará que sean licenciados y que aprueben un examen de conocimientos. En la docencia hay precedentes de excelentes maestros en activo que no estudiaron para serlo; sin embargo, no son casos muy frecuentes.

Por supuesto, en el futuro algunos de esos licenciados pueden resultar buenos profesores, pero nada garantiza que lo sean. Eso no se mide con una prueba. Aunque tengan sólidos conocimientos en su campo de estudios y la mejor intención del mundo, en su mayoría no saben cómo enseñar a niños y jóvenes. Desconocen las preocupaciones, intereses y realidades de los alumnos del sistema de educación pública básica. Ignoran cómo tratarlos, por una razón muy sencilla: fueron a la universidad para ejercer como biólogos, físicos, abogados u odontólogos, no para ser docentes de primaria o preescolar.

¿Por qué un licenciado que estudió una carrera universitaria para ser profesionista escogería pasar el resto de su vida en un aula de educación básica ganando menos dinero? Obviamente, no por vocación, sino por la falta de oportunidades laborales en su área de formación. Por supuesto, puede haber excepciones, pero la motivación central para hacerlo es tener un empleo, mientras consigue un trabajo mejor.

Evidentemente, un maestro que está de paso en el servicio, que ve su actividad en el aula como un trabajo temporal mientras encuentra un empleo mejor retribuido, difícilmente puede ser un buen profesor. El magisterio es una opción de vida. Los docentes de excelencia tienen, por lo regular, años de experiencia a sus espaldas.

Curiosamente, los maestros mexicanos a los que se quiere someter a una terapia de choque, poniéndolos a competir por el empleo con egresados de otras instituciones, poseen un nivel de formación muy razonable. Los datos de la encuesta “Disposición de los docentes al desarrollo profesional y actitudes hacia la reforma educativa”, levantada en 2010 por la SEP, así lo muestran. Según el estudio, 54.7 por ciento de los profes tienen una licenciatura normalista, 13.5 una licenciatura universitaria y 11.2 estudios de posgrado.

En las escuelas normales se forman maestros para ser maestros. Muchos de sus estudiantes provienen de familias humildes o son hijos de docentes. De sus aulas salen profesores que saben enseñar, y que abrazan la docencia como opción de vida.

En nuestro país, el normalismo como institución exclusiva de la formación de maestros, tiene 128 años de vida. Hasta ahora ha sido una profesión de Estado. Más allá de sus dificultades y limitaciones, hay en su práctica una inmensa riqueza pedagógica. Los normalistas han sido baluartes en la defensa de la educación pública. En algunas de sus escuelas —como las normales rurales— los estudiantes se forman con vocación de servicio social. A pesar de ello (o precisamente por ello), se le quiere condenar a muerte.

La novena ola magisterial

La tecnocracia educativa y la derecha empresarial detestan al normalismo. Quieren acabar con él. Claudio X. González demandó cerrar sus escuelas.

Lejos de promover una mejor educación, la reforma educativa que condena a muerte al normalismo y abre las puertas de la docencia en educación pública básica a licenciados de otras disciplinas es un incentivo al ejercicio de peores prácticas pedagógicas. Y, en lugar de permitir al Estado recuperar la rectoría del sector educativo, es un paso más hacia su desregulación.

La maestra Magda

La maestra María Magdalena Herrera Carrillo da clases de segundo de secundaria a 12 alumnos. Su escuela es la telesecundaria Felipe Ángeles, que se encuentra en la comunidad de Las Catarinas, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Sus estudiantes tienen entre 13 y 15 años. Son hijos de jornaleros agrícolas, y ellos lo son también.

Enseñar allí no es fácil. Los muchachos faltan mucho a clases. Ningún estudiante asistió a clases todo el calendario escolar. Algunos se ausentaron 22, 28 y hasta 39 días. Cuando hay trabajo abandonan la escuela. Jornalean por temporadas en la siembra y la cosecha de chile, cebolla, ajo y frijol, o dejan de atender las tareas escolares porque se van a tardear (a trabajar en el campo por la tarde).

Tampoco van cuando se ponen malos. Y se enferman mucho. En la comunidad hay una casa de salud, pero no tiene médico ni medicinas. Hay promotoras que apenas y tienen los conocimientos sanitarios básicos pero carecen de equipo. Los jóvenes están desnutridos. Muchos tienen la piel opaca y con manchas, y el pelo quebradizo.

Su futuro académico es gris. Al terminar la secundaria, los 80 alumnos de la escuela difícilmente van a seguir estudiando. No tienen forma de hacerlo. Su vida va a seguir intacta. En el pueblo sólo 14 personas tienen estudios más allá de los básicos. En cambio, casi uno de cada 10 habitantes es analfabeto. El grado medio de escolaridad es de apenas 4.3 grados.

La realidad educativa de Las Catarinas no se explica al margen de su situación socioeconómica. El poblado tiene mil 475 habitantes. Casi todos se dedican a la agricultura. Sólo 198 están reconocidos como parte de la población económicamente activa. Sus ingresos son precarios: 27 ni siquiera ganan el salario mínimo, 123 sacan entre uno y dos, y sólo uno obtiene más de 10 salarios mínimos.

En la comunidad hay 315 viviendas, 48 con piso de tierra y 27 de una sola habitación. Sólo dos terceras partes tienen instalaciones sanitarias, aunque prácticamente todas cuentan con luz eléctrica y televisor. Sólo en tres hay computadora.

Magda nació en Huejúcar, Jalisco, en el seno de una familia numerosa. Tiene 42 años de edad y una hija. De joven emigró a Zacatecas para estudiar humanidades y filosofía en la Universidad Autónoma de ese estado y una maestría en educación.

La docencia es lo suyo. Tiene vocación. Para ella carece de sentido ser maestra si su labor no tiene impacto. Ha enseñado lo mismo en escuelas públicas que en privadas, como el Tec de Monterrey. Con nostalgia recuerda que allí tenía todo lo que necesitaba para enseñar historia del arte: enciclopedias, cañones, pantallas, lo que hiciera falta.

Nada que ver con la infraestructura y equipamiento de la Felipe Ángeles, que ni computadora ni interconectividad tiene. De hecho, 90 por ciento de los alumnos no han manejado nunca una computadora. Los libros de texto parecen baraja, de tan desbaratados que están. En cada recreo, 80 jóvenes se amontonan en una elemental cancha de basquetbol. Allí juegan y hacen deporte. No importa qué tan buen profesor se sea, enseñar en esas condiciones es difícil.

Magda se desespera. Hace unos meses les pidió a unas alumnas que hicieran una investigación sobre la Segunda Guerra Mundial. Ellas se llevaron los libros de texto para trabajar. Pero la información que había en ellos fue insuficiente. Una de las estudiantes le mandó un mensaje de texto por cobrar en el que le preguntó: ¿dónde más puedo investigar? No tuvo respuesta: en el pueblo no hay bibliotecas, ni Internet, ni ordenadores; en las casas tampoco.

Pero su malestar es mayor cuando habla del futuro de sus estudiantes. Sabe que son inteligentes. Hay momentos en la clase, en que sus comentarios la sorprenden. Pero están inmersos en una realidad que no les ofrece un futuro mejor. Los muchachos quieren ganar dinero fácil y rápido. ¿Nosotros qué les ofrecemos?, ¿para cuál empleo los preparamos? No nos dejan que tengan expectativas.

En el municipio el narcotráfico florece. En las aulas se han escuchado balazos. Es un rival fuerte, asegura. “Me veo contradicha en lo cotidiano. Trato de abrirles otra expectativa, una senda de bien para ellos, y me preguntan: ‘¿Cómo llego a la universidad?’ Y yo, ¿qué respuesta les puedo dar?”

Como en tantas otras escuelas, los padres de familia pagan cuotas. Sirven para comprar papelería, reparar puer-

tas, chapas, baños. Pero nunca alcanza para todo lo que hace falta. Se necesitan mesas grandes, computadora, un globo terráqueo, las cosas mínimas para trabajar.

Magda da clases de 8 a 2. Se traslada a la escuela por carretera. Le toma 45 minutos llegar a Las Catarinas desde Zacatecas. En un día trabaja varias asignaturas con el mismo grupo, pero también ocurre que al mismo tiempo puede estar atendiendo un equipo que trabaja matemáticas, otro que trabaja español y otro en ciencias, porque no todos los estudiantes avanzan al mismo ritmo. Y, para hacerlo tengo que estar toda yo en ello. Es un trabajo absorbente. A veces me siento fuera de mí. No me acuerdo de los pendientes.

“La escuela, es más que las matemáticas, la geografía, la biología. Está conectada con la vida de las personas y las comunidades. Si les enseño algo es para que tenga impacto en su vida y en la de su comunidad. A mí no me preocupa si aprueban o no, sino las posibilidades que tienen de modificar su vida.”

A Magda la prueba Enlace le parece un equívoco, un mecanismo absolutamente inadecuado para evaluar a sus estudiantes. ¿Cómo ver lo que realmente impacta la escuela en sus vidas con un examen estandarizado de opción múltiple?

La reforma educativa, asegura la maestra, “no les va a funcionar. Yo no quisiera estar en su papel: ¿cómo le van a hacer para medir si un alumno pudo o no aprender a resolver un sistema de ecuaciones?, ¿cómo van a saber si el logro o la carencia que tuvo se debe a la manera en que se plantearon los ejercicios en el libro de texto, o se debió a las prolongadas ausencias del alumno, o al trabajo pedagógico del maestro? ¿Cómo van a deslindar responsabilidades? ¿Acaso van a reprobar a los profesores?”

La experiencia de la maestra María Magdalena Herrera Carrillo demuestra el absurdo de la reforma educativa. Una reforma hecha para un país inexistente. Muestra que es inviable. Anuncia su estrepitoso fracaso.

Una propuesta educativa desde el México profundo

Una y otra vez, a través de los medios de comunicación, se dice que la CNTE se opone a todo y no sugiere nada; se insiste en que carece de una propuesta educativa. La acusación, como tantas otras, es falsa.

El jueves 2 de mayo de 2013, la Coordinadora entregó a la Secretaría de Gobernación un documento titulado “Hacia la educación que necesitamos los mexicanos”. Allí, en seis apretadas cuartillas (síntesis de múltiples reuniones de trabajo y estudio), se resumen tanto sus razones para oponerse a la reforma educativa en curso como su propuesta pedagógica.

El proyecto alternativo del magisterio democrático expresa el sentir de cientos de miles de docentes de todo el país, sobre todo de los provenientes de los estados con mayor pobreza, marginación y violencia. También de aquellos que laboran en las orillas de los grandes centros urbanos, muy lejos de los enclaves de prosperidad. Ellos atienden a una parte muy importante de la población que no tiene al español como primera lengua, a hijos de familias partidas por la migración y a pequeños de poblaciones rurales ajenas a cualquier bienestar material.

Hacia la educación que necesitamos los mexicanos es un programa de enseñanza elaborado a partir de las raíces sociales profundas de los profesores democráticos y de su

compromiso con el país. Un texto surgido de su presencia como maestros —y a menudo como líderes cívicos y sociales— en comunidades (muchas de ellas indígenas), pueblos y ciudades de todo el país. Ellos conocen, mejor que cualquier autoridad gubernamental, muchas de las partes más problemáticas de la nación. Son testigos directos de la incapacidad del Estado para dar una educación digna a niños y jóvenes. Desde hace décadas, se han encargado, en condiciones verdaderamente difíciles, con muy pocos recursos y grandes carencias, de formar a estudiantes que con frecuencia llegan a las aulas sin probar bocado, presionados para dejar la escuela a la brevedad.

Su propuesta educativa surgió de multitud de foros, talleres, reuniones, seminarios y encuentros pedagógicos efectuados a lo largo de más de tres décadas. Es una síntesis de una diversidad de experiencias prácticas conscientemente ignoradas o desconocidas por los funcionarios educativos. Allí se resumen propuestas como el Plan alternativo para la transformación de la educación en Oaxaca (PTEO), el movimiento pedagógico José María Morelos y Pavón de Michoacán, las escuelas altamiranistas de Guerrero y muchos otros proyectos más elaborados en escuelas o regiones escolares de distintas entidades.

En el documento los maestros ratifican su rechazo a la reforma educativa, porque lo único que ofrece es que habrá más exámenes estandarizados y todo un aparato de supervisión y vigilancia sobre niñas y niños, maestros y escuelas. Porque no es una reforma que retome las grandes carencias y les ofrezca una respuesta más allá de medir, vigilar, estimular y castigar. Por el contrario, se trata de una

La novena ola magisterial norma persecutoria que amenaza con despedir a miles de maestros y con seguir descalificando como insuficientes a millones de niños. Es una legislación centralista, atentatoria de la pluriculturalidad y multiétnicidad de la nación. Se trata de una reforma acordada vertical y autoritariamente, sin una discusión nacional, al margen de quienes deben llevarla a cabo: los maestros de banquillo.

Hacia la educación que necesitamos los mexicanos propone una verdadera transformación de la enseñanza basada en una educación humanista que sustituya los valores del mercado por la práctica de valores universales; que recupere y coloque en primer plano el respeto y la ampliación del derecho humano a la educación, el fortalecimiento de la educación pública y un proceso educativo sólidamente arraigado en las necesidades del desarrollo de las personas y de sus comunidades y regiones.

Advierte el grave problema de la desigualdad en la enseñanza que existe en el país. Para enfrentarlo, propone aprobar el gasto de 12 por ciento del PIB para la educación a fin de garantizar la ampliación de la infraestructura en educación en todos los niveles, equipamiento y número de maestros. En 2013 se le asignó apenas 567 mil 379 millones de pesos, equivalente a 3.78 por ciento del PIB.

Los maestros democráticos exigen que todos los centros escolares del país cuenten con las condiciones óptimas materiales y humanas para desarrollar su labor. Demandan, además, de la actualización de docentes que se encuentran en servicio en todos los niveles. Sostienen que se necesita de un sistema nacional de bibliotecas presenciales y virtuales y acabar con el analfabetismo.

La CNTE no se opone a la evaluación, sino que propone una distinta, de abajo arriba. Una evaluación horizontal realizada desde las propias escuelas y comunidades, desarrollada como un ejercicio dialógico (basado en el diálogo y razonamiento) a nivel de cada zona, región y entidad federativa. Una evaluación que, al mismo tiempo que describe los problemas, analiza los factores que los causan, los remedios que pueden darse y recoge las experiencias exitosas de maestros y escuelas para mejorar la educación.

Propone que en cada escuela se forme un consejo de evaluación electo por la comunidad, que considere diversos elementos como las condiciones materiales del plantel, el trabajo docente, la carga administrativa, asistencia regular de alumnos, aprovechamiento académico, desempeño de las autoridades educativas. Este modelo debe reproducirse a escala estatal.

Los maestros democráticos sostienen que se requiere refundar las escuelas normales para fortalecer su misión histórica. El normalismo —afirman— debe defenderse y fortalecerse. Demandan la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas normales públicas, quienes fueron acreditados por una institución formadora reconocida oficialmente y cuentan con el perfil y el derecho correspondiente. La CNTE demanda cambios constitucionales y legales que al tiempo que establecen los grandes propósitos de la educación y sus condiciones mínimas, crean un marco donde las regiones del país puedan expresar y responder a sus necesidades en el entorno del federalismo y una sola nación y también una sola, pero diversa, educación. Su propuesta nace de lo profundo de una parte muy amplia del México profundo.

CAPÍTULO III

EVALUAR PARA VIGILAR Y CASTIGAR

Arrancan

La rechifla se escuchó fuerte. Cuando la maestra de ceremonias del *Encuentro Internacional Virtual Educa México 2015* anunció que el entonces secretario Emilio Chuayffet tomaría la palabra, el auditorio estalló en abucheos y pitidos. Por más que los miembros del estrado aplaudieron, las expresiones de enojo se escucharon más fuerte. Nada más tomar la palabra el secretario de Educación, los silbidos recomenzaron. El funcionario volteó a ver al presidente Enrique Peña Nieto y le sonrió.

Apenas cinco días antes, el 16 de junio, en el Club de Industriales, empresarios y la cúpula del SNTE lo ovacionaron. Afanosito con los señores del dinero, el licenciado Chuayffet se puso bravucón con los maestros democráticos. En un supuesto Diálogo sobre la reforma educativa en el que nada se dialogó, amenazó: Llueve o truene, habrá evaluación. Seguirá habiendo evaluación en México. Quien piense lo contrario ofende al presidente Peña.

Injurioso y ultrajante, dijo en alusión a la CNTE: No más plazas espurias, no más plazas vendidas, no más plazas heredadas. Y, haciéndose el chistoso, añadió: “Cuando se acercan por aquí y dicen ‘queremos un plan de estudio

La novena ola magisterial revolucionario', yo le cambiaría dos letras para decir: 'queremos un plan de estudio revolucionario'."

Las amenazas, mentiras e insultos de Chuayffet no surtieron efecto. Y eso que lo suyo no fueron sólo palabras. Varias sedes del examen donde se efectuaron las primeras evaluaciones fueron resguardadas por la policía. En Chiapas y en Durango, por ejemplo, los opositores a este examen fueron reprimidos.

Sin embargo, su intimidación fracasó. En ella participó una cantidad reducida de mentores: los que aspiran a ocupar puestos directivos de educación básica. El número de cargos sujetos a concurso fueron 1,721 a dirección, 1,300 para supervisión, y 15,141 a asesoría pedagógica. El trabajo de quienes participaron no estaba en peligro. Y, presentaron el examen quienes aspiran a un nuevo puesto, sin el riesgo de perder el que ya tienen. Por ello, el rechazo a estas pruebas es mucho menor que el que habrá en la tercera etapa de evaluaciones (en septiembre), en la que estará presente la amenaza de seguir o no frente a grupo.

Pero, a pesar de ello, las expresiones de rechazo a esta evaluación no consensuada con el magisterio no fueron despreciables. La prueba no se efectuó en Oaxaca y Michoacán, y en buena parte de Chiapas y Guerrero. En total, en 17 entidades hubo manifestaciones de protesta, y éstas se reprodujeron en otros estados.

Por si esto fuera poco, más allá de las protestas de quienes han objetado la evaluación, es de destacarse el gran número de quejas de quienes participaron en ella. El diseño y la aplicación del examen fueron lamentables. Son múltiples los testimonios de quienes lo respondieron y critican su

pobre calidad. La prueba fue confusa y tediosa. No dispuso de las características básicas que un ejercicio de esta naturaleza debe tener: confiabilidad, validez, equidad, pertinencia y objetividad. Además, el sistema de cómputo para responderlo fue lento, los maestros debieron esperar mucho tiempo para acceder al examen y el servicio de Internet falló en varias ocasiones. De hecho, a multitud de docentes no se le permitió concluir la prueba porque el tiempo destinado en el sistema para resolverla se había agotado.

Una de las examinadas, la maestra Teresa Rivera, resumió las fallas que encontró en la prueba: faltas de ortografía, errores de redacción, fallas de sintaxis y palabras mal escritas. Su contenido era de una pobreza espectral, carente de fundamento. Las repuestas solicitadas rayaban en la estupidez y, con frecuencia, se formularon varias preguntas con la misma contestación. “Es una ‘evaluación’ — señala la profesora Rivera— que ofende mi inteligencia y la de mis compañeros maestros.”

En la primera evaluación los evaluadores fueron reprobados, al diseñar y aplicar exámenes que no consideraron lo que los maestros verdaderamente saben y pueden hacer. Su verdadero objetivo consistió en cumplir, mal y de prisa, con un requisito formal, y dejar fuera del camino profesional a miles de maestros.

En el fondo, el fracaso de este examen tiene su origen en un hecho muy grave: la llamada reforma educativa ¡no tiene contenidos educativos! La nueva legislación aborda los asuntos de ingreso, permanencia y promoción en el servicio educativo, y el papel de la examinación en ellas, pero no el proyecto pedagógico que el país requiere. La norma legal

La novena ola magisterial puso la carreta delante de los bueyes. ¿Cómo evaluar a un maestro sin saber previamente cuál es el tipo de profesor que hace falta?

Formalmente, la SEP aparentó resolver este problema organizando en 2014 unos Foros para la Revisión del Modelo en Educación Básica. Y hasta nombró un Comité Técnico Asesor para ello. Sin embargo, no fueron más que fuegos de artificio. La consulta fue ignorada. Según Manuel Gil Antón, cuando, después de seis foros regionales, el comité informó del carácter inicial de los foros y de la necesidad de establecer espacios más cercanos a los profesores para expresar sus ideas y propuestas, Chuayffet declaró que ya había seis ejes para la transformación de la educación en México. Esos ejes (en parte sesgados y poco pertinentes) fueron instaurados de manera arbitraria, por sus pistolas.

Como demuestran los chiflidos y los abucheos que Chuayffet recibió ante la sociedad, los maestros y los ciudadanos, el secretario fue reprobado. Más aún, como declaró Porfirio Arias Hernández, presidente de Las Abejas: Emilio Chuayffet debería estar en la cárcel, porque es uno de los autores intelectuales de la masacre de 45 indígenas ocurrida en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

El montaje de los peloneados

En unos cuantos minutos Nayeli Mijangos saltó a la fama. El testimonio de lo que ella describió *como los 15 minutos más aterradores de mi vida* comenzó a difundirse profusamente el 4 de julio del 2015 en televisión, radio y prensa escrita. Desde entonces no hay día en que su historia no aparezca en algún medio de comunicación.

Chiapaneca, de 28 años de edad, Nayeli se convirtió desde ese momento en emblema de la supuesta brutalidad de los maestros democráticos del país. Según su relato, ella llegó al Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) número 138, en Tuxtla Gutiérrez, para presentar su examen como docente. Sin embargo, un grupo de profesores que rodeaban el plantel para impedir la prueba le estorbó el paso y la agredió.

La señorita Mijangos montó en pánico. De acuerdo con su narración, varios profesores le quitaron la ficha para efectuar el examen y otros documentos. Después, cinco sujetos le cortaron trozos de cabello. “Pensé —contó a la prensa— que me iban matar, que me iban a violar.” A pesar de que en el plantel había muchos testigos, no hay fotos de la supuesta agresión ni testimonios de otras personas que corroboren su palabra.

De inmediato, los medios de comunicación electrónicos pusieron el grito en el cielo. Agreden en Chiapas a maestros, dijeron una y otra vez. Sin embargo, Nayeli Mijangos no es maestra ni lo ha sido nunca. Es reportera y estudió comunicación social. Tiene estrecha relación con la diputada local Alejandra Soriano.

Desde hace años, en su labor periodística ha denostado a la CNTE. Así lo hizo, por ejemplo, en “A bajar la cortina”, donde narra cómo, supuestamente, comerciantes del centro de Tuxtla Gutiérrez se fueron a pique por la lucha magisterial. El 19 de octubre de 2013 tuiteó: “Ooootra de maestros vs la prensa: amagan, empujan y roban memoria de su cámara al fotógrafo de la Tinta”.

La licenciada Mijangos aseguró que el pasado 4 de julio iba a concursar para poder impartir la materia de redacción y expresión en el nivel medio superior. Sin embargo, ese sábado los exámenes no eran para ingresar a dar clases, sino para otro asunto: la evaluación para el ingreso y promoción a cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en educación media superior. Es decir, o la periodista se equivocó de examen o, en realidad, fue al Cetis 138 a otra cosa: a protagonizar un montaje contra la CNTE.

Ante la prensa, además de atacar a los profesores democráticos, se dedicó a ensalzar la evaluación educativa. “No le veo ningún inconveniente a ser evaluados —dijo ante los micrófonos—; la superación profesional es algo de lo cual siempre me ha gustado y por eso quiero acceder a practicar un examen de admisión para poder tener un lugar y superarme profesionalmente.”

Convertida en celebridad por una semana, la periodista trató de organizar un movimiento de supuestos afectados por los maestros democráticos. Para ello, descongeló su cuenta de Twitter, sin uso desde el 3 de diciembre de 2013. Desde allí convocó el pasado 8 de julio: “Por favor quienes al igual que yo fueron agredidos por los maestros, especialmente en el Cetis 138, comuníquense conmigo por este medio”. Nada sucedió.

Cuestionada por su relación con Alejandra Soriano, negó que la legisladora tuviera que ver en el asunto. “En ningún momento la diputada me dijo ‘te voy a palanquear o ya hablé con tal para que entres’ —explicó la licenciada Mijangos en un lenguaje que desnuda las clases de redacción que quiere impartir—, no; es más: creo que la diputada

se enteró hasta después, quizá se enteró hasta que yo le dije que iba estar en un examen del Dgeti por si necesitaba algo que supiera que no le podía contestar por el examen.”

Curiosamente, no es la primera ocasión en la que la reportera salta a la fama por un supuesto hecho de violencia en su contra. El 14 de agosto de 2013, Mijangos denunció que fue agredida por Eduardo Zenteno, delegado de la Sedesol en Chiapas.

Junto al testimonio sobre la hipotética trasquilada a Nayeli, los medios de comunicación presentaron fotos de dos profesores a los que se les cortó el cabello. Aparecen también en inserciones pagadas por el SNTE. Sin embargo, ellos no son maestros. Efectivamente la multitud detuvo a esos dos hombres y los peloneó, pero ellos ni son docentes ni fueron a presentar ningún examen. Son policías vestidos de civil que trataron de infiltrarse en la protesta.

El grupo indignado que los retuvo quemó también la patrulla en la que iban. El hecho, por supuesto, no tiene justificación, pero es un indicador del clima que el linchamiento generalizado contra los profesores ha propiciado.

Los maestros democráticos de todo el país se deslindaron de la violencia. José Luis Escobar, integrante de la sección 7 de los trabajadores de la educación en Chiapas, señaló que no se pueden justificar los actos de violencia, sin embargo culpó al Estado por comenzar con las agresiones al infiltrar policías en el proceso magisterial. La vilipendiada sección 22 condenó estos hechos, y llamó a mantener la protesta civil pacífica. Por supuesto, su toma de posición fue silenciada por la gran mayoría de los comunicadores.

No hay evidencias ciertas de que maestros que querían evaluarse en Chiapas hayan sido trasquilados. Además del dudoso testimonio sin comprobar de la periodista (no profesora) Nayeli Mijangos, y de las fotos de dos policías, no se presentó ningún testimonio adicional que demuestre que esos hechos sucedieron.

Lo acontecido en Tuxtla Gutiérrez el 4 de julio de 2015 fue, simultáneamente, una provocación y un montaje mediático de gran calado contra los profesores que rechazan una reforma educativa sin contenidos educativos. Una desesperada arremetida para desacreditar a quienes defienden la educación pública. Un inescrupuloso intento por frenar el desbordamiento del descontento magisterial en todo el país y por detener la vapuleada en la opinión pública contra Emilio Chuayffet. No sería el único.

¡Dios está con la CNTE!

El 28 de noviembre de 2015 tembló en Oaxaca. A las 12:20 horas la tierra comenzó a moverse. En las instalaciones de la ciudad administrativa maestros de la entidad de diversas instituciones educativas se evaluaban. La magnitud del sismo fue de 4.6 grados. Los profesores no fueron desalojados. La prueba siguió. Fue entonces cuando, en plena sacudida, un grupo de docentes del área de educación medida superior reinterpretó a su manera el *Dios nunca muere*, de su paisano Macedonio Alcalá, alzó las manos y exclamó: ¡Dios está con la CNTE!

Ése no fue el único sismo que sacudió a Oaxaca ese día. Varios otros, provocados por la inconformidad magisterial, zarandearon el estado. Muchos se suscitaron dentro

de la misma ciudad administrativa, donde supuestamente se encontraban los maestros que estaban de acuerdo con la evaluación. Los docentes de uno de los subsistemas educativos se quitaron los suéteres y mostraron una playera blanca con un letrero que decía: “Vengo bajo protesta y obligado, si no, me corren”.

Las expresiones de descontento de los profesores con la evaluación, que laboran en los planteles del Colegio de Bachilleres o del Centro de Estudios Tecnológicos o en los del Colegio de Educación Profesional Técnica, y que no pertenecen a la sección 22, habían comenzado horas antes.

En plena madrugada, emulando lo que en 1968 fue la manifestación de los trabajadores al servicio del Estado organizada para desagaviar a Gustavo Díaz Ordaz, nada más bajarse de los autobuses que los trasladaron a la ciudad administrativa y cruzar el cerco de la Policía Federal, los docentes comenzaron a gritar ¡Beee!, ¡beee!, ¡beee! ¡Ya llegamos! ¡Somos los borregos! ¡Venimos obligados! Otros alzaron el puño y dijeron: “Nos obligaron a venir”, o “Si yo fuera CNTE y mi sindicato me respaldara no estaría aquí”.

Su malestar se hizo sentir también en pequeños actos simbólicos, como negarse a comenzar el examen a las siete de la mañana, como querían las autoridades, porque la convocatoria estipulaba que el inicio era a las ocho. O no probar los desayunos que les ofrecieron y rechazar llevarse a su casa la comida que sobró.

La realización de la evaluación estuvo llena de anormalidades. Decenas de supuestos maestros, en realidad cachirules, desconocidos para sus compañeros, fueron colados para que en las fotos distribuidas en los boletines oficiales los

salones aparecieran llenos de profesores haciendo la prueba. Muchos eran empleados del gobierno del estado, a los que amenazaron con el despido si no cooperaban. Otros eran, simple y llanamente, miembros de las juventudes del PRI.

A trasmano, a varios profesores se les dijo que no debían preocuparse, porque el resultado del examen no tendría consecuencias para ellos. Los examinadores del Ceneval permitieron que grupos de docentes respondieran el cuestionario en colectivo. Más tarde, la segunda etapa de la prueba programada para ese día fue suspendida.

El número final de maestros de educación básica de la sección 22 que se evaluaron fue muy pequeño. Quienes lo hicieron se presentaron por miedo, no por convicción. Para variar, las autoridades manipularon las cifras. ¡Y ni siquiera se pusieron de acuerdo entre ellas! Según el secretario Aurelio Nuño los examinados fueron 2,635, y de acuerdo con Gabino Cué alcanzaron 2,981.

De ese número hay que descontar a los profesores de bachilleratos generales y técnicos, a los aspirantes a nuevo ingreso y a los afiliados de la sección 59, formada por Elba Esther Gordillo y el ex gobernador Ulises Ruiz para dividir a la 22. Es decir, la inmensa mayoría.

Para tratar de ocultar el fracaso de su estrategia, las autoridades no permitieron el acceso de la prensa durante la jornada de evaluación y tampoco estuvieron presentes testigos. Sin embargo, decenas de testimonios sobre lo sucedido ese día en la ciudad administrativa circulan en redes sociales o han sido narrados por otras vías con la petición de que no se incluya el nombre de quien lo brinda.

Ese 28 de noviembre tembló también fuera de la ciudad administrativa. A pesar del enorme despliegue policia-

co y la campaña previa de amedrentamiento, más de 20 mil maestros marcharon con la consigna: ¡El examen punitivo murió, en Oaxaca se enterró! Tenían tras de sí a una dirección unificada y el respaldo de sus líderes históricos.

Con rabia y prudencia, sorteando la labor de los provocadores, lograron replegar cuatro cercos policiales. Ni los toletes ni los gases lacrimógenos los atemorizaron. De manera simultánea, otras movilizaciones se realizaron en diversos puntos del estado. Un día después, los trabajadores de la educación y sectores populares volvieron a tomar las calles de la ciudad de Oaxaca.

Como lo hizo con sus anteriores descalabros, y como si viviera en otro país, la SEP declaró que la evaluación en Oaxaca había sido histórica. Y Aurelio Nuño, titular de la dependencia, añadió: Lo más importante es que tuvimos una participación de los profesores de Oaxaca que poco a poco se empiezan a sacudir las presiones y el yugo que ejercía esta sección 22 de la CNTE y se van sumando a la reforma educativa por el bien de la educación de los niños y de las niñas de México.

Así se las gasta la SEP. Aunque luego sus mentiras queden en evidencia. Así sucedió con el fracaso de la evaluación el 17 de noviembre de 2015 en Durango, Tlaxcala, Sonora, Zacatecas y Morelos. Allí se vio obligada a separar de sus cargos a sus delegados en esas entidades. No advirtieron a la SEP sobre las condiciones en que iba a aplicar la evaluación de desempeño y las dificultades de la misma; así como sobre la inconformidad magisterial por la reforma educativa y la evaluación docente, señala una nota de *Reforma*. ¿Hará ahora lo mismo la Secretaría con Moisés Robles, el policía que puso al frente del IEEPO?

¿Histórica la evaluación oaxaqueña? Sí, si le tomamos la palabra a Arturo Cano, quien escribió en su cuenta de Twitter: La evaluación docente fue un éxito. Sólo requirieron 3.3 policías por cada maestro que presentó el examen.

El descalabro guerrerense

Guerrero vive asolado por el crimen. Es uno de los estados más inseguros del país. No hay región en la entidad que esté a salvo de la violencia. Tan sólo durante noviembre se perpetraron allí 172 asesinatos, 79 en Acapulco.

No es extrañar, pues, que el 3 de diciembre de 2015 se haya enviado a la perla del Pacífico a 6 mil policías federales. Desafortunadamente no llegaron a cuidar a los ciudadanos de las bandas delincuenciales. Su misión fue otra: resguardar las instalaciones de Fórum Mundo Imperial, donde se evaluó a los docentes. Los gendarmes fueron enviados no a perseguir hampones, sino maestros insumisos.

El promedio no está mal: 6 mil uniformados para cuidar a 2 mil 77 maestros examinados. Es decir, tres policías por docente.

Sin embargo, pese al enorme despliegue policiaco, las autoridades educativas no pasaron la prueba de la evaluación. Una espontánea rebelión en la granja la descarriló. E, incapaces de admitir su responsabilidad en la desorganización del acto, se apresuraron a culpar a los maestros de lo sucedido. Fue un sabotaje fallido, dijeron.

La historia de lo sucedido el 4 de diciembre en Acapulco quedó como botón de muestra del desgarrate oficial. Aunque no se permitió el acceso de los reporteros al recinto hasta las 4 de la tarde (y sólo después de que protestaron

y fueron amagados por los antimotines), las inconsistencias del relato oficial pueden constatarse revisando tres videos que tuvieron amplia difusión en redes sociales y medios electrónicos, y testimonios aparecidos en *La Jornada* Guerrero, *El Sur* de Acapulco y el canal de televisión de *Excélsior*.

Unos 3 mil profesores de diversas instituciones y niveles educativos fueron trasladados al puerto desde el día anterior, y hospedados en hoteles de lujo, como el Princess, Pierre Marqués y Resort Mundo Imperial, pertenecientes al grupo Autofin, del empresario Juan Antonio Hernández.

No todos los docentes que asistieron a la prueba eran parte del grupo de notificados. Fueron incluidos maestros que se apuntaron al final porque la autoridad les ofreció beneficios personales. También participaron trabajadores al servicio del gobierno del estado que nada tienen que ver con la educación, a los que se les pidió que asistieran y se hicieran pasar por profesores.

A las 5 de la mañana los examinados se concentraron en el *lobby* de los hoteles, pues debían estar en Fórum Mundo Imperial entre 5:30 y 6:30. Según el secretario de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega, llegaron 2 630 maestros. Para ingresar a las instalaciones pasaron retenes policiacos dotados de equipo antimotines y unas enormes barras metálicas. Presentaron su identificación oficial y su hoja de notificación. Ya dentro del edificio desayunaron huevo con papas.

A las 8 de la mañana comenzó la prueba. Poco después de las 9:30, un grupo de maestros de educación física reclamó al secretario de Educación la falta de computadoras para hacer el examen. Esto, a pesar de que allí había equi-

pos de cómputo empacados, que no fueron instalados. Otros profesores estaban molestos porque no podían ingresar al sistema por fallas en el programa.

El secretario ofreció que los que no habían alcanzado computadoras podrían hacer el examen cuando sus compañeros terminaran el suyo. A los afectados les pareció una respuesta muy poco seria: llevaban horas esperando.

Fue cuando dos maestras inconformes fueron jaloneadas por agentes uniformados y otros profesores más empujados por antimotines. Ofendidos, algunos profesores comenzaron a gritar: ¡Que se vayan los policías, no somos delincuentes!, mientras otros exclamaban ¡vámonos!, ¡son las mismas ratas!, y otros más ¡sí se puede, sí se puede! y ¡júntense, júntense! En ese momento varios docentes apagaron sus computadoras, hasta que, finalmente se desconectó el sistema.

En pleno desorden, convencidos de que no había garantías para hacer el examen, muchos maestros trataron de abandonar el recinto, pero los guardias quisieron impedirlo. Y, cuando el gobernador Héctor Astudillo llegó a Mundo Imperial, personal de la Secretaría de Educación estatal ofreció dinero a los docentes para que siguieran realizando la prueba.

Finalmente, cuando horas después las autoridades pudieron restablecer el orden, la evaluación continuó en medio de múltiples anormalidades. Con permiso de la autoridad, muchos maestros que la presentaron respondieron las preguntas en grupo o consultando manuales.

Más que ser resultado de una nueva edición del caballo de Troya protagonizada por la disidencia magisterial,

lo que propició el descalabro del examen docente en Guerrero fue la suma de la torpeza gubernamental para operarlo, y el enorme malestar del magisterio (incluso del que está dispuesto a examinarse) contra una evaluación impuesta por la amenaza del despido y con el apoyo de la policía.

A los graves problemas que regularmente la autoridad ha tenido que enfrentar al hacer la evaluación en otros estados, en el caso de Guerrero hay que añadir un factor: el papel de José Luis González de la Vega, el secretario de Educación del estado.

También encargado del despacho durante la administración de Zeferino Torreblanca, González de la Vega —durante años estrecho colaborador de Elba Esther Gordillo— es acérrimo enemigo de la Normal Rural de Ayoztzinapa, y ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como responsable de múltiples irregularidades en el manejo de los recursos presupuestales. Su autoritarismo e ineptitud fueron claves en el fracaso del examen del pasado 4 de diciembre.

Pero, más allá de falsos caballos de Troya y torpezas gubernamentales, hay datos duros que muestran el fracaso de la evaluación en Guerrero. Si allí se examinaron sólo 2 mil 77 maestros (varios no escogidos originalmente) de 4 mil 100 notificados, eso significa que hicieron la prueba apenas la mitad de los profesores requeridos. En pocas palabras: la SEP salió reprobada.

El fracaso de la estrategia policial

La maestra Nora Alicia Cruz Sánchez tiene cinco años de servicio y fue directora de primaria. Cuenta con maestría y

doctorado. Cuatro documentos la acreditan como evaluadora. A pesar de ello, el pasado 14 de noviembre rechazó evaluarse porque –dijo públicamente– no estoy de acuerdo y no quiero ser parte de esa mentira, de esa farsa.

No exageró. De manera arbitraria e ilegal, a la profesora Cruz Sánchez le avisaron que debía presentar su examen sobre desempeño tan sólo nueve días antes de la evaluación. La seleccionaron en el último momento, cuando otros docentes tuvieron meses para prepararse para la prueba. Por eso acusó: “Se está actuando con dolo sobre mi persona o me están discriminando”.

Nora Alicia es evaluadora. Se inscribió en la primera convocatoria y cumplió con todos los requisitos para serlo. Cuenta con la documentación que la acredita como tal. Sin embargo, ni a ella ni a muchos otros evaluadores los llamaron para examinar a los docentes. Su nombramiento y el de sus compañeros fue un engaño.

La actitud de la maestra Cruz Sánchez no fue un caso aislado en las evaluaciones. Como sucedió a la profesora, muchos docentes fueron incorporados en el último momento al examen, algunos por la fuerza y otros con la promesa de otorgarles créditos de vivienda. Muchos fueron notificados ilegalmente. Todo con el objetivo de maquillar las cifras de la participación en la prueba, cubriendo las vacantes de quienes se negaron a ser examinados.

Pese a las amenazas del secretario de Educación, Aurelio Nuño, en la mayoría de los estados se suscitaron actos de protesta, como el de la profesora Nora Alicia. En Zacatecas, maestros indignados porque el sistema de cómputo no funcionó y las autoridades mandaron funcionarios de Cene-

val a vigilarlos acordaron desertar de la prueba. En Ciudad Juárez debieron reprogramarla para la próxima semana. Las redes sociales están llenas de testimonios similares.

Muchos docentes que respondieron el examen salieron sumamente molestos. Explican que la prueba fue excesivamente larga, confusa, tramposa, agotadora, con fallas en las instrucciones, faltas de ortografía, errores de sintaxis. Explican que multitud de preguntas fueron sesgadas, repetitivas, descontextualizadas, sin relación con lo que ellos enseñan en clase. Por si fuera poco, el pésimo sistema de cómputo con que tuvieron que trabajar los sacó con harta frecuencia de la sesión, de modo que perdieron un tiempo valioso y concentración. Fue una trampa destinada a evidenciar a los trabajadores de la educación como no idóneos.

Con la misma esquizofrenia informativa, la Secretaría declaró que entre el magisterio hay un gran respaldo a la evaluación, pero que ampliaba el plazo para que los maestros presentaran evidencias de su desempeño profesional. Ramiro Álvarez, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, aseguró que ha habido una respuesta muy padre para la educación de este país, y que los profesores han respondido masivamente al llamado a evaluarse.

Pero, de ser eso cierto, ¿por qué la SEP pospuso, una vez más, el plazo para presentar evidencias, y anunció que los maestros pueden hacer el examen aunque no hayan cumplido con este requisito? La respuesta es obvia: porque es mentira que muchos maestros acepten la evaluación y están desobedeciendo la orden de la SEP.

Los profesores que han sido designados por la autoridad para someterse a la evaluación sobre el desempeño

La novena ola magisterial

deben seguir cuatro pasos. En el primero, el director de la escuela debe dar un informe sobre el maestro a su cargo. En el segundo, el docente está obligado a subir a una plataforma (que funciona muy mal) sobre su desempeño laboral. Estas dos fases han tenido que ser aplazadas de manera reiterada.

La tercera y cuarta etapas consisten en la aplicación de un examen estandarizado de opción múltiple, que hace las mismas preguntas a profesores que laboran en distintas realidades socioeconómicas y culturales.

Una y otra vez, en todo el país, los maestros se movilizaron contra la evaluación. Las marchas en Chiapas y Michoacán fueron impresionantes. No obstante que granaderos y policías resguardaron las sedes del examen, miles de docentes cercaron sus entradas. En Morelos, bloquearon las seis instalaciones de aplicación de la prueba. En multitud de ciudades hubo forcejeos y choques con los granaderos. Hubo 10 docentes heridos y arrestados.

Previamente, el gobierno federal decidió diferir la evaluación en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Nuevo León y Veracruz. Más que abrir un compás para la negociación, la reprogramación fue para avanzar primero sobre los estados que las autoridades consideraban sin problemas y concentrar después la fuerza pública de manera escalonada en los problemáticos. La orientación fue aislar a los objetores, concentrar a la policía y disuadir a los opositores. La maniobra fracasó. Posponer la prueba fue un descalabro. Y, para desgracia del secretario, entidades tranquilas como Sonora y Sinaloa le salieron respondonas.

El gobierno federal pretendió mandar el mensaje de que miles de profesores asistieron convencidos a la evalua-

ción. Fracasó. Si una imagen sintetiza las jornadas de examen, es la de la fuerza pública resguardando las sedes de aplicación del examen y la policía golpeando, persiguiendo y arrestando a los maestros en distintos lugares del país. ¿Qué legitimidad posee una reforma educativa que se tiene que imponer por la fuerza a los docentes?

A pesar de todo, con la esquizofrenia informativa que acotumbra, la Secretaría declaró que entre el magisterio hay un gran respaldo a la evaluación, pero que ampliaba el plazo para que los maestros presentaran evidencias de su desempeño profesional.

Aun los profesores que hicieron la prueba declararon una y otra vez: “Estamos aquí contra nuestra voluntad. Estamos aquí porque fuimos amenazados”.

Evaluar la evaluación

El saldo inicial de la primera etapa de evaluación parece más un parte de guerra que una jornada pedagógica: miles de policías federales fueron trasladados a diversos estados del país para garantizar su realización; un maestro resultó muerto, muchos más fueron golpeados y heridos; más de una decena fueron detenidos (cuatro en el penal de alta seguridad de Almoloya), y multitud amenazados con el despido.

Más que por las notas escritas, el significado profundo de esta etapa puede verse a través de las imágenes con que se narró gráficamente: un número interminable de fotografías del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, al lado del comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo; gendarmes golpeando con garrotes a maestros inconformes; helicópteros policiales surcando los aires

La novena ola magisterial para disuadir las expresiones de descontento o con la misión de trasladar a profesores a realizar la evaluación; fuerzas del orden lanzando gases lacrimógenos contra trabajadores de la educación; uniformados retenidos por maestros a la espera de ser canjeados por sus compañeros detenidos; la llegada a Oaxaca del rinoceronte y tanquetas antidisturbios, o el cuerpo sin vida de David Gemayel Ruiz, arrollado por un vehículo policiaco.

Los cartonistas captaron y reprodujeron el sentido del momento magistralmente. En un dibujo de El Fisgón puede verse a un granadero vestido como Robocop, con el pie y el tolete encima de un maestro que yace vencido sobre el piso. El uniformado muestra al profesor un libro sobre la reforma educativa que trae en su mano izquierda, al tiempo que le dice: Te lo tienes que aprender de la A a la Z. En el fondo, un pizarrón escolar tiene escrito con caligrafía manual trazada en tiza blanca el mensaje de la jornada de evaluación: la letra con sangre entra.

En otro, éste de Rocha, aparece el secretario Aurelio Nuño con el letrero de SEP en la solapa del saco, en un pupitre escolar y con un garrote policial en la mano, mientras sentencia amenazante: Nosotros, más que aprender, venimos a la escuela a aprehender.

Varios breves videos grabados con teléfonos inteligentes y subidos a YouTube documentaron, sin más narrativa que la atropellada sucesión de imágenes, la rebelión de los indignados maestros guerrerenses que habían aceptado participar en la evaluación, y que al presentarse se encontraron con que no había equipos de cómputo suficientes para llevarla a cabo. Otros videos dieron cuenta de la represión

sufrida por profesores sonorenses que bloquearon la realización de la prueba en su estado.

En la mejor tradición de la cultura del grupo Atlacomulco y del autoritarismo del mundo empresarial, hay quienes ven en la militarización de la evaluación educativa reflejada por esas imágenes, un ejercicio congruente de mano firme que se agradece, de certeza política en las decisiones. Sin embargo, la mera colección de fotografías, cartones y videos son evidencia de un estrepitoso fracaso. La militarización del examen es la derrota de la política.

La oposición activa se expresó no sólo en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Veracruz, sino prácticamente en 28 estados. Sin embargo, el descalabro gubernamental no sólo provino de la insurgencia magisterial, sino de la incapacidad misma de las autoridades educativas para efectuarla. El propio INEE reconoció públicamente que el proceso no se pudo realizar adecuadamente y tuvo muchas fallas técnicas y de logística.

Esos errores comienzan por la piedra angular del proceso: el examen. En los hechos, antes de su realización masiva, debieron efectuarse pruebas experimentales para ver si la prueba era adecuada o necesitaba cambios. No se hizo así. Por las prisas, se aplicó a la fuerza. El resultado fue bastante malo. Multitud de maestros que la presentaron han expuesto públicamente cómo muchas de las preguntas que se les hicieron eran absurdas, estaban mal redactadas y tenían doble sentido.

Además, como una docente afirmó a Laura Poy en *La Jornada*, el examen de conocimiento y habilidades didácticas se aplicó en un formato complejo, que hizo muy pesado re-

solver las preguntas. Había mucha presión. Quienes presentaron la prueba nunca supieron por qué y con qué criterios fueron seleccionados. Muchos recibieron la notificación para participar apenas 48 o 72 horas antes de que cerrara el periodo para subir evidencias personales.

El propio INEE admitió que hubo fallas tanto en la integración de las listas definitivas de quienes serían evaluados como en la entrega de claves para subir evidencias, así como dificultades técnicas y confusión para resolver algunas etapas. Reconoció también que los exámenes se aplicaron en algunos lugares en condiciones poco propicias para llevar a cabo una experiencia que debe ser formativa y exige condiciones para pensar y reflexionar.

En los hechos, la evaluación fue realizada de manera apresurada, mal preparada y organizada, relativamente caótica y con improvisaciones. Fue un acto punitivo, no un ejercicio pedagógico.

Hay elementos suficientes para afirmar que esa prueba no sirvió para saber si un maestro con años de experiencia es o no idóneo. En cambio, generó entre el magisterio mayor confusión, desconfianza y hartazgo hacia las autoridades educativas.

CAPÍTULO IV DIOS NUNCA MUERE

El cuento de hadas

Para explicar el origen del conflicto magisterial en curso, la fuerza de la disidencia de los docentes democráticos en el país y los problemas educativos en curso, el poder inventó un cuento de hadas. Según su relato, todo comenzó en Oaxaca en 1992, cuando el gobernador Heladio Ramírez López entregó a los maestros el control de la educación en la entidad.

De acuerdo con la fantasía oficial, una Minuta de 16 puntos, firmada por el mandatario oaxaqueño (en papel de Caperucita Roja) y el profesor Erangelio Mendoza (en función de Lobo Feroz), en nombre de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), proporcionó a los maestros sindicalizados el control absoluto del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y recursos ilimitados.

Este control —continúa el cuento gubernamental— es la base de poder de la CNTE, no sólo en Oaxaca sino en el resto del país. Según esta ficción, basta con derogar la Minuta de 1992 para acabar de una vez por todas con la fuerza del malvado lobo feroz y permitir al pobre Estado-caperucita roja librarse del villano y recuperar la rectoría de la educación.

El cuento de hadas... es un cuento de hadas. La sección 22 nunca nombró ni a los directores ni a los principales directivos del IEEPO. Todos y cada uno fueron designados por el gobernador en turno. Tampoco controló sus recursos. Su incidencia en la institución fue mucho más limitada que lo que las mentiras oficiales han difundido. La fuerza de los maestros oaxaqueños nunca ha dependido del supuesto control que ejercen en la dependencia. De hecho, la famosa Minuta se firmó 12 años después de surgido del movimiento. Entre 1980 y 1992 los profesores democráticos fueron insistentemente acosados por el SNTE.

El cuento de hadas gubernamental al uso responsabilizó de la firma de la Minuta a Heladio Ramírez. Pero resulta que en aquel entonces era secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, y titular de Educación Pública Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Algún analista o político en su sano juicio cree que el gobernador de Oaxaca pactó el acuerdo con el magisterio oaxaqueño sin la aprobación de estos dos funcionarios? ¿Algún iluso puede afirmar que esos políticos eran blandos a la hora de negociar con la disidencia magisterial?

Como sucede ahora, la ilusión de acabar con la CNTE siempre ha estado presente en las élites gubernamentales. Pero nunca han podido desaparecerla. De distintas maneras y por diferentes vías, la Coordinadora ha terminado negociando con los gobiernos en turno a lo largo de sus 36 años de vida. La lista de los funcionarios con que ha tratado es enorme. Entre muchos otros, además de don Fernando y del ex presidente Zedillo, están Jesús Reyes Heróles, Manuel Bartlett, Fernando Solana, Manuel Camacho, Patrocinio

González Garrido, Jorge Carpizo, Carlos Abascal y muchos otros. Si varios de estos políticos tuvieron que tratar con la Coordinadora no fue porque quisieran; la realidad los obligó a hacerlo.

En su momento, a su manera, muchos de ellos inventaron también su cuento de hadas acerca de la naturaleza de la insurgencia magisterial y sobre cómo era posible derrotarla. Por ejemplo, en 1983, mientras los charros del SNTE gritaban a los maestros democráticos ¡Hijos de Reyes Heróles!, el entonces secretario de Educación desautorizaba a la Normal Superior de México impartir cursos foráneos, descentralizaba las especialidades hacia cuatro centros fuera del DF y destituía al cuerpo directivo de la institución. Se decía entonces que, como la Normal Superior era la base de operaciones de la CNTE, al estrangularla se iba a asfixiar a la disidencia. Pero eso no pasó. La Coordinadora asimiló el golpe y siguió adelante.

También la actual administración ha negociado con la CNTE. En su comparecencia en la Cámara, el subsecretario de Gobernación. Luis Enrique Miranda, informó que el gobierno federal había firmado con la disidencia 19 minutas; la última el pasado 4 de junio. Se guardó de decir que el gobierno ha incumplido muchos de esos compromisos.

Creerse los cuentos de hadas es peligroso. Y es que, en una de esas, se aparece el Lobo Feroz.

La *blitzkrieg*

Acosado por el escarnio público provocado por la fuga de El Chapo Guzmán, por la imparable devaluación del peso, por el estancamiento de la economía, por el fracaso de la prime-

ra ronda petrolera y por la incesante violación a los derechos humanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió el 21 de julio de 2015 tender una nube de humo a sus descalabros y huir hacia adelante con un golpe de mano contra el magisterio oaxaqueño.

Como si los profesores fueran una amenaza para la seguridad nacional, la *blitzkrieg* de Los Pinos trasladó a Oaxaca miles de uniformados: 4 mil policías federales, tres brigadas de la policía militar de 660 elementos cada una, además de los 4 mil soldados de la Zona Militar.

Por si fuera poco, ocupó edificios públicos e infraestructuras estratégicas, hizo que los helicópteros sobrevolaran la capital del estado, congeló ilegalmente las cuentas bancarias del sindicato magisterial y de algunos de sus dirigentes y puso sobre sus cabezas la espada de Damocles de su posible detención.

De paso, desapareció por decreto, sin notificación alguna, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y rompió unilateralmente los compromisos que regulaban las relaciones laborales y profesionales entre el gobierno del estado y los maestros. Desde Los Pinos se presenta la desaparición del viejo IEEPO como la medida que permitirá al gobierno estatal recobrar la rectoría de la educación. Eso es falso. El nuevo organismo abroga en los hechos la federalización educativa y mete a su junta directiva a la SEP. De paso, incorpora a su conducción a personas tan entendidas en asuntos educativos como los titulares de las secretarías general de Gobierno, Salud, Finanzas, Administración, Desarrollo Social, Culturas y Artes, Contraloría y Transparencia.

Ironías de la reforma educativa, el director del nuevo IEEPO es el mismo que estuvo al frente del viejo IEEPO desde octubre de 2014: Moisés Robles Cruz. Abogado de formación, integrante del grupo cercano al ex gobernador Diódoro Carrasco —con quien colaboró como coordinador de Documentación y Control de Gestión de la oficina cuando éste fue secretario de Gobernación—, el ahora responsable de la instrucción pública básica y normal de Oaxaca ignora el mundo de la pedagogía.

Más que para encabezar la enseñanza, su trayectoria es idónea para ser jefe de policía: fue agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y, posteriormente, director general de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, en tiempos del inefable Genaro García Luna.

Según la campaña mediática del gobierno, la representación de los dirigentes de la sección 22 proviene, no del mandato de sus bases, sino del supuesto control que tienen del IEEPO. Han difundido la idea de que la fuerza de la CNTE depende exclusivamente de Oaxaca. Y, encarrerados, se han hecho ilusiones de que, a partir del golpe de mano contra los oaxaqueños, las protestas en el resto del país cesarán.

Pero eso no sucedió. La *blitzkrieg* no frenó el descontento magisterial a escala nacional. El actual malestar de los profesores no se limita a la CNTE, ni la fuerza de la Coordinadora está constreñida a Oaxaca, por más que allí esté su contingente más consolidado. Es falso que la legitimidad del liderazgo de los trabajadores de la educación de la sección 22 dependa de su influencia en el IEEPO.

El movimiento democrático en la entidad surgió en mayo de 1980. Entre ese año y 1992 — fecha en que se formó el IEEPO — actuó en la escena política estatal y nacional con mucho vigor y capacidad de convocatoria. Lo hizo a pesar de que, en distintos momentos, no contó con la representación formal, porque, entre 1985 y 1989, Carlos Jonguitud se opuso a la realización de su congreso. El gremio no tuvo un centavo de cuotas sindicales para moverse. Y, a pesar de eso, siguió actuando y fue un dolor de cabeza para los gobernadores en turno. Contar o no contar con apoyos institucionales no fue un impedimento para que protestara.

La actual dirección del gremio en Oaxaca es transitoria. De hecho, todas lo han sido desde que se nombró el primer comité democrático en 1982. Ningún representante se reelige. Al terminar su periodo sindical regresan a su escuela. A lo largo de los 35 años de vida que el movimiento ha formado a centenares de líderes. Meter a la cárcel a algunos de ellos puede ser un contratiempo, pero no descabeza la organización.

El nuevo IEEPO

Toda una hazaña. En lugar de resolver su diferendo con el magisterio oaxaqueño, simplificarlo y acotarlo al terreno estatal, la actual estrategia gubernamental lo ha hecho más grande, más complejo y de más difícil solución. De un día a otro convirtió un problema educativo en un conflicto de seguridad pública. Transformó un asunto político en una cuestión policiaco-militar. Hizo de una pugna regional una disputa nacional.

Bajo el argumento de que va a garantizar la calidad educativa, convirtió al instituto responsable de conducir la

enseñanza pública de Oaxaca en una agencia del Ministerio Público. Las instalaciones del Instituto de Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) fueron ocupadas por uniformados y para dirigirla se designó a un policía: Moisés Robles.

Además del director del IEEPO, otros tres mandos tienen una trayectoria policiaca. El nuevo subdirector, José de Jesús Silva Pineda, fue subprocurador del estado durante el gobierno de Ulises Ruiz, su padrino de boda. La encargada de mejorar la convivencia escolar, María de los Ángeles Jiménez fue asesora técnica del sistema nacional de seguridad pública en Guanajuato y responsable de prevenir el delito de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. La directora administrativa, Ubalda Cruz López, fue jefa de departamento en la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública.

Perfil similar tiene Jorge Vilar Llorens, delegado de la SEP en la entidad y su representante en el IEEPO. Militante en su juventud de la Línea Proletaria, desempeñó después distintas responsabilidades en la Secretaría de Gobernación y en los programas de combate a la pobreza.

Para justificar esta estrategia, la propaganda gubernamental ha insistido en que el IEEPO estaba en manos de los maestros de la sección 22. El mismo gobernador Gabino Cué admitió que eso era falso: "El mando nunca lo tuvo la CNTE, el mando lo tenía el gobierno compartido en alguna parte de la estructura administrativa, pero siempre el director del IEEPO fue designado por el gobernador en turno, así como los coordinadores".

De los 17 mandos recién nombrados, nueve, incluyendo su director, formaban parte del organigrama de esa depen-

dencia estatal antes de su reestructuración, como integrantes de su cuerpo directivo. ¿Puede llamarse a eso renovación?

Con la encomienda de regenerar pedagógicamente la entidad, escogieron funcionarios que, en su mayoría, poco o nada saben de educación: ocho abogados, cuatro economistas, dos administradores de empresas, un comunicólogo, un ingeniero en sistemas electrónicos y un licenciado en turismo.

El perfil de los nuevos directivos del IEEPO es mediocre y polémico. Muchos provienen de las filas del ex gobernador Diódoro Carrasco. Dos carecen de cédula profesional: el subdirector de Servicios Educativos, Juan José López Martínez, y el director de Planeación Educativa, Enrique Ponce Cortés. Según los abogados en activo de la entidad, el director jurídico, Raúl Pérez Zorrilla, litiga en juzgados imaginarios.

Jorge Oropeza, su nuevo vocero, dobletea chamba: junto a su responsabilidad en el instituto conduce en Tv Azteca *Hechos meridiano Oaxaca*, programa con el sello de la casa. Y este año, el asesor general, Juan Pablo Morales García, protagonizó un sonoro escándalo como consejero del Instituto Estatal Electoral, cuando exigió y obtuvo una indemnización de más de 2 millones de pesos al terminar su función.

En el afán de estigmatizar a los maestros democráticos, se han filtrado a la prensa diversos casos de corrupción del antiguo IEEPO. Muchas de esas denuncias son verídicas. Sin embargo, es falso que los culpables de esta situación sean maestros. No puede descartarse que alguno de ellos tenga vela en ese entierro, pero son la excepción, no la regla. La nómina fue inflada para incluir a diputados, dirigentes partidarios, funcionarios públicos, presidentes municipales, recomendados y porros del PRI. Ninguno es parte del movimien-

to magisterial. Por el contrario, son sus enemigos. Llegaron allí y conservan sus aviadurías gracias a los actuales mandos.

De la mano de Emilio Chuayffet, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, se trasladó a Oaxaca para poner la infraestructura y los programas de combate a la pobreza al servicio de la cruzada contra el magisterio democrático. Su objetivo es enfrentar a la población de menos recursos con sus maestros, usualmente sus mejores aliados. Para ello anunció el uso de las redes de *Prospera* con el fin de explicar las bondades de la reforma educativa, y la decisión de que las beneficiarias del programa ya no requieran acreditar que sus hijos asisten a una institución escolar.

En una excursión a tierras oaxaqueñas, pidió a las madres de familia de la entidad no dejarse engañar por maestros integrantes de la CNTE. De paso, ensalzó la valentía del gobernador Gabino Cué al transformar el IEEPO.

La señora Robles no tuvo mucho éxito en su empresa. Volcada al uso político faccioso de los programas sociales, denunciada penal y mercantilmente, su credibilidad está en entredicho. Agentes municipales de Oaxaca acusaron a los delegados de *Prospera* y Liconsa de obligarlos a ir a los eventos con ella bajo la amenaza de que si no lo hacen se les cancelarán los apoyos.

Un volante fue distribuido estos días entre los trabajadores del IEEPO. En él aparece una foto de los flamantes funcionarios y los presenta como “aptos y listos para actuar como agentes del Ministerio Público y policías en la aplicación de la norma para el logro de la calidad educativa”. Finalmente se pregunta: ¿sabrán qué es educación? Esos son los mandos designados para encabezar el renacimiento pedagógico en Oaxaca.

La militarización

En Oaxaca, mil gendarmes cambiaron fusiles por brochas. En lugar de combatir al crimen organizado fueron enviados a pintar escuelas, arreglar tuberías y cortar el pasto; en vez de proteger a la población de la delincuencia se les ordenó remozar escuelas.

El 12 de agosto de 2015, durante su primer día de actividades en la primaria Vicente Guerrero del municipio de Santa María del Tule, los uniformados no reportaron bajas, aunque sí algunos inconvenientes. Acostumbrados a manejar armas tuvieron dificultades para encender las podadoras y para distinguir qué punta de los rastrillos utilizar para barrer la hierba.

Sufrieron también un tipo muy peculiar de emboscada. Cuando se presentaron con los directivos de la secundaria federal 64 para ver sus requerimientos, estos respondieron con una lista muy puntual: dos aulas nuevas, 30 computadoras, un salón de artes y cableado. La respuesta de la Gendarmería fue negativa. A pesar de que el gobierno federal anunció que destinaría mil millones de pesos para reparar la infraestructura, sólo puede ofrecer personal para podar los árboles, hacer limpieza y pintar paredes.

Para los estrategias gubernamentales la reacción de la secundaria federal 64 fue un inesperado fracaso. Comenzaron su campaña de remozamiento escolar en Santa María del Tule precisamente porque el movimiento magisterial es allí relativamente débil: la relación entre las autoridades locales y los maestros dista de ser tersa. Quienes laboran en las escuelas de esa localidad participan en las protestas de

manera restringida, usualmente mediante comisiones, pues el municipio no les permite suspender actividades. Pero, a pesar de ello, en esa secundaria el plan de la Gendarmería no pudo avanzar.

No es el único caso. Lejos de suscitar la adhesión de los padres de familia, la llegada de los gendarmes a las escuelas causó malestar y desconfianza. Soledad del Rocío Ramos, vocera de la Coordinadora Estatal de Madres y Padres de Familia, advirtió: “Los policías deben estar en las calles, buscando delincuentes, garantizando la seguridad. En nada nos interesa que estén adentro de las escuelas. Vamos a rechazar la llegada de los policías a las escuelas”.

Para muchas comunidades oaxaqueñas, que padecen la precariedad y la falta de empleo, la labor de los uniformados en los centros escolares es una grosería. En sus pueblos hay jardineros, albañiles, plomeros, electricistas, balconeros, arquitectos e ingenieros. ¿Por qué no darles trabajo a ellos?

Las Jornadas de Dignificación de Escuelas en Oaxaca son la cara amable de la militarización de la entidad para tratar de doblegar la resistencia del magisterio a la reforma educativa. Son un eslabón más de una estrategia decidida en Los Pinos, inaugurada una semana antes de los comicios del 7 de junio, y que el gobierno estatal quiere disfrazar solicitando a los poderes de la Unión a posteriori, el patrullaje y vigilancia de elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.

En los hechos, el envío de tropas y las rondas en las calles han creado una especie de estado de sitio, sin tener autorización legal para ello. Lejos de proporcionar seguridad, la presencia de soldados y policías en centros comercia-

La novena ola magisterial

les, hoteles y lugares de convivencia colectivos ha generado una creciente irritación entre los habitantes de la ciudad de Oaxaca. Los uniformados alteran la convivencia diaria. Los incidentes entre ciudadanos de a pie y elementos castrenses que actúan con prepotencia, se emborrachan o consumen estupefacientes, se multiplican día a día.

También forma parte de esta campaña la pretensión de movilizar a funcionarios del registro civil y a las autoridades municipales en la cruzada contra los profesores, en favor de la reforma educativa y en defensa del nuevo IEEPO. La maniobra no ha tenido éxito. Alcaldes y cabildos se niegan a enfrentarse contra los docentes.

Simultáneamente, en los encuentros contra los maestros democráticos, la secretaria, de la mano del priísta Héctor Pablo Ramírez Puga, aspirante a la gubernatura del estado y antiguo colaborador del ex mandatario local Ulises Ruiz, ha anunciado que la leche distribuida por Liconsa costará un peso.

El uso faccioso de los programas sociales por Rosario Robles ha sentado muy mal entre maestros y padres de familia. Algunas de las reuniones de la secretaria fueron canceladas por las protestas de los docentes; en otras, beneficiarias de *Progresá* denunciaron que fueron presionadas y amenazadas para asistir. Sin ambigüedad alguna, Soledad del Rocío Ramos, vocera de los padres de familia, dijo a la titular de Sedesol: “Lástima que sea en voz de una mujer, que siendo madre no cuide de nuestros hijos, y se preste al anuncio perverso para servirle al gobierno federal y estatal en esta guerra que tienen contra los maestros”.

Hasta hoy, la estrategia gubernamental de militarizar el estado y confrontar a padres de familia con maestros ha

resultado fallida y contraproducente. A pesar de la presencia masiva de uniformados y helicópteros, decenas de miles de trabajadores de la educación marcharon con orden y disciplina, repeliendo provocaciones, tanto el 27 de julio como el 14 de agosto, en la ciudad de Oaxaca. No obstante el clima represivo en su contra, el movimiento conserva su disposición de lucha, unidad y capacidad de convocatoria.

Convertir un problema educativo en un asunto policiaco-militar, instigar la animadversión de las comunidades contra sus maestros y alimentar la crispación de la sociedad oaxaqueña no augura nada bueno. El mensaje que se manda al país es terrible. Como dicen cientos de pancartas en las manifestaciones: “El Chapo no está en Oaxaca”.

La afrenta

Día tras día, la realidad magisterial contradice los propósitos y los dichos del secretario de Educación, Aurelio Nuño. Los maestros de carne y hueso caminan en dirección distinta a las palabras del funcionario público. Cuando él dice ¡sí!, ellos responden ¡no! Ni siquiera los docentes a los que premia y alaba están de acuerdo con él.

Está claro que las afirmaciones de la SEP y su titular no son comunicación real. Son propaganda, una especie de publicidad comercial. Una maniobra para no negociar.

Así sucedió el 3 de marzo de 2016. Mientras el secretario anunciaba que en México había profesores destacados y de excelencia, como lo demostraban los resultados de la Evaluación al Servicio Profesional Docente, esos mismos educadores le aclaraban que en México “no hay maestros ni de primera ni de segunda ni de tercera, sólo maestros”.

En la misma reunión en que el secretario trató de dividir a los mentores, y ensalzó la evaluación punitiva — escribió Laura Poy —, Lucero Navarrete, maestra de primaria de Chihuahua, le respondió: “los resultados del examen al desempeño docente dependen de muchos factores y de las circunstancias personales que cada uno de nosotros experimentó... a unos nos favorecieron y a otros no, pero hay muchos que no obtuvieron el resultado que merecían, porque el trabajo que realizan en su escuela es muy diferente a lo que viene en un examen, al miedo o a las circunstancias”.

Apenas el 22 de febrero, Aurelio Nuño había chocado con el magisterio oaxaqueño. Ese día, protegido por un fuerte operativo policiaco-militar, se presentó sin avisar, acompañado del gobernador Gabino Cué, en la escuela primaria Emiliano Zapata, en Miahuatlán, Oaxaca.

El objetivo explícito del acto era dar el banderazo de salida al programa Escuelas al Cien. El propósito no declarado era mostrar que el magisterio del estado se encontraba en calma y bajo control. El resultado fue contraproducente.

En Oaxaca, a los maestros de la Emiliano Zapata se les obligó a recibir al secretario bajo amenaza de despido. Moisés Robles, director del IEEPO, les advirtió que si no cooperaban sufrirían el cese inmediato.

Para realizar el acto oficial, las instalaciones escolares fueron cercadas por elementos de la Policía Federal, granaderos y Ejército. Un policía vestido de civil amenazó con un arma al maestro que resguardaba la puerta de entrada. Las llamadas telefónicas fueron bloqueadas.

Ante el despliegue y la intimidación policiaca, padres de familia montaron en pánico. Muchos se negaron a llevar

a sus hijos a clases y otros regresaron a sacarlos de la escuela. Dentro de la Emiliano Zapata los niños lloraban, se quejaban de que les dolía cabeza y se enfermaban del estómago. Para resguardarlos y tranquilizarlos los profesores los metieron a los salones.

El programa oficial duró apenas unos 20 minutos y estuvo lleno de contratiempos. Sin alumnos suficientes, la banda de guerra no se pudo integrar. Ni siquiera los niños de la escolta estaban completos. A pesar de ello, las autoridades realizaron la ceremonia del toque de bandera y entonaron el Himno Nacional. Al final, informaron que a la escuela le iban a dar 2 millones de pesos.

Durante la reunión, oliendo a alcohol, el gobernador Gabino Cué apenas hilvanó unas cuantas palabras. Bajo amenaza de cese, con las cámaras de televisión frente a ellos, contra su voluntad, los profesores fueron obligados a reunirse con el secretario Nuño. Una maestra lo cuestionó sobre por qué entrar a la escuela con tanta policía. Varios profesores le preguntaron por qué la evaluación pretendía castigarlos y no capacitarlos. La directora Paulina Miguel Pérez le señaló la necesidad de que recibiera a sus dirigentes de la sección 22 para iniciar un diálogo.

La SEP anunció que en la Emiliano Zapata se había formado el primer Comité de Padres de Familia y el primer subcomité de Infraestructura Escolar de Escuelas al Cien. La realidad es otra. El comité ya se había formado, pero no para este programa. Es el mismo que se forma y funciona cada año. Ni maestros ni padres de familia tenían información previa del programa. Apenas una semana antes, unas personas llegaron a la escuela a realizar un diagnóstico, pero nunca informaron realmente a qué iban.

De los 2 millones de pesos que, como parte del programa Escuelas al Cien, las autoridades educativas ofrecieron a la Emiliano Zapata (y al preescolar que se encuentra junto a ella), ni maestros ni padres de familia saben nada. Nadie se ha parado por allí para cumplir la promesa.

La incursión policiaca del secretario Nuño a Miahuatlán fue una afrenta al magisterio oaxaqueño. La reacción no se hizo esperar. El 1º de marzo, el mismo día en el que el titular de la SEP anunció el despido de más de 3 mil maestros que se negaron a realizar el examen de evaluación al desempeño, más de 80 por ciento del magisterio de la entidad suspendió labores y bloqueó las principales carreteras del estado.

Como remate, dos días después, el 3 de marzo, más de 14 mil profesores del istmo suspendieron labores, mientras otros 6 mil bloquearon la Carretera Transístmica y chocaron con la policía para protestar por la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en esa región de Oaxaca. La movilización fue convocada y organizada de un día a otro.

En *Solving the mystery of the schools*, Diane Ravitch, ex subsecretaria de Educación de ese país, concluyó: "Las grandes ideas no pueden ser impuestas a las personas sin su consentimiento. El dinero y el poder no son suficientes para mejorar las escuelas. La mejora real ocurre cuando estudiantes, maestros, directores, padres y la comunidad local colaboran en beneficio de los niños". Muchas de las conclusiones del análisis de la doctora Ravitch valen también para México. Allí están algunas de las claves que explican el porqué del divorcio de los afanes y dichos del secretario Nuño con la realidad educativa del país.

CAPÍTULO V LA OFENSIVA MAGISTERIAL

El 15 de mayo de 2016 la Coordinadora inició una jornada nacional de lucha, con un paro indefinido. El secretario Aurelio Nuño, respondió intensificando la represión, acusando a los líderes de la Coordinadora de proteger sus privilegios y poniendo condiciones inadmisibles para abrir una negociación.

Sus publicistas han difundido la idea de que Nuño Mayer acabó con el mito de la Coordinadora, y que la fuerza de la insurgencia se está desinflando. Sin embargo, como se demostró desde el inicio de las jornadas de luchas, el movimiento magisterial le recordó al secretario las palabras de Pierre Corneille: “Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud”.

Ha pasado prácticamente un año desde que el gobierno federal se cerró a negociar con la Coordinadora cualquier cosa que no sea su rendición. Un año en que, caminando por arriba de la leyes, se ha asesinado y encarcelado a maestros, se les han girado órdenes de aprehensión, se les ha retenido su salario y sus cuotas sindicales, se les ha calumniado y denostado, y se ha impedido su libre tránsito. Lejos de solucionar el conflicto, esta política lo ha avivado. Adicionalmente, ha abierto una profunda herida (que puede hacerse aún mayor) con amplios sectores de padres de familia.

Incapaz de reconocer su equivocación, temeroso de la desaprobación de los empresarios que conducen la política educativa del país, embarcado en la aventura de hacerse candidato presidencial a cualquier costo, Nuño Mayer está arrastrando a la educación pública a una zona de desastre. Su odio visceral hacia los maestros más humildes, su intransigencia y su incapacidad de hacer política, están generando un problema nacional de consecuencias imprevisibles.

Aurelio Nuño Productions

El profesor Octavio Estrada Martínez se hizo famoso el 17 de mayo de 2016. Maestro en la escuela primaria Leona Vicario de la ciudad de Oaxaca, fue el único docente en negarse a suspender labores en su plantel. Su fotografía, impartiendo clases en la calle, fue reproducida en primera plana de cinco diarios nacionales.

Esa noche, el secretario, Aurelio Nuño Mayer, conversó por videollamada con el profesor Estrada. El funcionario le transmitió las felicitaciones del Presidente de la República, por su valor, civismo y compromiso con la educación.

Sin regatear elogios, Nuño Mayer dijo a don Octavio que él era un modelo de lo que se quiere en la educación para los niños, y agradeció su actitud de valentía. Es usted —añadió— un ejemplo de lucha, un símbolo que ha conmovido a la sociedad. Y, ya encarrerado, lo invitó a que lo visitara en sus oficinas para conversar sobre sus 30 años de servicio.

En su afán por inventar un héroe que defienda la reforma educativa, el secretario pasó por alto algunos pequeños detalles de la trayectoria profesional del maestro Estrada Martínez. Por ejemplo, que no está titulado, no

cuenta con cédula profesional, ni domina metodología de enseñanza alguna.

También ignoró algunas sorpresas del historial laboral del prócer. Entre otros, que de los 30 años que tiene en el servicio, sólo estuvo frente a grupo 15. El resto del tiempo se desempeñó como auxiliar técnico, con frecuencia supervisando personal de intendencia. Y es que el profesor Estrada fue corrido de varias escuelas en las que trabajó por sus constantes inasistencias. Su grave problema de alcoholismo le acarreó frecuentes conflictos con los padres de familia de varios centros escolares de la zona 07 de Ocotlán y de la 98 de la colonia Maestros. Incluso fue acusado de utilizar indebidamente el dinero de los libros de un taller de la zona 98.

Hacer de un maestro no recibido, con problemas de alcoholismo, faltista, sin credenciales profesionales y traidor a sus compañeros un ejemplo educativo no es un hecho casual, sino parte de la estrategia mediática para desacreditar el paro magisterial. Los grandes montajes propagandísticos en los medios de comunicación estilo Genaro García Luna han sido el sello de la gestión de Aurelio Nuño desde que llegó a la SEP.

Esos montajes son fabricados como si se tratara de una campaña electoral de contraste. Y son protegidos por la fuerza del Estado. Cuando un joven universitario fotografió a un grupo de elementos de la Gendarmería Nacional que sirven de escoltas a Octavio Estrada, fue encañonado y amenazado con dispararle por uno de gendarmes (véase la grabación de los hechos en el portal *Oaxaca Informada*).

La invención de don Octavio como héroe tuvo, sin embargo, un efecto bumerán, pues puso en entredicho las

La novena ola magisterial

cifras sobre la extensión del paro dadas por el secretario de Educación. En un *tuit* del 20 de mayo, Nuño Mayer informó que en Oaxaca abrieron 99.5 por ciento de las escuelas, en Guerrero todas, en Michoacán 97.2 por ciento y en Chiapas 96.8 por ciento. El absurdo es evidente. De ser ciertos esos porcentajes ¿por qué cinco periódicos nacionales se interesaron en publicar en su primera plana un hecho tan intrascendente? ¿Por qué destacar que un docente dio clases cuando —según el secretario— la abrumadora mayoría lo hizo?

El sinsentido de la situación tiene una explicación sencilla. Las cifras de Aurelio Nuño son falsas. Son propaganda para desacreditar el paro magisterial ante la opinión pública, presentarse como vencedor de la disidencia magisterial y candidato a la Presidencia. Son mentiras similares a las que ya usó al informar sobre la evaluación al desempeño docente.

Múltiples evidencias desnudan el embuste oficial. La suspensión de labores en Chiapas, Oaxaca y Michoacán es casi total, en Guerrero está muy extendida (sobre todo en la región de la Montaña), y en otras entidades es desigual. Sin exagerar, Chiapas está al borde de una sublevación. El fracaso de la segunda ronda de exámenes en Michoacán fue tal que la secretaria de Educación de la entidad, Silvia Figueroa Zamudio, consideró que se debe buscar una tercera oportunidad para que los maestros que no realizaron la evaluación docente la puedan llevar a cabo.

Que las autoridades hayan tenido que desalojar por la fuerza a los profesores democráticos de sus campamentos en la Ciudad de México en dos ocasiones, y trasladarlos contra su voluntad a sus estados, con la complicidad del jefe de gobierno del DF, Gabriel Macera, es evidencia de que las

cosas no marchan como el secretario de Educación dice. ¿Por qué violentar el derecho de libre tránsito, de manifestación y de expresión, tal como lo hizo la Policía Federal protegida por la oscuridad de la noche, si todo está bajo control y los mentores están derrotados?

Las detenciones de maestros, los despidos, los desalojos de plantones que no obstruyen vías de comunicación, los montajes mediáticos llenos de mentiras, son un regreso al peor autoritarismo gubernamental. Llamar diálogo — como hizo la Secretaría de Gobernación — a un acto represivo e intimidatorio, en el que más de mil policías subieron a maestros en autobuses contra su voluntad, violaron sus garantías constitucionales y amenazaron con ejecutar órdenes de aprehensión contra algunos, es, por decir lo menos, un abuso del lenguaje. A comienzos de la década de 1980, los gobiernos del PRI pusieron en marcha acciones similares contra la CNTE. Sin embargo, no lograron frenar su lucha. Por el contrario, una y otra vez la Secretaría de Gobernación se vio obligada a negociar con la insurgencia magisterial soluciones al conflicto. Nada indica que en 2016 estas medidas represivas vayan a tener éxito. Por el contrario, es muy probable que compliquen aún más las cosas.

Decía Aldous Huxley que lo que el propagandista hace es canalizar una corriente ya existente, y que si trata de hacerlo en una tierra sin agua, cava en vano. La estrategia del sargento Nuño hacia el conflicto magisterial cava en vano.

El Santo Niño de la APPO

¡Milagro! El Santo Niño de la APPO reapareció en Oaxaca. Dentro de una urna, con el paliacate rojo cubriendo su rostro, la boina negra con una estrella roja de cinco picos sobre

La novena ola magisterial
su cabeza, cuerpo de resina, y una bazuca de tubos PVC en la espalda, encabezó la multitudinaria marcha del magisterio y los padres de familia del 27 de mayo del 2016.

No iba solo. Con él, resurgió, también, la Virgen de las Barrikadas, que tantos milagros hizo al movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006 y 2007. Representación del ícono guadalupano en blanco y negro, la madona proletaria se cubre el rostro con una máscara antigases, mientras de su cuello cuelga un collar de púas, y en su manto arden varias llantas.

Desautorizadas por la jerarquía eclesial, estas imágenes han retornado como puente herético entre el actual movimiento magisterial-popular y el que en 2006 cimbró los cimientos de la sociedad y la clase política oaxaqueña exigiendo la salida del gobernador Ulises Ruiz. No es exageración comparar ambos acontecimientos. Desde el pasado 15 de mayo, la protesta docente en Oaxaca se ha convertido en un huracán que suma a su paso la inconformidad popular con vigor y radicalidad creciente. En casi todas las regiones del estado se suceden, día a día, marchas multitudinarias de padres de familia en apoyo a sus profesores.

La hazaña de reavivar y relanzar la lucha de los trabajadores de la educación de Oaxaca es, por supuesto, obra de la capacidad de resistencia de docentes mismos. Pero su conversión en una fuerza popular es resultado del pésimo cálculo de sus enemigos. La inescrupulosa ofensiva contra la sección 22 desde el golpe de mano en el IEEPO, la militarización de la capital del estado, el encarcelamiento de algunos dirigentes sindicales y el anuncio del despido de casi mil 400 maestros

lanzaron a los padres de familia del lado de los docentes. La ofensiva gubernamental tuvo un efecto *bumerang*.

Simultáneamente, la campaña electoral en curso, en la que candidatos y partidos han protagonizado una incruenta guerra de lodo, ha dejado muy mal parados al gobernador Gabino Cué, a Enrique Peña Nieto y a la mayoría de los aspirantes a gobernar la entidad. Ante los ojos de la población, el rey y su corte han quedado desnudos. Y los beneficiarios directos de este escandaloso espectáculo han sido, de rebote, los maestros.

Más intensa que en Oaxaca es la revuelta en curso en Chiapas. El miércoles 25 de mayo por la noche, la población de Chiapa de Corzo expulsó por la fuerza a los policías federales (PF) que se hospedaban en el hotel La Ceiba. Indignadas por la represión a los maestros, gritando ¡asesinos!, más de 2 mil personas resistieron las descargas de gases lacrimógenos que los uniformados les dispararon, hasta que lograron correrlos de la ciudad.

El mismo 25 de mayo, pero horas antes, cuando en las calles de Tuxtla Gutiérrez la PF cargó contra los piquetes de maestros, la población salió a defenderlos. Espontáneamente, les ofrecieron agua, refrescos, alimentos y protección. No fueron pocos los pobladores que, arriesgando su integridad física, increparon o enfrentaron directamente a los agentes desde la retaguardia. Enardecidos, miles de ellos sumaron a las ya de por sí numerosas manifestaciones de los docentes.

Las protestas en la entidad crecen cada día. El cabildo de Tonalá demandó establecer una mesa de negociación y cesar la represión. El lunes 30, los transportistas pararon.

Los maestros chiapanecos se convirtieron en galvanizadores del enorme descontento que existe en el estado.

La novena ola magisterial

Hasta un amplio grupo de pequeños y medianos empresarios, a quienes el gobierno estatal no ha pagado servicios y obras, se ha sumado a sus movilizaciones. El EZLN expresó públicamente en dos ocasiones su solidaridad a la causa de los mentores, y constató la enorme solidaridad que el pueblo chiapaneco les brinda.

Oaxaca y Chiapas son las entidades donde la insurgencia magisterial se ha imbricado masiva y profundamente con amplios sectores populares. Y donde existe el mayor peligro de que se produzca una explosión de descontento popular incontrolada. Pero distan de ser las únicas. Como se ha visto en Michoacán y Guerrero, en casi todo el país los docentes han efectuado todo tipo de protestas contra la reforma educativa.

Por lo pronto, reaparecieron ya en Oaxaca el Santo Niño de la APPO y la Virgen de las Barrikadas. Por algo será. La mera verdad, yo no creo ni en santos — sean paganos u oficiales — ni en milagros. Pero de que los hay los hay.

Armando Castellanos

El profesor Armando Castellanos Aguilar tiene 67 años de edad y 50 de servicio activo ininterrumpido. Desde 1992 es supervisor de la zona 06 en Comitán, Chiapas. Está a cargo de 12 escuelas: 8 oficiales y 4 particulares. El pasado 31 de mayo su vida dio un vuelco: un grupo de vendedores ambulantes lo insultó, vejó y rapó.

Como hace cada día hábil, el maestro Castellanos llegó ese 31 de mayo a la terminal de la Organización de Transportistas Emiliano Zapata en Comitán, procedente de San Cristóbal de las Casas. Se iba a entrevistar allí con cua-

tro directores de escuelas, para garantizar que los apoyos económicos que se entregan a los niños de esos centros escolares llegaran. Sus oficinas estaban cerradas con cadena y candados.

Estaba en la calle cuando una turbamulta de la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata (OPIEZ), grupo de choque al servicio del alcalde del PRI Mario Guillén, lo retuvo a él y a los docentes con los que se encontraba: Luis Chang, auxiliar de la supervisión; María Dolores Ruiz Guillén, directora de la Escuela Fray Matías de Córdoba; Socorro Sosa López, directora de la escuela Benito Juárez; Miguel Solís Morales, director de la Escuela Belisario Domínguez y Carlos Ruiz Sosa, director de la escuela Ángel Albino Corzo.

Al grito de “amárrenlos”, se les obligó a caminar descalzos durante dos y medio kilómetros. Al llegar a la central de abasto fueron sentados en la banqueta y trasquilados, en medio de los peores insultos. Los policías que estaban en los alrededores no hicieron nada para evitar la agresión. Según el presidente municipal, los uniformados no actuaron “porque hay Mando Único y no llegó la orden del gobierno estatal, para intervenir”.

Aunque inicialmente la prensa local reportó que el ataque fue obra de organizaciones sociales (la OPIEZ), sin relación alguna con los profesores en paro, la Secretaría de Educación de Chiapas, Sonia Rincón, acérrima enemiga del movimiento magisterial democrático, acusó falsamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de ser los responsables de los actos. Nunca dio una sola prueba.

El profesor Armando Castellanos declaró desde el primer momento que sus agresores no eran ni maestros ni de la Coordinadora. Así lo documentó ese mismo día el corresponsal de *La Jornada*, Elio Enriquez. Por su antigüedad y la naturaleza de su trabajo, el supervisor conoce prácticamente a la totalidad de los docentes de Comitán.

A pesar de ello, el secretario de Educación Aurelio Nuño responsabilizó de la afrenta a la CNTE, y, aunque luego reuló parcialmente (sin ofrecer una disculpa por la calumnia), su subsecretario Otto Granados mantuvo falsamente la acusación.

No obstante que, en un primer momento se dijo que las víctimas habían sido auxiliadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el maestro Castellanos lo desmintió públicamente. En entrevista con Ciro Gómez Leyva puntualizó: “dijeron que la SEP nos estaba apoyando. Eso es mentira. Nadie nos llamó”. Días después, ninguno de esos seis docentes rapados aceptó reunirse con el gobernador de Chiapas Manuel Velasco. En cambio, al encuentro con el mandatario asistió solamente un profesor del Colegio de Bachilleres (una institución educativa que cuenta con su propio sindicato y que no participa en la CNTE), que no estaba en la lista inicial de agredidos.

Pero, los profesores rapados en Comitán no sólo no han tenido el auxilio de la SEP, sino que han sido presionados por ella. La profesora María Dolores Guillén Ruiz, directora de la Escuela Fray Matías de Córdoba, denunció que la Secretaría los quiere forzar a que den informes de lo que ocurre en el paro magisterial, con la amenaza de quitarles la plaza laboral.

Como la mayoría de los maestros humillados, Guillén Ruiz se opone a la reforma educativa. Entrevistada por el portal *Chiapas paralelo*, afirmó: “vamos a seguir luchando para que las reformas no se lleven a cabo (...) con la reforma educativa a los maestros nos quitarán los derechos de jubilación ¿Por qué no se evalúan ellos (los del gobierno)? ¿Por qué no se evalúa a tanto diputado? (...) Repudio al gobierno por esta actitud tan militarizada que tiene contra la gente que educa a los niños, contra la gente que se prepara día a día para dar una mejor educación, para dar una calidad educativa, para defender a los padres de familia que no paguen aportación, que no compren libros”.

Indignado por la manipulación que el gobierno y medios de comunicación han hecho de su desgracia, el maestro Armando Castellanos le señaló al noticiero *Sin censura* que hay una desinformación total sobre su caso y sobre el paro magisterial. “Si usted ha visto esos noticieros de la televisión mexicana –dijo–, minimizan el número de gente que hay en el movimiento magisterial. Este movimiento ha crecido día con día, porque hay apoyo de padres de familia, hay apoyo de otros organismos que están viendo la injusticia. El movimiento va viento en popa.”

El montaje gubernamental para utilizar en contra de la insurgencia magisterial la agresión que sufrieron seis docentes en Comitán, Chiapas, se cae por su propio peso. No sólo porque ese mismo día la CNTE se deslindó pública y enfáticamente de los hechos y señaló a los responsables, sino por una razón más que evidente: ¿por qué la disidencia iba a agredir a un grupo de directivos escolares que apoyan el paro y se oponen a la reforma educativa?

La novena ola magisterial

El contexto del montaje de los peloneados echado a andar por Aurelio Nuño Productions es claro. Ese último día de mayo el conflicto magisterial escaló. Padres de familia, organizaciones sociales y maestros ocuparon, durante varias horas, al menos 65 de las 122 alcaldías de Chiapas y 22 de las 113 de Michoacán. En Tuxtla Gutiérrez, la Policía Federal y la estatal lanzaron gases lacrimógenos y arremetieron violentamente en contra de los profesores. En Tabasco, los trabajadores de la educación instalaron un plantón. Y en varios otros estados más, miles de docentes efectuaron marchas y ocuparon instalaciones y plazas públicas.

Estas acciones masivas evidenciaban que el despliegue de la insurgencia magisterial se había convertido ya, en varias entidades, no en un problema educativo sino un delicado conflicto político y social, que cada día que pasa crece y se radicaliza.

Sin embargo, a pesar de la magnitud y gravedad de estas protestas, el hecho atrajo la cobertura mediática del día fue la humillación a los seis maestros. Como hemos explicado líneas arriba, no es la primera ocasión en la que se hace un montaje mediático nacional con un supuesto caso de maestros rapados por sus detractores en Chiapas. Once meses, se echó a caminar una puesta en escena en Tuxtla Gutiérrez en la que Nayeli Mijangos, una falsa maestra que en realidad era periodista al servicio de Televisa, fue peloneada por supuestamente querer evaluarse, cuando no podía hacerlo.

Los responsables de la provocación, la OPIEZ, opera como grupo de choque del presidente municipal, Mario Antonio Guillén Domínguez, conocido como Mario "El Zorro" o Mario Fox. Homónimo de un diputado del Partido Verde

Ecologista de México (PVEM), el alcalde es una pieza política del senador priísta Roberto Albores Gleason, y de su padre el exgobernador Roberto Albores Guillén, a quien el EZLN bautizó como el Croquetas, responsable de la matanza de El Bosque. Es aliado del tristemente célebre ganadero (y político) Jorge Constantino Kanter, una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia en Chiapas.

Dueño de tiendas de ropa vaquera, a Mario Fox le gustan los caballos percherones y participar en cabalgatas. Ha sido señalado de hacer negocios no siempre limpios. Una y otra vez se le ha acusado de tener nexos con el crimen organizado. Un reportaje de *Chiapas paralelo*, documentó la estrecha relación que mantiene con el alcalde de Zacapa, en Guatemala, Eliseo Salguero Vargas, quien le entregó las llaves de la ciudad. Zacapa —explica la publicación— es el lugar de origen de Alfonso Portillo, el expresidente que pasó algunos años presos en Estados Unidos por lavado de dinero. Y es, también, la tierra del otrora cártel de los Lorenzana, ligado al Cartel de Sinaloa, donde “El patriarca” detenido, Waldemar Lorenzana Lima fue capturado en abril del 2011 y extraditado a Estados Unidos.

En la operación mediática para responsabilizar falsamente a la Coordinadora de la humillación de maestros en Comitán, participó públicamente el secretario Aurelio Nuño. A pesar de que para ese momento ya había un deslinde público de la sección 7, en un *tuit* señaló: “Condeno categóricamente los actos violentos de la #CNTE en contra de supervisores y directores en #Chiapas”.

La intolerancia y manipulación informativa gubernamental, lejos de debilitar al movimiento, lo exacerbó.

aún más. Lo dice con su lenguaje de supervisor escolar y 50 años de servicios ininterrumpidos don Armando Castellanos: “Esta situación puede llegar a extremos impensables. Porque a los maestros se les ha tratado no como maestros sino como delincuentes. Les ha metido a la Policía Federal, a la Policía municipal. Se cierran al diálogo. A través de esta reforma quieren correr a los maestros, quieren cesarlos”.

Kendy Moreno

Kendy Moreno Mercado es maestra rural en La Laguna. Tiene ocho años de servicio docente. Labora en la primaria Pablo L. Sidar, en el ejido Santa Fe, en la que no sirven los bebederos, los utensilios eléctricos dejan de funcionar al prender los aparatos de aire y no hay canchas deportivas.

Además de maestra, Kendy es abogada y una mujer muy valiente. El pasado 10 de junio encaró al secretario de Educación, Aurelio Nuño, en una reunión que el funcionario tuvo con docentes destacados en San Buenaventura, Coahuila, feudo sindical de Carlos Moreira —hermano del gobernador—, para venderles las bondades de la reforma educativa.

De frente, la profesora Moreno dijo al secretario: “De verdad siento empatía con mis compañeros del sur y lamento que el diálogo con ellos esté condicionado; son tan dignos ellos como nosotros; trabajamos en medios distintos; nuestras escuelas del norte muchas no están en tan pésimas condiciones como en el sur; sería muy enriquecedor para ustedes y para nosotros como maestros que tuvieran un diálogo con ellos”.

Nervioso, el funcionario le respondió con el mismo mantra que entona diariamente desde hace casi un mes: “Para

poder dialogar, los niños deben regresar a las aulas, además de que los maestros tienen que cumplir con la Constitución”.

En lugar de arredrarse, la maestra rural le reviró a Nuño Mayer: El derecho de protesta y la no retroactividad están de igual manera en la Carta Magna y se están violando.

Nada está por encima del interés superior de los niños a la educación, le contestó el secretario, al tiempo que insistía en señalar el daño que los docentes de la Coordinadora provocaban.

“También yo dejé a mis alumnos hoy por estar en este diálogo; hoy se quedaron mis niños sin educación”, remató la profe Kendy, evidenciando la doble moral del secretario, que admite que se suspendan clases para realizar reuniones de promoción y lucimiento personal.

El ejemplo de la maestra Kendy Moreno Mercado es un botón de muestra del fracaso de la política autoritaria de Aurelio Nuño hacia el magisterio. La actitud de la docente lagunera, su articulada argumentación, expresa el sentir de muchos mentores en todo el país. La reforma educativa con sangre no entra en el imaginario de los profesores. Y su rechazo se expresa de múltiples maneras: desde el paro hasta la desobediencia.

Pero, en lugar de atender ese rechazo, de escuchar el profundo malestar que la reforma educativa ha generado y la indignación que la cerrazón gubernamental al diálogo ha producido, el secretario Nuño decidió reforzar la pedagogía del garrote. Así lo acaba de hacer en Oaxaca.

Dos fechas, 10 años de distancia, una misma resistencia. El 14 de junio de 2006, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ordenó el desalojo violento de un plantón magisterial

La novena ola magisterial en la capital del estado. El 11 de junio de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto detuvo a dos dirigentes de la sección 22 y reprimió salvajemente la acampada de profesores y padres de familia frente a las oficinas del IEEPO. Rubén Núñez, secretario general, y Francisco Villalobos fueron aprehendidos y trasladados a un penal de alta seguridad en Sonora.

De la represión de 2006 nació la APPO y la Comuna de Oaxaca. Ante la actual ofensiva gubernamental contra el magisterio en la entidad, los maestros y los pueblos están articulando una vigorosa e inédita resistencia. Lejos de amedrentar a los docentes y sus aliados, la detención de sus dirigentes y la violencia policiaca han propiciado el renacimiento de las barricadas y bloqueos carreteros en distintos puntos del estado.

Oaxaca fue el único lugar donde la represión gubernamental ha pegado duro. Como si quisieran conmemorar a su manera el Jueves de Corpus, el 10 de junio policías antimotines golpearon despiadadamente a padres de familia de la comunidad chontal Tamulté de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco, que bloqueaban la carretera Villahermosa-Frontera. Demandaban abrir una mesa de negociación sobre la reforma educativa con el gobierno federal.

Lejos de apagar la protesta en Tabasco, la represión la extendió a ocho comunidades aledañas. Falsamente se dijo que 10 periodistas habían sido secuestrados por la CNTE. Según el profesor Julio Francisco Mendoza González, de la dirección política estatal y nacional de la coordinadora, los representantes de la prensa salieron corriendo cuando la multitud indignada les dijo que los iba a amarrar. Nunca se les retuvo, ni se les ató ni se les secuestró.

En Chiapas, junto a los maestros, marchan el pueblo creyente, Los Parachicos (danzantes tradicionales en la fiesta grande de Chiapa de Corzo), marimbas, empresarios, miles de padres de familia y hasta policías municipales. La sociedad chiapaneca está sacudida hasta sus cimientos.

Tan es así, que apenas el 12 de junio, el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi, dio a conocer el documento *Maestros, adelante con verdad y justicia*. Allí reconoce a los docentes que es su derecho y su deber marchar por la defensa de lo que en justicia les corresponde, asienta que la reforma educativa no es integral, sino sólo administrativa y laboral y apoya la lucha contra ella.

CAPÍTULO VII

ASESINADOS, PRESOS Y DESPEDIDOS

Pedagogía del garrote

Para imponer a sangre y fuego la reforma educativa (e impedir las protestas por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa), el gobierno ha asesinado a siete maestros (Claudio Castillo, Antonio Vivar Díaz y David Gemayel Ruiz), encarcelado en penales de alta seguridad a ocho dirigentes de Oaxaca, detenido a militantes magisteriales michoacanos, girado decenas de órdenes de aprehensión en varias entidades del país, cesado a más de 4 mil, golpeado salvajemente a cientos, impedido el libre tránsito, y puesto en la calle a miles de policías. Y a pesar de su pedagogía del garrote, no ha podido frenar las protestas masivas ni callarle la boca a los maestros.

El temple de Claudio Castillo

El ataúd gris con el cuerpo del maestro Claudio Castillo Peña es cargado a hombros en Acapulco por sus compañeros. Lo franquea una lona con su imagen empuñando un bastón en la mano derecha y el puño izquierdo levantado, y el texto: “Hasta la victoria, maestro Claudio, héroe de muchas batallas. Seguirás las luchas con nosotros”.

Los homenajes se repiten a lo largo del recorrido de la carroza fúnebre hasta su destino final en el panteón de su

La novena ola magisterial natal Tanguahuato, en la Tierra Caliente de Guerrero. Asesinos, asesinos, gritan indignados al gobierno los profesores democráticos, en las ceremonias que le hacen de cuerpo presente en Acapulco, Iguala, Arcelia, a su camarada.

El maestro Claudio Castillo Peña tenía 65 años cuando, el Día de la Bandera de 2015, la muerte lo alcanzó en Acapulco. Esa noche, como siempre hacía en las movilizaciones magisteriales, él estaba dentro de una camioneta arengando a la multitud con un altavoz, cuando la Policía Federal lo atacó. No pudo correr porque las secuelas de una poliomielitis lastimaron su pierna derecha.

Los agentes rompieron con violencia los vidrios del vehículo. Él abrió la puerta y les pidió que le permitieran bajar. ¡No tengo armas!, les decía. Todo fue en vano. Uno de los jefes policiacos lo jaló del cuello y la ropa y comenzó a golpearlo. Los policías le gritaban: ¡Ora sí, pinche viejo hijo de tu puta madre... Sigue gritando! La paliza que recibió fue tan brutal, que el maestro Claudio falleció con 18 costillas rotas y dificultad para respirar.

El profesor Claudio Castillo egresó de la Normal Rural de Ayotzinapa en 1974. Impartió clases en la escuela Juan N. Álvarez, en la ranchería Kilómetro 20, en Acapulco. Fue profesor de formación cívica y ética en secundaria. Era un maestro recto y estricto con la entrega de trabajos y tareas.

Admirador de Nikolai Ostrovski, el escritor soviético aquejado por tifus, reumatismo crónico y una parálisis casi total, Claudio parecía ser un personaje inspirado en el autor ruso o sacado de su novela *Así se templó el acero*, obra de lectura casi obligada en las normales rurales del país. Su poliomielitis no le impidió nunca trabajar y luchar por la

democratización y dignificación del gremio magisterial. Se sobrepuso a ella con tenacidad y voluntad ejemplares.

Al jubilarse se mantuvo como activo militante sindical. Frente a su féretro en Iguala, su hermana Isabel Castillo, ahora maestra retirada que apoya las movilizaciones del magisterio democrático, narró: “Aunque jubilado, él siempre estuvo en la lucha. Cuando yo le decía, ‘hermano, estás jubilado, tú ya no, vamos nosotros’, él me decía, ‘carnala, no me siento bien de estar en mi casa sentado o acostado y que mis compañeros anden luchando’.”

Fundador de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en 1989, su compromiso militante venía de tiempo atrás. Ese año participó en la Ciudad de México en las jornadas de la primavera magisterial que derrocaron el cacicazgo del líder vitalicio del SNTE Carlos Jonguitud Barrios. Dotado con el don de la palabra, Claudio era un orador eficaz y claro.

Su compañero, el profesor Horacio Bahena Bustamante, lo recuerda en esos días llegando a la Ciudad de México. “Te pusiste de pie —le escribió en una carta póstuma— antes de llegar a la central de Taxqueña y les hablaste a los pasajeros, más que con palabras, con ese corazón tan grande que tenías, pidiéndoles su apoyo y comprensión. Fueron tus palabras las que nos dieron de comer aquellos primeros días de lucha; durmiendo en las frías y mojadas calles del DF, en el suelo, sobre pedazos de cartón y a la intemperie.”

Incansable, encontró su lugar en las manifestaciones a bordo de las camionetas de sonido desde donde explicaba las razones de la movilización. En 2007 fue parte activa de las luchas en Acapulco contra la inseguridad pública y en

2011 se opuso a la reforma educativa. Desde que la noche de Iguala del pasado 26 de septiembre sacó a los maestros a las calles de Guerrero a exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, Claudio se incorporó de lleno a esa batalla.

Desde que hace más de cuatro meses que el magisterio tomó las oficinas del Instituto de Educación Básica Normal (Ineban) en Acapulco, el maestro Castillo se instaló allí. Cada día, sentado en una silla, recibía a profesores, atendía a reporteros, asesoraba a pensionados y alentaba la defensa de los trabajadores de la educación.

Casado, padre de dos hijas, Claudio Castillo vivía en una pequeña casa de interés social del Fovissste. No le faltaban las palabras de aliento para sus compañeros en los momentos difíciles. Siempre insistió en la necesidad de la unidad del movimiento. Era un firme defensor de la educación pública. Participó en la lucha en favor de los libros de texto gratuito para secundaria.

Ese 24 de febrero en que fue asesinado por la policía, el maestro Claudio marchaba con sus compañeros para exigir el pago de sueldos atrasados de más de 12 mil trabajadores de la educación, y la certeza laboral de que conservaran el empleo que han venido desempeñando desde hace años. El problema fue creado por el gobierno federal al recentralizar absurda y autoritariamente la nómina magisterial y dejar sin validar las plazas ocupadas desde hace mucho tiempo por los mentores.

Ofensa sobre ofensa, en oposición a los testimonios de muchos profesores que vieron cómo el maestro fue asesinado a golpes por policías federales, el comisionado na-

cional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo que la víctima falleció resultado de un aplastamiento. El secretario de Educación de Guerrero, Salvador Martínez della Roca, declaró que la versión del comisionado es risible.

Decía Nicolai Ostrovsky que “lo máspreciado que posee el hombre es la vida, se le otorga una sola vez y hay que saber vivirla de modo que al final de los días no se sienta pesar por los años pasados en vano, para que no exista una angustia por el tiempo perdido y para que al morir se pueda exclamar ‘toda mi vida y todas mis fuerzas han sido entregadas a la causa más noble en este mundo, la lucha por la liberación de la humanidad’.” Eso hizo el profesor Claudio Castillo Peña hasta que fue ultimado.

David Gemayel Ruiz

David Gemayel Ruiz regalaba sonrisas. Tenía 21 años y un pequeño hijo. Profesor de la primaria “Enrique Rodríguez Cano”, en Ocozocouautla, Chiapas, sonreía todo el tiempo a sus alumnos, a sus compañeros, a su pequeño hijo de casi seis años de edad, a la cámara fotográfica que lo retrataba. Ahora, ya no reirá más.

El maestro Gemayel Ruiz, egresado de la Normal Rural de Mactumatzá, fue asesinado entre las 9 y las 9.30 de la mañana del martes 8 de diciembre. Según narran sus compañeros, fue arrollado por un camión de la policía, cuando un grupo de maestros fue salvajemente atacado con gases lacrimógenos y golpes por elementos de la Gendarmería Nacional y del Ejército, a la altura del cruceo Llano San Juan. Los docentes realizaban en ese momento un bloqueo carretero.

Las autoridades dijeron otra cosa. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), el maestro David Gemayel Ruiz Estudillo perdió la vida “cuando varios de sus compañeros se apoderaron de un autobús que pusieron en marcha con el objetivo de atropellar a un grupo de policías. Sin embargo, al realizar esta maniobra lesionaron a tres de sus compañeros, perdiendo la vida Ruiz Estudillo”.

Indignados por la pretensión gubernamental de convertir a las víctimas en victimarios, los profesores que se encontraban en el lugar de los hechos desmienten la información oficial. Aseguran que las autoridades mienten, como lo han estado haciendo a lo largo de todo el proceso de evaluación docente en el país. David —afirman— fue atropellado por los policías.

David Gemayel protestaba ese día en contra de la evaluación a la que se quiere someter al magisterio nacional a punta de bayonetas, toletes, cárcel y despidos. Aunque la realización del examen docente en Chiapas estaba programada para el 11, 12 y 13 de septiembre, fue adelantada subrepticamente para el 8 de diciembre con el objeto de darle un madrugete a los maestros opositores. Los trabajadores de la educación del estado respondieron movilizándose.

Cuenta el periodista Arturo Cano que “David era siempre el primero en llegar a la escuela. La mayoría de las veces firmaba a las 7:10. Aunque tenía apenas unos meses de director encargado —todas las responsabilidades, ninguno de los beneficios—, su trabajo ya se notaba. Frente a la dirección dejó a medias —cimientos, la estructura de lo que será el techo— el comedor que estaba construyendo con el dinero de la parcela escolar y el trabajo de los padres de familia.”

Su padre, David Ruiz, maestro como él, decía que su “hijo tiene tres madres, la que le dio la vida, la Gloriosa Escuela Normal Rural Mactumactzá que lo formó y que él como yo somos hijos de ella y la última es la escuela primaria Jesús Agripino que lo cobijó y despidió de este mundo”.

Chiapas tiene una larga tradición de lucha magisterial. En ese estado se formó en diciembre de 1979 la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Allí existen dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La 7 (maestros federales) la 40 (profesores estatales). David Gemayel Ruiz era integrante de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40.

La muerte del profesor Gemayel no es un hecho aislado. Los docentes chiapanecos han vivido en carne propia la represión desde los inicios de su movimiento. Los ejemplos son múltiples. En 1987, en Tuxtla Gutiérrez, las huestes de Carlos Jonguitud Barrios, comandadas en la entidad por José Luis Andrade Ibarra, asesinaron a golpes al maestro Celso Wenceslao López. Nunca se castigó a los responsables del crimen.

Recientemente, en junio de 2013, los porros al servicio de Juan Díaz de la Torre, dirigente nacional del SNTE al que el secretario Aurelio Nuño reconoce como líder ejemplar, golpearon bárbaramente a decenas de profesores democráticos en los trabajos del 26 Congreso sindical de la sección 7. A pesar de ello, los docentes disidentes ganaron la dirección sindical en el estado.

Las autoridades venden su reforma educativa a la opinión pública diciendo que ha permitido que el Estado recupere la rectoría del sector. Sin embargo, en Chiapas dirige

la Secretaría de Educación del estado un peculiar personaje: Ricardo Aguilar Gordillo. Integrante del primer comité ejecutivo democrático de la sección 7, plazeado por todo el país entre 1979 y 1985 por los entonces integrantes del Movimiento de Acción Popular, fundador de la corriente sindical Reflexiones, en 1989 traicionó el movimiento y se sumó a las filas de Elba Esther Gordillo.

Como resultado de la alianza de la maestra con el entonces gobernador Juan Sabines, Aguilar Gordillo, un egresado de la Normal Rural de Mactumatzá nacido en el municipio de Venustiano Carranza, fue designado como titular de la secretaría de Educación en la entidad, sin tener merito académico alguno. Al tomar posesión como mandatario estatal, Manuel Velasco Coello lo ratificó en el puesto, como parte de la alianza con el SNTE. Y, aunque la gestión del maestro Aguilar fue desastrosa y sumamente cuestionada, siguió al frente del despacho hasta abril del 2016, como muestra irrefutable de la profundidad de los cambios impulsados por la reforma educativa.

David Ruiz, dijo a las madres de familia de su escuela de su hijo: “Un compañero maestro me dijo que la sangre de mi hijo es ya fertilizante para que esta lucha siga adelante, para que ya no estemos agachados frente a un gobierno que mata maestros y desaparece estudiantes. La solución no es la violencia, ni la venganza. Es organizarse...”

A los maestros chiapanecos, David Ruiz les pidió el 12 de diciembre de 2015, con la voz quebrada, que “el sacrificio de su hijo no sea en vano”. Luchemos – solicitó – “por lo que es justo y nuestro, que el miedo y el sentimiento de dudas salgan de nuestras mentes y luchemos como siempre lo hizo mi

hijo, los tiempos no están para estar debajo del pie de nadie y menos de un gobierno asesino como el que tenemos”.

“El maestro se quebraba a momentos, pero tomaba fuerzas y nuevamente levantaba la voz de un padre orgulloso por un hijo que vivía de acuerdo a lo que pensaba y decía”, reza un boletín del grupo magisterial.

Los cuatro de Oaxaca

Al profesor Roberto Abel Jiménez le llaman “El Abuelo” por su prematuro pelo cano. Al detenerlo, los policías lo golpearon fuertemente. Las huellas de la agresión pueden verse en su rostro.

En las fichas policiacas que fueron filtradas a los medios de comunicación, se le presenta como un profesionalista desobligado y violento, dedicado a crear problemas, desinteresado por la educación y los jóvenes. Está acusado de robo calificado con violencia de material de seguridad por más de medio millón de pesos.

Sin embargo, sus alumnos, los padres de familia y sus compañeros cercanos dicen otra cosa sobre él. Estela es madre de una alumna del docente preso en Almoloya. Está indignada con el arresto. Según su hija, él es el mejor maestro de historia que jamás ha tenido. Y ahora, está sin docente y sin clases.

Estela escuchó que a alguno de los maestros presos lo acusa el SNTE de robar libros de texto gratuitos. “Los están usando nuestros hijos”, dice la madre de familia. Y pregunta a quien corresponda: “¿quieren que se los devolvamos?”.

El profesor Jiménez ha cursado diversos estudios. Es egresado de la Normal Superior de Oaxaca y estudió Dere-

La novena ola magisterial
cho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene una gran habilidad para ejecutar instrumentos musicales. Apasionado de la lectura, ha logrado hacerse de una notable biblioteca.

Comprometido con actividades comunitarias para recuperar el espacio público, es miembro de una organización de trabajo barrial: el Colectivo de la Colonia Volcanes.

Según la agrupación sindical “Nuestra clase”, varios activistas que participaron de la lucha en 2006 tienen en la más alta estima a Abel. Es —asegura uno de ellos— uno de los profesores de los “que más he aprendido en mi vida, como compañero y como amigo ha brindado su apoyo a todo tipo de luchas. Habla de frente, con franqueza y congruencia y eso les molesta a muchos, sus acciones son congruentes con sus palabras y eso le duele al gobierno”.

También se han dicho cosas horribles de Othón Nazariiega Segura. Las autoridades lo responsabilizan de delitos como el de robo agravado, contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena, en la toma de las instalaciones de El Tule, y daños a instalaciones de la Octava Región Militar en la ciudad de Oaxaca.

Othón tiene 38 años de edad. Cuando el movimiento magisterial democrático nació en Oaxaca en 1980, él apenas tenía cinco. A pesar de eso, supo de esta lucha por su madre, la profesora Guillermina Segura Pérez, que trabajó en la enseñanza pública durante 36 años.

Nazariiega Segura es licenciado en Educación Primaria y en Educación Secundaria, con especialidad en matemáticas. Tiene, también, una maestría en Computación. Aunque actualmente labora en la primaria de la colonia Hé-

roes de San Jacinto, ha enseñado también en primarias de los Loxicha, en la Sierra Sur, y en varios otros municipios de Valles Centrales. Le encantan los deportes. Es bueno para el fútbol y el basquetbol. Y es un avezado jugador de ajedrez.

A otro de los detenidos que le encanta el ejercicio es a Efraín Picaso Pérez. De hecho, es licenciado en Educación Física y en nivel medio superior de Geografía. A sus 44 años, sus compañeros y alumnos aseguran que es un buen futbolista. Es representante sindical del Sector Estatales de la sección 22. Como sindicalista es conocido por consultar con sus bases en todas y cada una de las decisiones importantes, y comprometerse con lo que ellas acuerdan.

Juan Carlos Orozco Matus tiene 39 años de edad. Es ingeniero en sistemas computacionales y licenciado en la especialidad de Educación Matemática. Ha sido profesor frente a grupo durante 10 años. Fue maestro de secundaria en la población Río Grande, en la región Costa. Ahora trabaja en la secundaria de Santa María Huamelula, en el Istmo de Tehuantepec. Representa gremialmente al Sector Salina Cruz.

¿Qué relación hay entre la imagen distorsionada que la policía ha difundido sobre Roberto Abel Jiménez, Othón Nazariaga Segura, Efraín Picaso Pérez y Juan Carlos Orozco Matus y la realidad? Ninguna. Todos son profesores con años de enseñar frente al grupo, que han trabajado en comunidades pobres del estado, preocupados por su capacitación, formados políticamente e interesados en el deporte.

Es cierto que los cuatro son combativos sindicalistas y luchadores sociales. Es verdad que, en acatamiento de los acuerdos de asamblea general, realizaron actos de protesta. Pero su vida profesional y gremial nada tiene que ver con la inescrupulosa caricatura que se ha hecho de ellos.

Tanto el arresto como el proceso contra los cuatro de Oaxaca están llenos de anomalías jurídicas. Según Edith Santibáñez Bohórquez, abogada de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22, en el proceso hay multitud de vicios, inconsistencias e irregularidades. Por supuesto, a las autoridades les tiene sin cuidado.

Los cuatro no son delincuentes, son rehenes políticos. Su detención y confinamiento son una advertencia al resto de sus compañeros que rechazan la falsa Reforma Educativa. Si no se pliegan, lo que sigue hacia ellos es el garrote, es el mensaje que manda la autoridad. Sin embargo, lejos de inhibir la participación magisterial, el encierro de los cuatro profesores ha encendido aún más la llama de la indignación.

Los rehenes de la reforma educativa

Acíel Sibaja Mendoza comenzó a dar clases en Oaxaca en 1994. Enseñaba simultáneamente los seis grados de la primaria unitaria en la comunidad de Santa Catarina Tlaxica. Para llegar allí viajaba en tren más de seis horas, saltaba a una brecha con su equipaje con el ferrocarril en movimiento y caminaba por el monte tres o cuatro horas.

La escuela Niños Héroes de Chapultepec, de Santa Catarina Tlaxica, contaba con un aula para los estudiantes de los distintos grados. Como se encontraba en pésimo estado, Acíel emprendió la realización de tequios para restaurarla, junto con padres de familia y autoridades municipales. Preocupado por la salud de la población, impulsó con un médico pasante, que hacía su servicio social, diversas actividades de prevención. Simultáneamente gestionó material didáctico y uniformes escolares y deportivos para

los alumnos. De paso organizó pequeños torneos de basquetbol y atletismo con los niños.

En 1997 se trasladó a San Lorenzo Papalo Bautista, municipio que actualmente tiene menos de 3 mil habitantes. Allí repitió con éxito la experiencia de Tlaxica para mejorar la escuela, promover la sanidad y estimular el deporte. Y lo mismo hizo un año más tarde en Santa María Almoloyas, y dos después en San Pedro Jaltepetongo Cuicatlán.

Ese compromiso con la comunidad dio frutos y reconocimientos. Ya como maestro de la primaria Artículo 23 Constitucional, de San José del Chilar, su grupo obtuvo, por tres años seguidos, el primer lugar de conocimiento de usos y costumbres y lenguas originarias (cuicateca, chinanteca, mixteca y mazateca).

Esta vocación misionera del profesor no es accidente. Le viene de familia. Nacido en Jalapa de Marqués en 1974, en el seno de una familia campesina, estudió primero la licenciatura en educación primaria en la Universidad Pedagógica Nacional y luego una serie interminable de diplomados y cursos de actualización. Todos su hermanos son médicos o maestros.

Su compromiso con los niños, los padres de familia, la educación y las autoridades municipales no es un hecho aislado. Por el contrario, es común entre los maestros de la entidad. Su sindicato lo promueve como orientación a seguir. Y por eso reivindica la necesidad de que cualquier política educativa en Oaxaca parta de reconocer sus especificidades culturales, económicas, sociales y orográficas.

Esta trayectoria pedagógica llevó a que Aciel fuera escogido el 26 de septiembre de 2012 como secretario de Fi-

nanzas de la sección 22. Fiel al mandato de sus bases, rechazó una reforma educativa ajena a la realidad oaxaqueña y cumplió con los acuerdos de la asamblea estatal.

Esta lealtad al movimiento magisterial y a las comunidades lo tiene hoy en el Centro de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora, junto con secuestradores, narcotraficantes y reos de alta peligrosidad. Aciel fue detenido el pasado 14 de abril con lujo de violencia, sin presentarle orden de aprehensión alguna, por personas vestidas de civil que viajaban en automóviles sin placas, y fue prácticamente desaparecido y trasladado ilegalmente a miles de kilómetros de su domicilio.

En el oficio con que se busca justificar su envío a Sonora desde Oaxaca, Heriberto Antonio García, uno de los cómplices del ex gobernador Ulises Ruiz en la represión a la APPO en 2006, dice que la presencia de Aciel en un penal oaxaqueño pone en grave riesgo la seguridad del centro, debido a que pertenece a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Contra Aciel se desató, a partir de ese momento, una inescrupulosa campaña de estigmatización. Diversos medios lo presentaron como el rey Midas del magisterio oaxaqueño, “el operador financiero del cártel de la sección 22” y lavador de recursos de procedencia ilícita.

Es falso que Sibaja Mendoza sea delincuente. Su detención busca debilitar al magisterio oaxaqueño, que junto con miles de maestros de todo el país acordó irse el próximo 15 de mayo a un paro indefinido.

El secretario Aurelio Nuño, está desesperado. Las medidas de fuerza que ha tomado en contra de los profes

de Oaxaca no han sido eficaces. A pesar de que desde el 21 de julio del año pasado las autoridades congelaron ilegalmente las cuentas de la sección 22 y las personales de varios de sus dirigentes, y se dejó de pagar a los comisionados sindicales, las protestas no cesan. Los maestros de base han seguido cotizando solidariamente, y Aciel, como secretario de Finanzas, ha sido el responsable de manejar ese dinero. A esas cooperaciones (absolutamente legales) el gobierno las llama fondos de procedencia ilícita.

Aciel Sibaja Mendoza no es el único responsable de la estructura sindical oaxaqueña que se encuentra tras las rejas para tratar de doblar la resistencia de los docentes oaxaqueños a la reforma educativa. Entre el 28 y 29 de octubre pasados fueron injustamente encarcelados cuatro maestros más: Roberto Abel Jiménez, Othón Nazariaga Segura, Efraín Picaso Pérez y Juan Carlos Orozco Matus. El 10 de mayo le tocó el turno a Adrián Ramírez Castillo. El 10 de junio se aprehendió a Francisco Villalobos y Rubén Núñez. Todos tienen trayectorias profesionales intachables y compromiso con sus estudiantes y padres de familia.

Los ocho dirigentes de la sección 22 presos son rehenes del gobierno federal. Su detención es, simultáneamente, una advertencia de lo que puede suceder a otros maestros de mantener su rechazo a la reforma educativa y moneda de cambio con el movimiento para que se desmovilice.

La táctica de tomar rehenes para golpear movimientos sociales forma parte del arsenal favorito del Grupo Atlacomulco — al que pertenecen el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario Nuño Mayer — para lidiar con la inconformidad social. Así lo hizo el mandatario con los campesinos de Atenco hace 10 años.

Los maestros detenidos son presos políticos. En lugar de frenar la participación de sus compañeros, la detención de los ocho ha encendido aún más la llama de la indignación en el estado.

Aulas de emergencia

La maestra Érika Elizabeth Núñez Montes hizo de la banqueteta un aula de emergencia. Cada día, en la calle Nicolás García 60, Iztapalapa, frente a la escuela Nicolás García, en la que enseñó durante más de 10 años, imparte clases de quinto año de primaria.

El precario salón de clases de la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza funcionó en el turno vespertino durante varios días desde que el pasado 7 de marzo un grupo de funcionarios irrumpió en la escuela para notificarle a la maestra Núñez que, a partir del 1º de marzo, estaba despedida.

A la profesora Érika la cesaron en su trabajo a pesar de que era querida y respetada por sus alumnos y los padres de familia, y de que no había faltado a clases. Durante años, su labor frente a grupo ha sido intachable. Desempeñó siempre su función con responsabilidad y compromiso. Sin embargo, fue cesada por negarse a presentar un examen al desempeño docente, mal hecho y peor aplicado, que no consideró ni su plan de trabajo ni las condiciones en que tuvo que enseñar a los niños.

La escuela en que la maestra Núñez Montes educa está enclavada en una zona de la Ciudad de México particularmente violenta. Apenas el 19 de octubre de 2015, no muy lejos de sus instalaciones, apareció colgado el cuerpo de un hombre. Los alumnos que asisten a ella provienen de

familias en su mayoría humildes. No son pocos los que han crecido en hogares rotos. La profesora, con 13 años de servicio (10 de ellos en la Nicolás García), sabe cómo enfrentar estos desafíos, que ningún examen para medir conocimientos puede evaluar.

Al enterarse del despido de la maestra, los padres de familia se indignaron y exigieron a las autoridades escolares que fuera reinstalada. Y cuando éstas se negaron a devolverle su trabajo, apoyaron que siguiera dando clases, aunque fuera en la calle. Están dispuestos a salir a marchar para que ella regrese. Mejor que nadie, ellos saben lo que Érika ha hecho por sus hijos. Viven su cese como una arbitrariedad, como una enorme injusticia.

Érika Elizabeth Núñez Montes es una de los 3,360 docentes despedidos en el país por no presentar la prueba al desempeño. A la que hay que añadir los miles de cesados por participar en el paro de la CNTE. Al igual que en su caso, en muchos lugares del país los padres de familia se han solidarizado con ellos. La lista es larga: Durango, Tlaxcala, Sinaloa, Campeche, Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Guerrero y un largo etcétera. Han solicitado pacíficamente a los funcionarios educativos la reinstalación de sus profesores y, cuando no les han hecho caso, han ocupado escuelas, marchado y tomado oficinas públicas. Como en Iztapalapa, han levantado aulas de emergencia.

Las formas de lucha varían de estado a estado. En Campeche, los maestros y maestras cesados asisten a sus planteles y cumplen su horario, aunque no puedan ingresar a los salones de clase. Los padres de familia firman la lista de asistencia de los docentes, para dar fe de su presencia en

las escuelas. El profesor Uk Tuz explicó a *La Jornada*: “Hoy me presenté como de costumbre todas las mañanas; nuevamente intenté ingresar al plantel, pero estaba la directora, que me dijo que seguían en pie las acusaciones de la Secretaría y, para dar fe de que acudí a mi labor, recabé las firmas de los padres de familia que me estuvieron apoyando y me retiraré a la una de tarde, para que no digan que abandono mis labores”.

Las autoridades gubernamentales han respondido con sordera, prepotencia y represión. El 17 de marzo de 2016, en Durango, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a dos profesores que protestaron contra los despidos afuera del Centro Cultural Bicentenario, donde el gobernador Jorge Herrera Caldera rindió su sexto informe. Están acusados de motín y privación de la libertad. La noche anterior, policías realizaron al menos cinco cateos en casas de docentes inconformes. Una de las esposas de los maestros dijo: Me amenazaron cuando no encontraron a mi marido; me dijeron que si no decía dónde estaba me lo iban a regresar muerto. Según la fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza, existen 20 órdenes de aprehensión más contra otros docentes. Y, en Tlaxcala, elementos de seguridad agredieron a docentes y padres de familia que protestaron afuera de la Unidad de Servicios Educativos. La maestra Citlali Ortiz Cano recibió varios golpes de los uniformados.

En diversos estados se han efectuado movilizaciones magisteriales de protesta contra los despidos de sus compañeros. En Zacatecas, los trabajadores de la educación tienen tomada la Secretaría de Educación, y ya encarrerados, ocuparon también el Congreso del estado. En Mazatlán, Sina-

loa, iniciaron un plantón en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura y colocaron una ofrenda floral con dedicatoria a la muerte del SNTE, que traicionó a los maestros de base.

Los profesores cesados por la SEP por no presentarse el examen al desempeño no son ni irresponsables ni malos maestros. Por el contrario, la mayoría de ellos son excelentes profesionistas, comprometidos con su trabajo, queridos por sus alumnos y por los padres de familia. La solidaridad con que se les ha cobijado así lo demuestra. Unos no se presentaron a la evaluación porque fueron requeridos para hacerlo con muy pocos días de anticipación. Otros, porque rechazan la falsa reforma educativa y decidieron no avalarla con su presencia. Algunos más porque consideraron que era oprobioso que, después de años de servicio y buenos resultados prácticos, se les sometiera a la humillación de tener que demostrar que tenían los conocimientos para ejercer. Finalmente, varios estimaron que no tenían por qué renunciar a derechos adquiridos y permitir que se les aplicara una nueva legislación de manera retroactiva. Por lo pronto, el gobierno federal tiene un nuevo problema en puerta.

CAPÍTULO IX
OAXACA EN LAS BARRICADAS.
El asesinato de Nochixtlán

Arde el Istmo

Pablo Andrés García Cruz es párroco de la iglesia Martes Santo, en Juchitán, Oaxaca. El pasado miércoles 5 de junio ofició una misa en la carretera Panamericana, a la altura del entronque Canal 33. Allí se encontraban maestros y padres de familia que establecieron un retén carretero.

En su homilía —narró Ixtel Welt—, el sacerdote García Cruz explicó que los profesores bloquean las vialidades no por gusto o por capricho sino para defender una causa noble y su propio trabajo, que es sagrado. Los maestros —dijo— ya quisieran estar en la escuela dando clases, en lugar de padecer incomodidades.

El presbítero hizo un llamado al secretario Aurelio Nuño, a ver las cosas serenamente, no con intereses y dobleces, y a sentarse a dialogar verdaderamente con los profesores, no con mentiras ni falsas promesas. Demandó no enviar a las fuerzas federales a reprimir a los docentes. Y le preguntó: ¿cómo no se le conmueven las entrañas? ¿Qué entrañas tiene?

La policía —advirtió el presbítero— debe considerar que no está enfrentando a una bola de gente que no sabe lo

La novena ola magisterial que hace, sino a gente preparada, estudiada, que ha estado en una universidad pedagógica. “Es — dijo — gente que piensa.”

Los asistentes al rito oraron en zapoteco y español, se tomaron las manos y rezaron pidiendo por el diálogo y la paz. Presentes en el acto, los familiares de los profesores Francisco Villalobos y de Heriberto Magariño, dirigentes de la sección 22 detenidos por el gobierno, pidieron por su liberación.

El padre García Cruz no es el único cura que defiende los retenes populares en las vialidades. Mientras caminaba por la barricada de la comunidad de Santa María Huamelulla, en la costa oaxaqueña, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, manifestó su total respaldo a los maestros. Existe — explicó — mucha molestia por los bloqueos y cierres carreteros que encabezan los profesores, pero si no se hace así, este gobierno seguirá haciendo de las suyas. Finalmente urgió a las autoridades federales y estatales a privilegiar el diálogo y evitar la represión.

La solidaridad de los religiosos hacia las protestas docentes es un indicador de hasta dónde la lucha magisterial en Oaxaca ha dejado de ser un movimiento exclusivamente gremial contra la reforma educativa y se ha transformado en una enorme movilización social. La gota que derramó el vaso fue la arbitraria detención de los dirigentes de la sección 22, Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Los ánimos del pueblo oaxaqueño están encendidos. Y como parte de su enojo, desde la noche del domingo 12 de junio han hecho los bloqueos carreteros y las barricadas que han brotado como hongos.

Esos bloqueos surgieron espontáneamente. No fueron un acuerdo de la asamblea estatal de la sección 22, máximo

órgano de dirección del movimiento. Fueron convocados en puntos clave de la geografía regional por el tañido de las campanas de las iglesias y el estallido de los cohetes. Cercaron el estado y dificultaron enormemente el traslado y abastecimiento de las fuerzas policiales responsables de la represión.

Los funcionarios oaxaqueños fueron, durante casi una semana, una especie de fantasmas que hacían declaraciones desde lugares desconocidos y los difundían mediante las redes sociales. Su presencia fue virtual. Nadie los vio en las calles. La administración pública se paralizó. Simultáneamente, desobedeciendo al gobernador, centenares de municipios y autoridades ejidales y comunales expresaron públicamente su apoyo a los profesores y exigieron al gobierno federal sentarse a dialogar.

Los 17 cierres carreteros paralizaron el Istmo. El jueves 16, Carlos Beas, dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) describía lo vivido en la región como si se estuviera en “una zona de guerra”. Hay —decía—, “tremendo bloqueo en Tequisistlán y tráilers atravesados en la carretera. La situación es más leve en Jalapa de Marqués, donde no hay mucha gente pero permanece en la carretera. En Tehuantepec se levantó el bloqueo del caracol pero se mantienen barricadas en la ciudad. En Juchitán, todo el pueblo está en el cruce 33. ¡Hasta parece una vela sobre la carretera!”.

Ese mismo día, a las 4:30 de la mañana, la policía rompió el bloqueo con gases lacrimógenos y balas de goma en Magdalena Tequisistlán y el de Jalapa del Marqués, para hacer base en Ciudad Ixtepec. De inmediato, la población, armada con palos y machetes, volvió a cerrar las carreteras.

En Ixtepec se libró también un fuerte enfrentamiento. Un maestro participante lo describió con detalle: “¡Dimos pelea por más de tres horas! Se platicó con la policía, pero fue imposible convencerlos. Dijeron que ellos venían a desalojar”.

“Entonces empezó la lucha. Padres, maestros, taxistas, alumnos y el pueblo en general, armados con piedras, palos y machetes dieron pelea en tres frentes. La policía no podía somernos. Se destrozó un autobús y los policías destruyeron las motos de los compañeros y persiguieron a la gente en patrullas y en las motocicletas que nos quitaron a los habitantes de Ixtepec.

“Dos helicópteros volaban muy bajo. Los negocios nos mandaban cohetes, que es con lo que nos defendimos. La policía disparó gas pimienta y balas de hule. Varios compañeros fueron lastimados. Los pobladores lograron agarrar a uno de los gendarmes que disparaba contra ellos, pero sus compañeros lo rescataron. Finalmente se despejó la carretera.

“Los policías se fueron rumbo a Juchitán. Nosotros volvimos a bloquear la carretera. No tenemos líderes, somos sólo los maestros y el pueblo.”

En el puerto de Salina Cruz, una multitud impidió el acceso a la refinería Antonio Dovalí Jaime. Se hizo entonces un fenomenal atasco, con una fila de más de 25 kilómetros de camiones y automóviles varados, provenientes del estado de Veracruz. En varias comunidades comenzó a escasear el combustible y hasta el dinero en efectivo.

Cerca de la medianoche del viernes, más de mil policías federales, estatales, y de la gendarmería, se enfrentaron con maestros y padres de familia.

A pesar de los desalojos, el 22 de junio, se mantenían siete bloqueos en el Istmo: Matías Romero, Juchitán canal 33, Sta. Ma. Huamelula, Tehuantepec en el Puente Caracol, Jalapa del Marqués con paso para vehículos pequeños, Tequisistlán con paso para carros particulares chicos, y Zanatepec.

Sin embargo, en lugar de atender los llamados al diálogo hechos por los sacerdotes católicos y autoridades municipales, el gobierno federal intensificó la represión. En los hechos, impuso un estado de sitio.

La masacre de Nochixtlán

Jesús Cadena Sánchez Meza tenía 19 años cuando, el domingo 18 de junio, una bala disparada por la policía le perforó el estómago y le quitó la vida. Era catequista en su comunidad, estaba a punto de terminar el bachillerato, quería estudiar ingeniería civil y vendía maíz en grano en el mercado.

A Jesús lo mataron cuando iba a la parroquia de Nochixtlán a ayudar a los heridos de la protesta. Las campanas repicaron y él salió de su casa a echar la mano. Le calaban hondo las injusticias y era muy solidario. Frente a la iglesia, distribuía botellas de agua y refresco de una camioneta para contrarrestar el efecto del gas lacrimógeno en ojos y garganta, cuando los uniformados le dispararon.

Patricia Sánchez Meza, su madre, responsabiliza al presidente Enrique Peña Nieto del asesinato de su hijo. “Nos mandó a acribillar —le dijo a la cadena Al Jazeera. Porque él no se fue contra los maestros: se fue contra el pueblo”. Y al diario *El País* le explicó: “El tráiler que quemaron fueron los federales los que lo quemaron, no fueron los maestros. No

había cantidades de maestros. Había padres de familia, que estaban apoyando”.

Jesús era querido en su pueblo. Con su foto de generación al frente del cortejo, cientos de vecinos acompañaron su ataúd hasta el cementerio para despedirlo el martes 20 de junio.

Según la sección 22, además de Jesús, fueron asesinados el 18 de junio sangriento en Nochixtlán otras nueve personas más: el profesor de Educación Indígena, Andrés Aguilar Sanabria; Yalid Jiménez Santiago, de 29 años, mixteco originario de Santa María Apazco; Anselmo Cruz Aquino, de 33 años y comerciante de Amatlán; Iralvín Jiménez Santiago, de 29 años y regidor de Salud; Óscar Nicolás Santiago, de 22 años y campesino de Las Flores Tilantongo; Óscar Aguilar Ramírez; Omar González Santiago, originario de Palo de Letra, Tlaxiaco; Antonio Perez García, estudiante de secundaria; César Hernández Santiago, y Silverio Sosa Chávez, campesino de San Pedro Ñumí, Tlaxiaco.

En Viguera, en la capital de Oaxaca, las fuerzas federales ultimaron a Juvan Azarel Mendoza de 18 años.

Nochixtlán, es una ciudad en la Mixteca oaxaqueña, localizada a 83.7 kilómetros al noroeste de la ciudad de Oaxaca, en la carretera que comunica ese estado con Puebla y la Ciudad de México. Su nombre proviene del náhuatl y significa *Lugar de la grana o cochinilla*, el insecto parásito del nopal del que se extrae el pigmento rojo carmín, que forjó la grandeza económica oaxaqueña durante la colonia. Comunidad indígena de origen mixteco, no mayor a 18 mil habitantes. Nochixtlán es un municipio dedicado fundamentalmente al comercio, realiza cada domingo, su día de mercado. Hoy,

además, es una de las localidades que ocupa un lugar destacado en el Museo de los horrores nacionales.

El desalojo del bloqueo de Nochixtlán que desembocó en la masacre, comenzó, según el comisionado de la Policía Federal Enrique Galindo, el 18 de junio a las 7 de la mañana. En cambio, de acuerdo con la versión del gobernador Gabino Cué, inició hasta las 10 de la mañana.

Después de desalojar la vialidad en media hora —dijo el comisionado Galindo en una de tantas entrevistas a la radio— “vivimos una emboscada. Llegaron grupos con armas y bombas molotovs”. A esa hora —explicó— se empezaron a escuchar detonaciones de armas de fuego, y pidió apoyo de helicópteros. A las 11:30 llegaron policías con armas de fuego.

El día de los hechos, a las 3 de la tarde, un comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad desmintió que los policías llevaran armas. “Los elementos de la Policía Federal que participan en el operativo no se encuentran armados ni portan tolete”, dijo el informe oficial.

Múltiples fotos y videos, tanto en las redes como de agencias informativas desmintieron la versión gubernamental. Los policías iban armados desde el primer momento del operativo y no dudaron en disparar.

Uno de los testigos directos, el profesor Roberto le dijo al periodista Arturo Cano que sólo la policía disparó. “Yo vi bajar a un grupo de policías —contó—, pero iban de civil. Cargaban garrafrones y fueron rociando de gasolina los vehículos que estaban a los costados de la carretera. Cuando avanzaron, los uniformados fueron prendiendo fuego. Y después comenzaron a disparar. Los disparos fueron directos. A uno de los compañeros lo ejecutaron a corta

distancia y a otro le dispararon cuando estaba escondido debajo de un coche.”

El corresponsal de *La Jornada* Jorge Arturo Pérez tomó fotografías de los uniformados armados a las 10:15 de la mañana.

Ese día en Nochixtlán se encontraban reunidos más de 2 mil pobladores mixtecos de San Andrés Sinaxtla, Yanhuitlán, Suchixtlahuaca y Tilantongo, que habían bajado a comprar y vender al día de plaza. Cuando las fuerzas federales atacaron a los maestros y a los padres, la multitud cercó a los policías. Lo que se dio —contó Galindo a Adela Micha— “fue una especie de emboscada”. Las fuerzas federales respondieron lanzando más gases y disparando armas de alto poder contra hombres, mujeres y niños, ancianos y jóvenes.

La orden que recibieron —según cuentan Genaro Bautista y Franco Gabriel— fue: “tiren a matar”. La cumplieron cabalmente. Fueron asesinados once personas: maestros, estudiantes y campesinos indígenas. Heridos más de 50.

Dar la instrucción de desalojar violentamente un acto de protesta en un mercado indígena es una absoluta irresponsabilidad. Los pequeños comerciantes y quienes habían ido a hacer sus compras respondieron solidarizándose con los agredidos. Los mixtecos son un pueblo guerrero. Lo han sido por siglos. Agredirlos y suponer que no van a responder es un acto de ingenuidad. En Nochixtlán la Policía Federal actuó con ignorancia y torpeza. Prohibió que los hospitales y centros de salud atendieran a los heridos. Su respuesta a la ira popular fue criminal. Enardecida, la multitud prendió fuego al Palacio Municipal.

Otros desalojos igual de violentos se produjeron en Hacienda Blanca y en Viguera. Al igual que en Nochixtlán,

el helicóptero lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes y la policía disparó y atacó al personal médico que atendía heridos. En Hacienda Blanca, grupos de francotiradores agredieron a los pobladores. Un menor fue asesinado.

No hace falta ser adivino para vislumbrar que la política de Aurelio Nuño hacia los maestros oaxaqueños (y del resto del país) iba a precipitar una crisis como la que se vive. Como le dijo un viejo maestro nochixtleco del PRI a Arturo Cano: “El señor secretario no conoce este país, menos a los estados del sur. Y no sabe nada de la escuela pública. ¿Cuándo lo hemos escuchado hablar de educación? Sólo habla de reprimir. Nosotros solamente queremos diálogo, y él piensa que la educación se resuelve con balas, con muertos y heridos”.

Basta conocer mínimamente la historia del movimiento magisterial en la entidad para saber que algo así iba a suceder. La arrogancia, ineptitud política y compromisos que el secretario de Educación tiene con las cúpulas empresariales transformaron un asunto meramente pedagógico en un grave problema político nacional.

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

Pertenece a una generación que tras el 68 mexicano se vinculó a movimientos populares alternativos. Actualmente es coordinador de *Opinión* y articulista de *La Jornada*.

A mediados de los setenta fue organizador de sindicatos independientes. Fue fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y asesor de organizaciones campesinas y cafetaleras. Participó en los Diálogos de San Andrés y fue secretario técnico de la Comisión de Seguimiento y Verificación para los Acuerdos de Paz en Chiapas.

Ha formado parte de proyectos de prensa crítica como *Información Obrera*, de asociaciones de promoción al desarrollo de base, y de centros de investigación como el Ceccam.

Entre sus libros se encuentran: *Chiapas: la guerra y la paz y la paz y Chiapas: la nueva lucha india, Sentido contrario*. Compiló con Carlota Botey y Julio Moguel *Autonomía y nuevos sujetos sociales de desarrollo rural*; con Ramón Vera Herrera, *Acuerdos de San Andrés*; y con Francisco Pérez Arce, *Las luchas magisteriales 1979-1981*.

Queda prohibida su venta.
Distribución gratuita.

Todos los derechos reservados.
junio 2016.